



Instituto Nacional de  
Transparencia, Acceso a la  
Información y Protección de  
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la  
solicitud:** Fiscalía General de la República  
**Folio:** 330024622002060  
**Expediente:** RRA 11901/22  
**Comisionado Ponente:** Francisco Javier Acuña  
Llamas

**Visto** el expediente relativo al recurso de revisión interpuesto ante este Instituto se procede a dictar la presente resolución con base en los siguientes:

## **ANTECEDENTES**

I. El 10 de junio de 2022, la persona solicitante presentó una solicitud de acceso a información pública, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, mediante la cual requirió a la Fiscalía General de la República, lo siguiente:

**Modalidad preferente de entrega de información:**

Entrega por Internet en la PNT

**Descripción clara de la solicitud de información:**

Solicito la versión pública de la base de datos o las bases de datos que conforman el Sistema Integral de Información Contra la Delincuencia Organizada con el que cuenta el Centro Nacional de Análisis de Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI) de esta Fiscalía General. (Sic)

II. El 09 de agosto de 2022, la Fiscalía General de la República respondió, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, a la solicitud de acceso a información presentada por la persona solicitante, en los siguientes términos:

SE ANEXA ARCHIVO CON FORMATO PDF, PARA ABRIRLO UTILICE EL PROGRAMA ADOBE ACROBAT READER. EN CASO DE TENER ALGÚN PROBLEMA CON EL ARCHIVO ADJUNTO FAVOR DE COMUNICARSE AL TEL.: 5346-5716 O AL CORREO ELECTRÓNICO leydetransparencia@pgr.gob.mx. O PUEDE ASISTIR DIRECTAMENTE A CALLE INSRGENTES 20, COLONIA ROMA NORTE, DELEGACION CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO (Sic)

El archivo adjunto contiene el oficio número FGR/UTAG/DG/005101/2022, de la misma fecha a la de su recepción, emitido por la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental del sujeto obligado, dirigido a la persona solicitante, mediante el cual informó lo siguiente:

Con fundamento en lo establecido en el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); 1°, 2, 61, 121, 134 y 135 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); así como en el Acuerdo A/072/16, por el cual se crea la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental (UTAG); en relación con su solicitud de acceso a la información, dirigida específicamente a la Fiscalía General de la República, consistente en:

[Se transcribe solicitud de acceso a información]



Instituto Nacional de  
Transparencia, Acceso a la  
Información y Protección de  
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la  
solicitud:** Fiscalía General de la República  
**Folio:** 330024622002060  
**Expediente:** RRA 11901/22  
**Comisionado Ponente:** Francisco Javier Acuña  
Llamas

Se hace de su conocimiento que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 133 de la **LFTAIP**, su solicitud fue turnada para su atención a la unidad administrativa competente de conformidad con las facultades que le confiere, la Ley de la Fiscalía General de la República (**LFGR**), el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (**RLOPGR**) y demás normatividad aplicable.

En consecuencia, posterior a realizar una búsqueda exhaustiva puntualizó que el Sistema Integral de Información Contra la Delincuencia Organizada (**SIICDO**), tiene como objetivo suministrar información para la generación de productos para el fortalecimiento de investigaciones a cargo de diversas autoridades.

En este sentido, el origen del sistema materia del presente, atiende a las atribuciones conferidas a la entonces Procuraduría General de la República ahora Fiscalía General de la República encaminadas a la Procuración de Justicia.

Lo antes enunciado, se complementa atendiendo a las atribuciones conferidas al Centro Nacional de Análisis de Información para el Combate a la Delincuencia (**CENAPI**), para suministrar oportunamente a las unidades administrativas y órganos de la institución la información disponible que requieran para el desempeño de sus funciones, a través de la implementación de sistemas y mecanismos de sistematización y análisis de la información y la alimentación y actualización de bases de datos.

Ahora bien, es menester señalar que el **SIICDO** cuenta con una estructura de 25 módulos y atendiendo a la motivación y naturaleza de su origen como una herramienta para dotar a las autoridades de elementos útiles, contiene datos inherentes a las investigaciones.

Al tenor de lo expuesto, se precisa que el sistema fue diseñado para fines de captura y consulta de información, misma a la que la legislación aplicable en materia penal le otorga una determinada clasificación, por lo que, con la finalidad de salvaguardarla, dicho sistema no contempla la descarga de registros.

Derivado de lo anterior, el **CENAPI** se encuentra ante una imposibilidad técnica para proporcionar una versión pública de la base de datos o las bases de datos que conforman el multicitado sistema, en virtud de que su creación obedece a un uso exclusivo para la concreción de fines institucionales en materia de procuración de justicia, lo que da origen a un impedimento material, ya que en su diseño no fue considerada la generación, exportación y/o descarga de reportes y/o registros que pudieran atender lo solicitado.

Por lo anterior, resulta aplicable el criterio 07/17 emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (**INAI**), el cual es del tenor literal siguiente:

**Casos en los que no es necesario que el Comité de Transparencia confirme formalmente la inexistencia de la información.** La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la



Instituto Nacional de  
Transparencia, Acceso a la  
Información y Protección de  
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la  
solicitud:** Fiscalía General de la República  
**Folio:** 330024622002060  
**Expediente:** RRA 11901/22  
**Comisionado Ponente:** Francisco Javier Acuña  
Llamas

Información Pública establecen el procedimiento que deben seguir los sujetos obligados cuando la información solicitada no se encuentre en sus archivos; el cual implica, entre otras cosas, que el Comité de Transparencia confirme la inexistencia manifestada por las áreas competentes que hubiesen realizado la búsqueda de la información. **No obstante, lo anterior, en aquellos casos en que no se advierta obligación alguna de los sujetos obligados para contar con la información, derivado del análisis a la normativa aplicable a la materia de la solicitud; y además no se tengan elementos de convicción que permitan suponer que ésta debe obrar en sus archivos, no será necesario que el Comité de Transparencia emita una resolución que confirme la inexistencia de la información.**

Si derivado de la respuesta a su solicitud de información le surge alguna duda, puede acudir a esta Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental, ubicada en Avenida de los Insurgentes, número 20, piso 23, Colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06700 en la Ciudad de México; llamar al teléfono (55) 5346 0000, extensiones 505724 y 505716; o bien, escribirnos al correo electrónico [leydetransparencia@pgr.gob.mx](mailto:leydetransparencia@pgr.gob.mx), en donde con gusto le atenderemos

**III.** El 10 de agosto de 2022, se recibió en este Instituto, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, el recurso de revisión interpuesto por la persona solicitante, en contra de la respuesta brindada por la Fiscalía General de la República a su solicitud de información, mediante el cual manifestó lo siguiente:

**Acto que se recurre y puntos petitorios:**

El Sujeto Obligado clasificó la información como reservada sin realizar una prueba de daño. No se advierte en la respuesta a la solicitud con folio 330024622002059 que exista información susceptible de ser clasificada como tal, ya que se solicitaron los campos de ese mismo Sistema Integral y se proporcionaron los siguientes:

1. Actos Terroristas
2. Asaltos
3. Delitos ambientales
4. Delitos Electorales
5. Extorsión
6. Falsificación de Documentos
7. Falsificación de Moneda
8. Individuos
9. Individuos más buscados.
10. Lavado de dinero
11. Libertad de Expresión
12. Narcotráfico
13. Organizaciones
14. Piratería
15. Retratos hablados
16. Robo de Hidrocarburo
17. Robo de vehículos



Instituto Nacional de  
Transparencia, Acceso a la  
Información y Protección de  
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la  
solicitud:** Fiscalía General de la República  
**Folio:** 330024622002060  
**Expediente:** RRA 11901/22  
**Comisionado Ponente:** Francisco Javier Acuña  
Llamas

- 18. Secuestros
- 19. Tatuajes
- 20. Tráfico de indocumentados
- 21. Tráfico de órganos
- 22. Tráfico de piezas
- 23. Trata de personas
- 24. Tráfico de sustancias químicas controladas

En ese sentido, se solicita a este Instituto que valore, a través de una prueba de daño, si esta información, que es de interés público, debe ser entregada o clasificada como reservada y ordene en todo caso la elaboración de una versión pública. (Sic)

**IV.** El 10 de agosto de 2022, la Comisionada Presidenta, Blanca Lilia Ibarra Cadena, asignó el número de expediente **RRA 11901/22** al recurso de revisión y, de conformidad con el sistema aprobado por el Pleno de este Instituto, se turnó a la Comisionada **Norma Julieta del Río Venegas**, para los efectos de los artículos 150 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 156, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

**V.** El 15 de agosto de 2022, la Secretaria de Acuerdos y Ponencia de Datos Personales de la Oficina de la Comisionada Norma Julieta del Río Venegas, con fundamento en el Segundo, fracciones III, V, VII y XII, y Tercero del Acuerdo mediante el cual se confieren funciones a los Secretarios de Acuerdos y Ponencia para coadyuvar con los comisionados ponentes en la sustanciación de los medios de impugnación competencia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, establecidos en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicado el 17 de marzo de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, acordó la admisión del recurso de revisión interpuesto por la persona recurrente en contra de la Fiscalía General de la República, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 156, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

**VI.** El 16 de agosto de 2022, se notificó a la Fiscalía General de la República, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la admisión del recurso de revisión, otorgándole un plazo de siete días hábiles a partir de dicha notificación para que manifestara lo que a su derecho conviniera y formulara alegatos, dando cumplimiento al artículo 156, fracciones II y IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.



Instituto Nacional de  
Transparencia, Acceso a la  
Información y Protección de  
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la  
solicitud:** Fiscalía General de la República  
**Folio:** 330024622002060  
**Expediente:** RRA 11901/22  
**Comisionado Ponente:** Francisco Javier Acuña  
Llamas

**VII.** El 16 de agosto de 2022, se notificó a la persona recurrente, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la admisión del recurso de revisión, y se puso a su disposición el expediente integrado con motivo del medio de impugnación, otorgándole un plazo de siete días hábiles a partir de dicha notificación para que manifestara lo que a su derecho conviniera y ofreciera pruebas o alegatos, dando cumplimiento al artículo 156, fracciones II y IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

**VIII.** El 24 de agosto de 2022, se recibió en este Instituto, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, el oficio número FGR/UTAG/DG/005413/2022, de la misma fecha a la de su recepción, emitido por la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental del sujeto obligado, dirigido a la Comisionada Ponente, mediante el cual manifestó los alegatos siguientes:

### **A L E G A T O S**

#### **PRIMERO. Procedimiento de búsqueda:**

Es preciso mencionar que esta Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental (**UTAG**), cumplió cabalmente con los tiempos y formas previstos en la **LFTAIP** vigente al momento de la interposición de la solicitud, así como con lo dispuesto en los Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atención a solicitudes de acceso a la información pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el doce de febrero de dos mil dieciséis, ya que de conformidad con el artículo 133 de la Ley en mención, la solicitud se turnó para su atención a la Agencia de Investigación Criminal (**AIC**); toda vez que de las facultades que le confiere la Ley de la Fiscalía General de la República (**LFGR**), el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (**RLOPGR**), el Manual de Organización General de la Procuraduría General de la República y demás normatividad aplicable, es la unidad administrativa que cuente con la información solicitada por el particular.

Así las cosas, atendiendo que el artículo 133 de la **LFTAIP** prevé la obligación de turnar las solicitudes a todas las unidades administrativas que puedan contar con la información peticionada, o bien, deban tenerla de acuerdo con sus facultades, competencias y funciones, es que se desprende que esta **UTAG** desahogó las gestiones necesarias para atender la solicitud formulada por el particular.

#### **SEGUNDO. Fijación de Litis.**

Ahora bien, derivado de la recepción del presente recurso, así como del análisis realizado a la inconformidad del particular, se dilucida que su agravio consiste **ERRONEAMENTE** en lo siguiente:



Instituto Nacional de  
Transparencia, Acceso a la  
Información y Protección de  
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la  
solicitud:** Fiscalía General de la República  
**Folio:** 330024622002060  
**Expediente:** RRA 11901/22  
**Comisionado Ponente:** Francisco Javier Acuña  
Llamas

- **Considera que la información se clasificó como reservada y no se invocó una prueba de daño.**

Por ello, esta Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental, solicita a esa Ponencia que la litis del presente se enfoque en la misma.

En tal virtud, se deberá entender por litis, el planteamiento formulado por la parte recurrente ante ese Instituto, la cual al momento de admitirse la procedencia del mismo se legitima la sustanciación de la presente y por ende su resolución, por ello, resulta loable señalar que la litis del proceso, es decir, la determinación de las cuestiones litigiosas, como uno de los efectos de la relación procesal, presenta notas características tales que, en términos generales, integrada la litis, las partes no pueden modificarla, y a sus límites debe ceñirse el pronunciamiento que para tal efecto emita el Órgano Garante, toda vez que cualquier otro acto que no sea reclamado en la presente vía se consideran actos consentidos tácitamente, lo anterior de conformidad con el pronunciamiento del Sexto Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, en la tesis VI.2o. J/21, la cual es del tenor literal siguiente:

**ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE.** Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del **orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala.**

En dichas consideraciones, esa Ponencia deberá avocarse al estudio del agravio vertido por la parte recurrente, mismo que ya fue esclarecido con antelación, lo anterior para evitar un posible desbordamiento de la Litis.

#### **TERCERO: En atención al agravio del particular.**

Inicialmente es sustancial precisar que contrario a lo aludido por el peticionario, esta Institución en **ningún momento clasificó la información peticionada**, es decir la versión pública de la base de datos o las bases de datos que conforman el Sistema Integral de Información Contra la Delincuencia Organizada, lo anterior en virtud de que únicamente se precisó una imposibilidad técnica para poder generar la documental del interés del peticionario, lo anterior en virtud de que el **SIICDO** fue diseñado para fines de captura y consulta de información, misma a la que la legislación aplicable en materia penal le otorga una determinada clasificación. por lo que, con la finalidad de salvaguardarla. dicho sistema **no contempla la descarga de registros.**

Derivado de lo anterior, se reitera la imposibilidad técnica para proporcionar una versión pública de la base de datos o las bases de datos que conforman el multicitado sistema. en virtud de que su creación obedece a un uso exclusivo para la concreción de fines institucionales en materia de procuración de justicia. lo que da origen a un impedimento material, ya que en su diseño no fue considerada la generación, exportación y/o descarga de reportes y/o registros que pudieran atender lo solicitado.



Instituto Nacional de  
Transparencia, Acceso a la  
Información y Protección de  
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la  
solicitud:** Fiscalía General de la República  
**Folio:** 330024622002060  
**Expediente:** RRA 11901/22  
**Comisionado Ponente:** Francisco Javier Acuña  
Llamas

Finalmente resulta necesario conceptualizar que, de conformidad con los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, una versión pública es el documento a partir del que se otorga acceso a la información, en el que se testan partes o secciones clasificadas, indicando el contenido de éstas de manera genérica, fundando y motivando la reserva o confidencialidad, a través de la resolución que para tal efecto emita el Comité de Transparencia, en tal virtud dicho sistema al no permitir la generación de documentales que den cuenta del mismo, es que existe una imposibilidad técnico-material para poder atender la petición del recurrente.

Por lo expuesto, fundado y motivado, atentamente solicito a usted C. Comisionada ponente:

**PRIMERO.** - En atención a las consideraciones señaladas en el presente escrito, tener por reconocida mi personalidad, y por hechas las manifestaciones en él contenidas.

**SEGUNDO.** - En su oportunidad y previo los trámites de ley, **confirme** el presente recurso de revisión, conforme a lo dispuesto en el artículo 157 fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

**IX.** El 09 de septiembre de 2022, se recibió en este Instituto, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, el oficio número FGR/UTAG/DG/00/2022, de la misma fecha a la de su recepción, emitido por la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental del sujeto obligado, mediante el cual manifestó lo siguiente:

#### **A L E G A T O S**

**PRIMERO. Procedimiento de búsqueda:**

Es preciso mencionar que esta Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental (**UTAG**), cumplió cabalmente con los tiempos y formas previstos en la **LFTAIP** vigente al momento de la interposición de la solicitud, así como con lo dispuesto en los Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atención a solicitudes de acceso a la información pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el doce de febrero de dos mil dieciséis, ya que de conformidad con el artículo 133 de la Ley en mención, la solicitud se turnó para su atención a la Agencia de Investigación Criminal (**AIC**); toda vez que de las facultades que le confiere la Ley de la Fiscalía General de la República (**LFGR**), el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (**RLOPGR**), el Manual de Organización General de la Procuraduría General de la República y demás normatividad aplicable, es la unidad administrativa que cuente con la información solicitada por el particular.

Así las cosas, atendiendo que el artículo 133 de la **LFTAIP** prevé la obligación de turnar las solicitudes a todas las unidades administrativas que puedan contar con la información peticionada, o bien, deban tenerla de acuerdo con sus facultades, competencias y



Instituto Nacional de  
Transparencia, Acceso a la  
Información y Protección de  
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la  
solicitud:** Fiscalía General de la República  
**Folio:** 330024622002060  
**Expediente:** RRA 11901/22  
**Comisionado Ponente:** Francisco Javier Acuña  
Llamas

funciones, es que se desprende que esta **UTAG** desahogó las gestiones necesarias para atender la solicitud formulada por el particular.

## **SEGUNDO. Fijación de Litis.**

Ahora bien, derivado de la recepción del presente recurso, así como del análisis realizado a la inconformidad del particular, se dilucida que su agravio consiste **ERRONEAMENTE** en lo siguiente:

- **Considera que la información se clasificó como reservada y no se invocó una prueba de daño.**

Por ello, esta Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental, solicita a esa Ponencia que la litis del presente se enfoque en la misma.

En tal virtud, se deberá entender por litis, el planteamiento formulado por la parte recurrente ante ese Instituto, la cual al momento de admitirse la procedencia del mismo se legitima la sustanciación de la presente y por ende su resolución, por ello, resulta loable señalar que la litis del proceso, es decir, la determinación de las cuestiones litigiosas, como uno de los efectos de la relación procesal, presenta notas características tales que, en términos generales, integrada la litis, las partes no pueden modificarla, y a sus límites debe ceñirse el pronunciamiento que para tal efecto emita el Órgano Garante, toda vez que cualquier otro acto que no sea reclamado en la presente vía se consideran actos consentidos tácitamente, lo anterior de conformidad con el pronunciamiento del Sexto Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, en la tesis VI.2o. J/21, la cual es del tenor literal siguiente:

**ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE.** Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del **orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala.**

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.”

En dichas consideraciones, esa Ponencia deberá avocarse al estudio del agravio vertido por la parte recurrente, mismo que ya fue esclarecido con antelación, lo anterior para evitar un posible desbordamiento de la Litis.

## **TERCERO: En atención al agravio del particular.**

Esta Fiscalía creó el SIICDO como una herramienta interna atendiendo a las atribuciones conferidas al Centro Nacional de Análisis de Información para el Combate a la Delincuencia, para suministrar oportunamente a las unidades administrativas y órganos de la institución la información disponible que requieran para el desempeño de sus funciones.





Instituto Nacional de  
Transparencia, Acceso a la  
Información y Protección de  
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la  
solicitud:** Fiscalía General de la República  
**Folio:** 330024622002060  
**Expediente:** RRA 11901/22  
**Comisionado Ponente:** Francisco Javier Acuña  
Llamas

Al respecto, SIICDO cuenta con una estructura de 25 módulos y atendiendo a la motivación y naturaleza de su origen como una herramienta para dotar a las autoridades de elementos útiles, contiene datos personales, así como los inherentes a las investigaciones, por lo que fue diseñado para fines de meramente de captura y consulta de información que auxilia al personal de la Institución que esta dedicado a la investigación y persecución de los delitos por lo que inclusive **con la finalidad de salvaguardar la información que se cargó en su momento en dicho sistema, no contempla la descarga de registros.**

Ello pues el **Sistema Integral de Información contra Delincuencia Organizada (SIICDO)** obedece exclusivamente a la concreción de fines y necesidades institucionales en materia de procuración de justicia, por lo que como medio de seguridad de la información ahí contenida, **no permite la exportación y/o descarga de reportes y/o registros** que pudieran atender lo solicitado por el particular en la forma en que lo recurre.

Maxime que este contiene información personal y confidencial, así como estrictamente reservada para esta Institución, debido a que los datos que contiene versan sobre delincuencia organizada, por lo que no se trata solo de procuración de justicia, o de seguridad pública solamente, sino que también involucra a la seguridad nacional.

Es preciso señalar que el SIICDO actualmente ya no se encuentra en operación, sin embargo, su funcionalidad y auxilio a las actividades de investigación a cargo de los Agentes del Ministerio Público de la Federación atiende per se a su consulta histórica, precisando que su último registro atiende al mes de agosto del año en curso.

Por lo que la información en su momento entregada al recurrente es de conformidad con lo establecido en el criterio 03/17 emitido por el INAI, el cual establece que:

“No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de acceso a la información; así como los artículos 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 130, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalan que los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar, de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre. Por lo anterior, los sujetos obligados deben garantizar el derecho de acceso a la información del particular, proporcionando la información con la que cuentan en el formato en que la misma obre en sus archivos; sin necesidad de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de información”.

Abona a lo anterior, derivado de la naturaleza para la que fue creado y en su momento utilizado, el SIICDO contiene diversos datos personales como: nombres del probable responsable, víctimas, ofendido, testigos, fotografías, señas particulares, media filiación, entre otros, por ello, la información que no se entregó corresponde a información clasificada como confidencial, ya que contiene **datos personales** de una persona física identificada o identificable, independientemente del medio por el cual se haya obtenido,



Instituto Nacional de  
Transparencia, Acceso a la  
Información y Protección de  
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la  
solicitud:** Fiscalía General de la República  
**Folio:** 330024622002060  
**Expediente:** RRA 11901/22  
**Comisionado Ponente:** Francisco Javier Acuña  
Llamas

sin necesidad de estar sujeta a temporalidad alguna y a la que **solo podrán tener acceso los titulares de la información o sus representantes legales.**

Lo mencionado, encuentra sustento legal dentro de lo establecido en la fracción I, del artículo 113 de la LFTAIP, mismo que se transcribe a continuación:

**ARTÍCULO 113. Se considera información confidencial:**

**I. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable;**

[...]

La información confidencial **no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello (...)**" (Énfasis añadido).

Asimismo, este precepto legal establece que la información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de esta, sus representantes legales y los servidores públicos facultados para ello.

Aunado a lo anterior, toda vez que dicho registro es para consulta ministerial que coadyuven con la investigación de delitos de delincuencia organizada, es que el hecho de que los datos personales inmersos en el mismo se ventilen y logren la identificación de diversas personas vinculadas con investigaciones pasadas se vulnera su derechos a la privacidad, encontrándose esta Fiscalía General de la República con una imposibilidad jurídica para ventilar datos personales relacionados con indagatorias; ello en virtud de ser información que se ubica en el ámbito de lo privado, encontrando para tal efecto la protección bajo la figura de la **confidencialidad** en términos del artículo 113, fracción I de la LFTAIP; ya que hacer de conocimiento público datos personales que hagan identificables a personas sería vincularlos con la comisión de delitos atentando contra la intimidad, honor, buen nombre y presunción de inocencia de la persona en comento.

En seguimiento a lo anterior, los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como la elaboración de versiones públicas, disponen lo siguiente:

**Trigésimo octavo.** Se considera información confidencial:

**I. Los datos personales en los términos de la norma aplicable;**

[...]

**Trigésimo noveno.** Los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable, no podrán clasificarse como confidenciales ante sus titulares.

Por tal motivo, el dar a conocer información que asocie a una persona con la existencia de algún procedimiento relacionado con la comisión de delitos, afectaría directamente su intimidad, honor y buen nombre, incluso vulnera la presunción de inocencia, al generar un



Instituto Nacional de  
Transparencia, Acceso a la  
Información y Protección de  
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la  
solicitud:** Fiscalía General de la República  
**Folio:** 330024622002060  
**Expediente:** RRA 11901/22  
**Comisionado Ponente:** Francisco Javier Acuña  
Llamas

juicio a priori por parte de la sociedad, sin que la autoridad competente haya determinado su culpabilidad o inocencia a través del dictado de una sentencia.

Al efecto, se solicita que considere que dichos derechos están constitucional e internacionalmente reconocidos, conforme los artículos 1 y 6 de nuestra Carta Magna, de donde se desprende que toda persona tiene derecho a que se le respete su vida privada y todo lo esto conlleva, así como el normal desarrollo de su personalidad, por lo que inclusive el artículo 6° Apartado A, fracción II Constitucional prevé expresamente:

**“Artículo 6o.** La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.

...

I. ...

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.”

Aunado a esto, el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), específicamente en su artículo 15, dispone que cualquier persona tiene derecho a que se respete su intimidad, se proteja la información de su vida privada y sus datos personales, cuando participe como parte en el procedimiento penal, a saber:

#### **Artículo 15.** Derecho a la intimidad y a la privacidad

En todo procedimiento penal se respetará el derecho a la intimidad de cualquier persona que intervenga en él, asimismo se protegerá la información que se refiere a la vida privada y los datos personales, en los términos y con las excepciones que fijan la Constitución, este Código y la legislación aplicable.

Ello es así porque el Alto Tribunal en diversas ocasiones mediante jurisprudencia ha determinado que el derecho de acceso a la información tiene límites, los cuales aplican en el momento en que se afecta el honor, el decoro, el respeto, la honra, la moral, la estimación y la privacidad de las personas; además de definir la afectación a la moral, como la alteración que sufre una persona a su decoro, honor, reputación y vida privada, y el respeto de la sociedad por la comisión de un hecho ilícito.

A los argumentos vertidos con antelación, debemos sumar el ánimo del legislador para la protección y salvaguarda de los datos personales a través de la emisión de normas y preceptos legales.

En este sentido, la protección de dichos datos cobra tal relevancia que precede una Ley específica para su amparo, como lo es la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de los Sujetos Obligados, para lo cual es dable trasladar el contenido de los preceptos aplicables al caso que nos ocupa:



Instituto Nacional de  
Transparencia, Acceso a la  
Información y Protección de  
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la  
solicitud:** Fiscalía General de la República  
**Folio:** 330024622002060  
**Expediente:** RRA 11901/22  
**Comisionado Ponente:** Francisco Javier Acuña  
Llamas

**Artículo 3.** Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:

(...)

**IX. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable.** Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información;

**X. Datos personales sensibles: Aquellos que se refieran a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste.** De manera enunciativa más no limitativa, se consideran sensibles los datos personales que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente o futuro, información genética,

(...)

**Artículo 6.** El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente.

(...)

**Artículo 16.** El responsable deberá observar los principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad en el tratamiento de datos personales.

**Artículo 17.** El tratamiento de datos personales por parte del responsable deberá sujetarse a las facultades o atribuciones que la normatividad aplicable le confiera.

**Artículo 18.** Todo tratamiento de datos personales que efectúe el responsable deberá estar justificado por finalidades concretas, lícitas, explícitas y legítimas, relacionadas con las atribuciones que la normatividad aplicable les confiera. (Énfasis añadido)

De los elementos normativos sustanciados en líneas precedentes se advierte que la protección de los datos personales contenidos en el SIICDO supone una garantía del orden constitucional, así como una previsión en diversas normas y leyes específicas, por lo que su transgresión atiende no sólo a la revelación de información institucional, sino a una violación a los derechos humanos de las personas al invadir su intimidad.

Lo anterior, al establecer como se ha manifestado a lo largo de los argumentos materia del presente, que SIICDO contiene datos personales que incluso revierten el carácter de sensibles como tatuajes y media filiación, pues refieren la esfera más íntima de las personas al tratarse de elementos que los identifican y los pueden hacer blancos de discriminación, así como permear en su integridad física.

En este sentido, la Fiscalía General de la República (FGR) como sujeto obligado, de la Ley aplicable al caso, debe establecer y mantener medidas de seguridad para la protección de los datos personales, así como garantizar su confidencialidad, integridad y



Instituto Nacional de  
Transparencia, Acceso a la  
Información y Protección de  
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la  
solicitud:** Fiscalía General de la República  
**Folio:** 330024622002060  
**Expediente:** RRA 11901/22  
**Comisionado Ponente:** Francisco Javier Acuña  
Llamas

disponibilidad, por lo que la entrega de los mismos implicaría una trasgresión directa a la norma y a los derechos humanos de las personas.

Al tenor de lo anterior y sin apartarse del argumento toral señalado en el párrafo que antecede y con la única finalidad de abundar sobre la naturaleza de los datos que lo conforman, es menester señalar que están inminentemente relacionados con el ejercicio de las atribuciones institucionales en materia de investigación y persecución de los delitos, por lo que revisten el carácter de **RESERVADOS** y **CONFIDENCIALES** conforme a lo dispuesto en los artículos 6, apartado A, fracción I; 21, y 102, apartado A, de la Constitución Federal y los artículos **110 fracciones I, V, VII, X, XII y 113 fracción I** de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública en concordancia con los numerales décimo séptimo fracción VII, décimo octavo, vigésimo tercero, vigésimo sexto, vigésimo noveno, trigésimo primero, trigésimo octavo fracción I y cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, a la luz de lo siguiente:

### **1. Marco constitucional**

Del artículo 21 párrafo noveno constitucional se desprende que la Seguridad Pública es una función del Estado, que se encuentra a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios; su objetivo es proteger la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social. La Seguridad Pública comprende, entre otros aspectos, la prevención, investigación y persecución de los delitos.

En este sentido, la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. Asimismo, el ejercicio de la acción penal corresponde al Ministerio Público.

Al respecto, el artículo 102, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que el Ministerio Público de la Federación se organizará en una Fiscalía General de la República, la cual se reconoce como un órgano público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Establece que corresponde al Ministerio Público de la Federación la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal, por lo que solicitará las medidas cautelares contra los imputados; buscará y presentará las pruebas que acrediten la participación de éstos en hechos que las leyes señalen como delito; procurará que los juicios federales en materia penal se sigan con toda regularidad para que la impartición de justicia sea pronta y expedita, y pedirá la aplicación de las penas.

Derivado de tales competencias, es claro que a la Fiscalía General de la República le corresponde investigar y perseguir los delitos, cuyo bien jurídico tutelado es la seguridad pública (investigación y persecución de los delitos) y la seguridad nacional (combate a la delincuencia organizada).



Instituto Nacional de  
Transparencia, Acceso a la  
Información y Protección de  
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la  
solicitud:** Fiscalía General de la República  
**Folio:** 330024622002060  
**Expediente:** RRA 11901/22  
**Comisionado Ponente:** Francisco Javier Acuña  
Llamas

Por lo que hace al acceso a la información, el artículo 6, apartado A, fracción I, señala que toda información en posesión de cualquier autoridad es pública y solamente podrá ser reservada por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes.

Ahora bien, de conformidad con lo señalado por el propio Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la controversia constitucional 325/2019, existen algunas causales por las que la autoridad puede reservar información dentro de las que se encuentra la seguridad pública:

"el artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública englobó de manera enunciativa las principales causas de interés público por las cuales una autoridad puede reservar información, **dentro de las que se encuentra la que pudiera comprometer la seguridad pública.**

Siguiendo la línea argumentativa, si bien el principio de máxima publicidad ordena la transparencia de los nombres y cargos de las personas servidoras públicas federales, lo cierto es que también **existe una excepción de rango constitucional que ordena reservar la información cuando su publicación afecte el un tema interés público como lo es la seguridad pública de los Estados Unidos Mexicanos.**"

En el caso del SIICDO, este contiene información personal y confidencial, así como estrictamente reservada para esta Institución, debido a que los datos que contiene versan sobre delincuencia organizada, por lo que no se trata de un tema de seguridad pública solamente, sino que también involucra a la seguridad nacional (artículo 5, fracciones III, V y X de la Ley de Seguridad Nacional).

Al efecto, es de señalarse que Seguridad Nacional, es el conjunto de acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano. Entre las que encontramos el mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno, así como la preservación de la democracia, fundada en el desarrollo económico social y político del país y sus habitantes, las cuales se logran mediante la ejecución de las funciones encomendadas a esta Fiscalía General de la República como órgano encargado constitucionalmente de procurar justicia en los delitos del orden federal.

La **Seguridad Nacional** comprende las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano<sup>3</sup> y se consideran como amenazas a la misma los actos que impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada, así como aquellos tendentes a obstaculizar o bloquear actividades de inteligencia o contrainteligencia.

Al respecto, el artículo 3 de la Ley de Seguridad Nacional entiende a la **seguridad nacional** como las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, que conlleven a:



Instituto Nacional de  
Transparencia, Acceso a la  
Información y Protección de  
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la  
solicitud:** Fiscalía General de la República  
**Folio:** 330024622002060  
**Expediente:** RRA 11901/22  
**Comisionado Ponente:** Francisco Javier Acuña  
Llamas

- La protección de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrente nuestro país.
- La preservación de la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio.
- El mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno.
- El mantenimiento de la unidad de las partes integrantes de la Federación señaladas en el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- La defensa legítima del Estado Mexicano respecto de otros Estados o sujetos de derecho internacional.
- La preservación de la democracia, fundada en el desarrollo económico social y político del país y sus habitantes.

Por su parte, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 21, párrafo noveno, prevé que la **seguridad pública** es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son la salvaguarda de la vida, la libertad, la integridad y el patrimonio de las personas, así como la contribución a la generación y preservación del orden público y la paz social.

De igual manera, la **seguridad pública** conlleva la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la aplicación de sanciones por infracciones administrativas.

Con base en lo anterior, se entiende que la **seguridad nacional** comprende las acciones destinadas a menoscabar aquellas amenazas que impliquen la desorganización de la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano; mientras que la **seguridad pública** se refiere a salvaguardar la vida, la libertad, la integridad y el patrimonio de las personas, así como coadyuvar en la generación y preservación del orden público y social; lo que en ambos casos se encuentra tutelado por la causal de reserva prevista en el artículo 110, fracción I de la Ley Federal que regula la materia.

En razón de lo expuesto, es dable apuntar que derivado de la relevancia que tanto la seguridad nacional como pública suponen, así como de la discrepancia entre ambos conceptos respecto a la esfera de persecución de los delitos aplicables a cada caso.

A mayor abundamiento, es factible llamar la atención sobre dos aspectos fundamentales en tratándose de la naturaleza de los delitos, ello puesto que las relaciones delictuales y sus estructuras difieren en grado e intensidad, tanto en los diferentes espacios geográficos del territorio nacional, como en el ámbito de afectación.

Esta situación se debe a un conjunto de factores que inciden de diferentes maneras en su comportamiento a partir de determinadas condiciones, las cuales pueden variar de manera importante entre el ámbito de delincuencia organizada y el de la delincuencia común.

Para mejor comprensión de estas condiciones, debemos partir de las definiciones que legal y dogmáticamente se han vertido sobre ambas acepciones del delito:



Instituto Nacional de  
Transparencia, Acceso a la  
Información y Protección de  
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la  
solicitud:** Fiscalía General de la República  
**Folio:** 330024622002060  
**Expediente:** RRA 11901/22  
**Comisionado Ponente:** Francisco Javier Acuña  
Llamas

El artículo 2 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, define la delincuencia organizada como aquella que sucede cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos previstos en la misma.

Precepto que ha sido desarrollado por la dogmática al referir que se conforma por individuos (delincuentes) establecidos permanentemente con jerarquía y relativa disciplina dedicados a la ejecución de actos delictivos, con la finalidad, generalmente, de obtener grandes ganancias económicas, poder e impunidad a través de un sinfín de conductas ilegales.

En contraposición el Maestro Eduardo García Maynez señala en su obra Introducción al estudio del Derecho, que se le da el nombre de delito a ciertas acciones antisociales prohibidas por la ley, cuya comisión hace acreedor al delincuente a determinadas sanciones conocidas con el nombre de penas, en suma, la define como delincuencia callejera: asalto a transeúntes, carterismo, violación, robo de bienes y artículos menores, robo a casa habitación, robo de vehículos, vandalismo, grafitos y pinta de muros y monumentos.

Al tenor de lo expuesto se puede concluir que no resulta igual de peligroso perseguir al ladronzuelo de bolsos en los mercados, aunque este se encuentre armado con una navaja que investigar, atrapar y comprobar los delitos vinculados con la delincuencia organizada, puesto que los niveles de beligerancia y de violencia podrían incrementarse debido a las condiciones de organización, estructura y capital financiero, con que ésta última opera. De ahí que se desprende el impacto y afectación que la divulgación de la información que hoy nos ocupa puede causar tanto en la esfera de la Seguridad Nacional como en la Seguridad Pública.

En este sentido, es fundamental advertir que SIICDO tiene como objetivo principal la colaboración con el Ministerio Público Federal mediante la integración de la información de las averiguaciones previas y carpetas de investigación, esto a través de elaboración de herramientas, para la generación de análisis estratégico de apoyo a las labores ministeriales de inteligencia.

Es menester señalar que el Sistema contempla dos grupos de información básica, individuos y organizaciones, a partir de la cual se establecen los vínculos entre estos y los módulos periféricos de los delitos que lo conforman.

Por ello, es preciso resaltar que la sensibilidad y naturaleza de la información que se aloja en el multicitado sistema deviene de que su contenido incluye por mencionar algunos, el análisis de las transcripciones que derivan de la escucha de audios relacionados con las averiguaciones previas y carpetas de investigación, productos de inteligencia que derivan de la sistematización y análisis de los datos inmersos en el mismo, tales como redes de vínculos que establecen la representación gráfica de vínculos existentes entre diversos objetivos, redes técnicas en las que se establece la relación entre comunicaciones,





Instituto Nacional de  
Transparencia, Acceso a la  
Información y Protección de  
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la  
solicitud:** Fiscalía General de la República  
**Folio:** 330024622002060  
**Expediente:** RRA 11901/22  
**Comisionado Ponente:** Francisco Javier Acuña  
Llamas

documentos relativos a los requerimientos ministeriales con nombres y puesto del personal a cargo de atenderlo, fotografías, así como audios y videos que están intrínsecamente relacionados con las investigaciones incoadas por diversos delitos.

De lo anterior se colige que la divulgación de la información contenida en dicho sistema implica per se la revelación de una fuente específica que resulta útil para la adecuada procuración de justicia, pues como se detalló en líneas precedentes resultan necesarias para las labores de inteligencia tendentes a la persecución de los delitos y al combate a la delincuencia organizada, elementos inherentes a la Seguridad Nacional.

Bajo este tenor, la entrega de cualquier dato contenido en el SIICDO conlleva un riesgo real al dificultar las estrategias o acciones para combatir la delincuencia organizada por parte de la institución. Ello puesto que de ser revelada, podría derivar en un mal uso de estos por parte de las organizaciones criminales, a las cuales se estaría dando cuenta de las fuentes y métodos a través de los que se vinculan datos útiles para la conformación de las investigaciones, con lo cual se estaría impidiendo a las autoridades procuradoras de justicia, actuar contra la delincuencia organizada y por ende se actualizaría el riesgo de obstaculizar o bloquear actividades de inteligencia o contrainteligencia, por parte del Estado.

Aunado a lo antes referido, es preciso señalar que en el marco del “CONVENIO de Colaboración que celebran la Procuraduría General de la República, la Procuraduría General de Justicia Militar y las Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia de las entidades federativas”, el SIICDO puede considerarse como parte de los mecanismos coordinación y colaboración recíproca en sus respectivos ámbitos de competencia, para adoptar una política integral que permita diseñar y ejecutar estrategias conjuntas en la lucha contra la delincuencia.

En este sentido el riesgo que implica la divulgación de la información requerida, compromete la **seguridad pública, al poner en peligro el intercambio de información y las acciones interinstitucionales a cargo de la Federación, la Ciudad de México, los Estados y los Municipios** para el desempeño de sus atribuciones encaminadas a la procuración de justicia.

Al respecto, si bien, el derecho de acceso a la información tiene como finalidad principal que cualquier persona pueda solicitar información que obre en los archivos de los sujetos obligados, y de acuerdo a lo previsto en el artículo 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta Fiscalía General de la República, es un sujeto obligado en la materia, lo cierto es que, entre sus facultades, no se encuentra la de crear bases de datos que contengan estadística que deba hacerse del conocimiento del público en general, sino que la creación de este Sistema Integral de Información Contra la Delincuencia Organizada (SIICDO) tiene como objetivo suministrar información para la generación de productos para el fortalecimiento de investigaciones a cargo de diversas autoridades.



Instituto Nacional de  
Transparencia, Acceso a la  
Información y Protección de  
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la  
solicitud:** Fiscalía General de la República  
**Folio:** 330024622002060  
**Expediente:** RRA 11901/22  
**Comisionado Ponente:** Francisco Javier Acuña  
Llamas

Lo anterior, atendiendo, además, a que el artículo 130 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública dispone que los sujetos obligados deben otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones. En este sentido, **no existe obligación para esta Institución de tener contar con una base de datos como el SIICDO, sino que se creó al interior de la Institución para dotar a las autoridades de información útil inherente a las investigaciones de delitos de delincuencia organizada y, por tanto, por el formato que se utilizó en su creación para que la información que contiene no fuera exportable, es imposible compartir su contenido.**

Lo anterior es así porque, como ya se explicó, cualquier dato de este Sistema que se difunda, por más aislado e inofensivo que parezca, de conformidad con la “teoría del mosaico” – que ya fue aceptada y aplicada por el Pleno de la Suprema Corte–, podría ser conectado con otros datos igual de aparentemente dispersos con el fin de afectar la estrategia de investigación y persecución de los delitos de delincuencia organizada, vulnerando así la capacidad del Estado para hacer frente a estos fenómenos criminales de tan alto impacto para el país.

Lo anterior es así, ya que, de acuerdo con la “teoría del mosaico”, la recopilación de piezas de información dispersas, aparentemente inofensivas y no conectadas, pueden ser unidas de forma posterior con la finalidad de tener una visión de conjunto o mosaico.

Esta “teoría del mosaico” permite concluir que es posible “deducir de hechos independientes, una vulnerabilidad estratégica susceptible de explotación para fines mal intencionados, en este caso, para evadir la procuración de justicia o, peor aún, llevar a cabo actos de contrainteligencia para combatir frontalmente a los agentes encargados de la investigación y persecución de los delitos en los Estados Unidos Mexicanos.”

En este sentido, el Sistema fue creado de tal manera que no sea posible que la información que contiene sean exportable, ya que cualquier dato que se difunda, por más aislado e inofensivo que parezca, de conformidad con la “teoría del mosaico” –que ya fue aceptada y aplicada por el Pleno de la Suprema Corte–, podría ser conectado con otros datos igual de aparentemente dispersos con el fin de afectar la estrategia de investigación y persecución de los delitos de delincuencia organizada, vulnerando así la capacidad del Estado para hacer frente a estos fenómenos criminales de tan alto impacto para el país.

Concluir lo contrario impactaría de manera importante a la facultad de investigación y persecución de esta Fiscalía General, en obvio detrimento a la seguridad pública y nacional del país, y, por tanto, al interés público.

Como se señaló, el artículo 6º, párrafo cuarto, apartado A, fracción I, de la Constitución Federal, en la parte que interesa, prevé que los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones. La ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información (artículos 44, fracción III, y 138, fracción III, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en interpretación conjunta con el



Instituto Nacional de  
Transparencia, Acceso a la  
Información y Protección de  
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la  
solicitud:** Fiscalía General de la República  
**Folio:** 330024622002060  
**Expediente:** RRA 11901/22  
**Comisionado Ponente:** Francisco Javier Acuña  
Llamas

criterio 07/2017 emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales).

Del proceso de reforma constitucional que dio origen al Decreto 7 de febrero de 2014, se obtiene que "...sobre la inexistencia de la información solicitada a los sujetos obligados, solamente existe la obligatoriedad de los servidores públicos de los diversos órdenes de gobierno de documentar la gestión pública para el ejercicio de sus atribuciones y facultades, como principio generador de información, es decir, se establecerá la obligación de que los servidores públicos y todos los sujetos obligados deban documentar la información relativa al ejercicio de sus atribuciones y facultades conferidas en las leyes respectivas, con el propósito de desarrollar uno de los principios básicos para garantizar el cumplimiento efectivo del ejercicio del derecho a la información, que es la generación, creación o documentación relativa al ejercicio de atribuciones y facultades de los sujetos obligados, a fin de contrarrestar las tendencias o acotar los casos para declarar la inexistencia de la información, en perjuicio del derecho fundamental del ciudadano para acceder a la información".

De lo anteriormente expuesto, se desprende que las personas servidoras públicas solamente están obligados a documentar la información relativa al ejercicio de sus atribuciones y facultades que están otorgadas a través de ley.

En este sentido, crear una versión exportable de la información contenida en este Sistema, no solo vulneraría las facultades de investigación y persecución de los delitos que tiene esta Fiscalía General –en detrimento del interés público–, como ya se explicó anteriormente, sino que, además, le obligaría a generar una nueva base de datos, gastando recursos para duplicar el Sistema y luego crear una versión pública de él.

Resulta aplicable el Criterio de Interpretación 07/17, del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que establece:

**"Casos en los que no es necesario que el Comité de Transparencia confirme formalmente la inexistencia de la información.** La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública establecen el procedimiento que deben seguir los sujetos obligados cuando la información solicitada no se encuentre en sus archivos; el cual implica, entre otras cosas, que el Comité de Transparencia confirme la inexistencia manifestada por las áreas competentes que hubiesen realizado la búsqueda de la información. No obstante, lo anterior, **en aquellos casos en que no se advierta obligación alguna de los sujetos obligados para contar con la información, derivado del análisis a la normativa aplicable** a la materia de la solicitud; y además no se tengan elementos de convicción que permitan suponer que ésta debe obrar en sus archivos, **no será necesario que el Comité de Transparencia emita una resolución que confirme la inexistencia de la información.**"

## 2. Marco legal



Instituto Nacional de  
Transparencia, Acceso a la  
Información y Protección de  
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la  
solicitud:** Fiscalía General de la República  
**Folio:** 330024622002060  
**Expediente:** RRA 11901/22  
**Comisionado Ponente:** Francisco Javier Acuña  
Llamas

**Artículo 110.** Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:

**I. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable;**

(...)

**V. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;**

(...)

**VII. Obstruya la prevención o persecución de los delitos;**

(...).

**XII. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público; (...).**

Concatenado a ello, los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, disponen:

**Décimo séptimo.** De conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, aquella que **de difundirse actualice o potencialice un riesgo o amenaza a la seguridad nacional** cuando:

(...)

**IV. Se obstaculicen o bloqueen las actividades de inteligencia o contrainteligencia y cuando se revelen normas, procedimientos, métodos, fuentes, especificaciones técnicas, tecnología o equipo que sean útiles para la generación de inteligencia para la seguridad nacional;**

**VI. Se ponga en peligro la coordinación interinstitucional en materia de seguridad nacional;**

**VII. Se puedan menoscabar, obstaculizar o dificultar las estrategias o acciones para combatir la delincuencia organizada,** la comisión de los delitos contra la seguridad de la nación, entendiéndose estos últimos como traición a la patria, espionaje, sedición, motín, rebelión, terrorismo, sabotaje, conspiración, el tráfico ilegal de materiales nucleares, de armas químicas, biológicas y convencionales de destrucción masiva; (...)

Asimismo, podrá considerarse como reservada aquella que **revele datos que pudieran ser aprovechados para conocer la capacidad de reacción de las instituciones encargadas de la seguridad nacional; sus normas, procedimientos, métodos, fuentes, especificaciones técnicas, tecnología o equipo útiles a la generación de inteligencia para la Seguridad Nacional, sin importar la naturaleza o el origen de los documentos que la consignan.**

**Décimo octavo.** De conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, **aquella que comprometa la seguridad pública, al poner en peligro las funciones a cargo de la Federación,**



Instituto Nacional de  
Transparencia, Acceso a la  
Información y Protección de  
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la  
solicitud:** Fiscalía General de la República  
**Folio:** 330024622002060  
**Expediente:** RRA 11901/22  
**Comisionado Ponente:** Francisco Javier Acuña  
Llamas

la Ciudad de México, los Estados y los Municipios, **tendientes a preservar y resguardar la vida, la salud, la integridad y el ejercicio de los derechos de las personas, así como para el mantenimiento del orden público.**

**Se pone en peligro el orden público cuando la difusión de la información pueda entorpecer los sistemas de coordinación interinstitucional en materia de seguridad pública, menoscabar o dificultar las estrategias contra la evasión de reos; o menoscabar o limitar la capacidad de las autoridades encaminadas a disuadir o prevenir disturbios sociales.**

Asimismo, podrá considerarse como reservada aquella que **revele datos que pudieran ser aprovechados para conocer la capacidad de reacción de las instituciones encargadas de la seguridad pública, sus planes, estrategias, tecnología, información, sistemas de comunicaciones.**

(...)

**Vigésimo tercero.** Para clasificar la información como reservada, de conformidad con el artículo 113, fracción V de la Ley General, será necesario acreditar un vínculo, entre la persona física y la información que pueda poner en riesgo su vida, seguridad o salud.

**Vigésimo sexto.** De conformidad con el artículo 113, fracción VII de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, aquella que obstruya la prevención de delitos al obstaculizar las acciones implementadas por las autoridades para evitar su comisión, o menoscabar o limitar la capacidad de las autoridades para evitar la comisión de delitos.

Para que se verifique el supuesto de reserva, **cuando se cause un perjuicio a las actividades de persecución de los delitos**, deben de actualizarse los siguientes elementos:

- I. La existencia de un proceso penal en sustanciación o una carpeta de investigación en trámite;**
- II. Que se acredite el vínculo que existe entre la información solicitada y la carpeta de investigación, o el proceso penal, según sea el caso, y**
- III. Que la difusión de la información pueda impedir u obstruir las funciones que ejerce el Ministerio Público o su equivalente durante la etapa de investigación o ante los tribunales judiciales con motivo del ejercicio de la acción penal.**

(...)

**Trigésimo primero.** De conformidad con el artículo 113, fracción VII de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, aquella que forme parte de las averiguaciones previas o carpetas de investigación que resulte de la etapa de investigación, durante la cual, de conformidad con la normativa en materia penal, el Ministerio Público o su equivalente reúne indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio o no de la



Instituto Nacional de  
Transparencia, Acceso a la  
Información y Protección de  
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la  
solicitud:** Fiscalía General de la República  
**Folio:** 330024622002060  
**Expediente:** RRA 11901/22  
**Comisionado Ponente:** Francisco Javier Acuña  
Llamas

acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño. (...) (Énfasis añadido).

Derivado de lo anterior y con fundamento en el artículo 111 de la Ley Federal de Transparencia, en relación con el 104 y 114 de la Ley General, es necesario que los sujetos obligados motiven la clasificación de la información mediante las razones o circunstancias especiales para poder acreditar la prueba de daño correspondiente, misma que en todo momento deberá aplicarse al caso concreto, y la cual deberá demostrar que la divulgación objeto de la reserva represente un **riesgo real, demostrable e identificable**, así como el **riesgo de perjuicio** en caso de que dicha información clasificada sea considerada de interés público, además de precisar que la misma se adecua al **principio de proporcionalidad** en razón que su negativa de acceso no se traduce en un medio restrictivo al derecho de acceso a la información de los particulares.

Por lo anterior, conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General y el correlativo del artículo 110 de la Ley Federal de la materia, se clasifica como **información reservada conforme a su fracción I**. La información que contiene el SIICDO, que no le fue entregada al particular porque **Comprometa la seguridad nacional. Por lo que se ofrece la siguiente prueba de daño, al tenor de lo siguiente:**

A la Fiscalía General de la República le corresponde investigar y perseguir los delitos, entre los que encontramos, aquellos cuyo bien jurídico tutelado es la Seguridad Pública (investigación y persecución de los delitos) y la Seguridad Nacional (combate a la delincuencia organizada).

En este orden de ideas, aquellos delitos que atentan contra la estabilidad de la Nación son competencia de la Fiscalía General de la República por resultar amenazas de seguridad nacional, las cuales se contienen en el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional, señala:

**“Artículo 5.** Para los efectos de la presente Ley, son amenazas a la Seguridad Nacional:

- I. Actos tendentes a consumir espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la patria, genocidio, en contra de los Estados Unidos Mexicanos dentro del territorio nacional;
- II. Actos de interferencia extranjera en los asuntos nacionales que puedan implicar una afectación al Estado Mexicano;
- III. Actos que impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada;
- IV. Actos tendentes a quebrantar la unidad de las partes integrantes de la Federación, señaladas en el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
- V. Actos tendentes a obstaculizar o bloquear operaciones militares o navales contra la delincuencia organizada;
- VI. Actos en contra de la seguridad de la aviación;
- VII. Actos que atenten en contra del personal diplomático;



Instituto Nacional de  
Transparencia, Acceso a la  
Información y Protección de  
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la  
solicitud:** Fiscalía General de la República  
**Folio:** 330024622002060  
**Expediente:** RRA 11901/22  
**Comisionado Ponente:** Francisco Javier Acuña  
Llamas

- VIII. Todo acto tendente a consumir el tráfico ilegal de materiales nucleares, de armas químicas, biológicas y convencionales de destrucción masiva;
- IX. Actos ilícitos en contra de la navegación marítima;
- X. Todo acto de financiamiento de acciones y organizaciones terroristas;
- XI. Actos tendentes a obstaculizar o bloquear actividades de inteligencia o contrainteligencia, y
- XII. Actos tendentes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos.”

Todos estos actos constituyen delitos del orden federal previstos en los artículos 123 a 129, 132 a 140, 146 a 149 bis, 170 y 172 bis de Código Penal Federal; así como los artículos 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales; 102, 104, 105, 108, 109 y 113 bis del Código Fiscal de la Federación; 533, 559, 560 y 561, de la Ley de Vías Generales de Comunicación; 2, 4, 11 bis2 y 28 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; y 48 a 51 de la Ley Federal para el Control de Sustancias Químicas Susceptibles de Desvío para la Fabricación de Armas Químicas, entre otros.

En consecuencia las funciones de la Fiscalía General de la República se encuadran en los supuestos de las fracciones **I y X** del artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el artículo 51, es cual prevé una disposición expresa, en materia de reserva de información por comprometer la Seguridad Nacional, reserva que resulta acorde con las bases, principios y disposiciones establecidos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y esta Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Décimo séptimo y Cuadragésimo noveno de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. **Al efecto, se realiza la siguiente prueba de daño:**

#### **Fracciones I y X**

**a. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable**, de perjuicio significativo a la seguridad nacional toda vez que, en virtud de las actuales condiciones que opera el rubro de seguridad en el país de hacerse del conocimiento público las variables aludidas en el SIICDO se atentaría directamente en las labores implementadas para el combate a la delincuencia organizada principalmente porque al no tener posibilidades de desagregar la información para realizar versiones públicas necesariamente se tendría que revelar información personal que corresponde al rubro de lo privado, así como estrictamente reservada, poniendo en peligro la actividad de inteligencia criminal que conforma el sector de Seguridad Nacional en sus diferentes instancias, lo cual puede dificultar las estrategias para el logro de la misma; lo que se traduce en un perjuicio a la procuración de justicia a favor de la sociedad, debido a que las diferentes organizaciones delictivas pueden obtener datos que sean utilizados para conocer las líneas estratégicas que quedan registradas en dicho sistema seguidas por diversos instancias para identificar patrones y lugares con mayor abundamiento de incidencia delictiva y con ello establecer sus zonas de operación.



Instituto Nacional de  
Transparencia, Acceso a la  
Información y Protección de  
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la  
solicitud:** Fiscalía General de la República  
**Folio:** 330024622002060  
**Expediente:** RRA 11901/22  
**Comisionado Ponente:** Francisco Javier Acuña  
Llamas

De ahí que es dable colegir que las medidas para su protección que implemente la Fiscalía General de la República o cualquier otra institución relacionada con la Seguridad Nacional y la Seguridad Pública debe ser verdaderamente funcional para garantizar su eficacia, por lo que de revelar cualquier tipo de información no solo afecta el intercambio de información en la materia, sino que podría entorpecer los sistemas de coordinación interinstitucional para el combate al narcotráfico y la persecución de los delitos conexos que deriven de dicho análisis, los que conforma a leyes generales corresponde conocer a las autoridades federales, así como lo que sean competencia de los tribunales federales por lo que revelar la información solicitada, implica inevitablemente exponer no sólo los datos de las actividades llevadas a cabo en cumplimiento de las funciones de la Fiscalía General de la República.

En ese sentido, revelar la información solicitada, significa evidenciar los lugares, personas, actividades llevados a cabo en cumplimiento de las funciones constitucionales de la Fiscalía General de la República y demás instituciones, implicaría que cualquier persona pudiese anticiparse a ellas, estorbando con ellos los actos de investigación y persecución de los delitos que constituyen amenazas a la Seguridad Nacional e inclusive el atentar en contra de la vida, la seguridad y la salud de las partes del proceso penal, así como de los servidores públicos encargados de llevar a cabo las tareas de procuración de justicia.

**b. El riesgo del perjuicio que supondría la divulgación de la información, superaría el interés público,** al darse a conocer datos sensibles de las actividades y ejercicio de las funciones constitucionales la Fiscalía General de la República, datos de personas de carácter de sensibles como tatuajes y media filiación, pues refieren la esfera más íntima de las personas al tratarse de elementos que los identifican, así como otros rubros que contiene el sistema revela líneas y estrategias de investigación, poniendo en riesgo el éxito de las funciones institucionales, frente a imputados del orden federal, que son de alta peligrosidad así como los grupos de la delincuencia organizada, ello, derivado de que las actuaciones de la Fiscalía General de la República, tienen como fin el interés público o general, así como la investigación y persecución de los delitos federales.

A lo anterior se abona el hecho que la divulgación de la información solicitada, al ser enlazada o asociada con otra información obtenida de diversas fuentes, a partir de estos, se revelan otros datos que en su conjunto que les permiten reconstruir las actividades en cumplimiento del mandato constitucional de buscar las pruebas relativas a los hechos que se investigan, los indicios y pruebas que se buscan, los lugares objeto de las diligencias de investigación, sobre todo tomando en cuenta que estas actividades deben realizarse en regiones que son de dominio predominante de delincuentes federales y de grupos delincuenciales. Luego la divulgación de esta información pondría en riesgo el éxito de las actividades de investigación, afectando el normal y correcto cumplimiento de las funciones constitucionales de la Fiscalía General de la República en combate a la delincuencia organizada.

Bajo esa tesitura es que se actualizan los parámetros internacionales consagrados en nuestro artículo 6 Constitucional, que prevé, que el derecho de acceso a la información puede limitarse en virtud de: a) interés público, b) vida privada y c) datos personales, así





Instituto Nacional de  
Transparencia, Acceso a la  
Información y Protección de  
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la  
solicitud:** Fiscalía General de la República  
**Folio:** 330024622002060  
**Expediente:** RRA 11901/22  
**Comisionado Ponente:** Francisco Javier Acuña  
Llamas

como remite a la legislación secundaria para el desarrollo de los supuestos específicos en que procedan las excepciones que busquen proteger los bienes constitucionales enunciados como límites al derecho de acceso a la información.

**c. Atendiendo el principio de proporcionalidad,** se desprende que el reservar la información solicitada, es el medio menos restrictivo de acceso a la información y dicha reserva debe prevalecer al proteger la seguridad nacional la cual atiende al interés de toda la Nación. En su vertiente de procuración de justicia, la vida, la seguridad y la salud, de cualquier funcionario público, como bien jurídico tutelado, ya que estos tienen como fin garantizar en todo momento una procuración de justicia federal, eficaz y eficiente, apegada a los principios de legalidad, certeza jurídica y respeto a los derechos humanos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás Leyes y Tratados Internacionales.

Luego entonces, se debe considerar que la información solicitada puede afectar irreparablemente los derechos humanos del titular de la Fiscalía General de la República, así como de sus servidores públicos, lesionar gravemente el interés público de la sociedad, ya que muchas veces los datos que se obtienen bajo la tutela del ejercicio del derecho a la información, cuando se correlaciona con otras piezas permitan tener una visión de conjunto del “mosaico” que constituye la estructura y operación de una institución de Procuración de Justicia, como es el caso de la Fiscalía General de la República.

Ello es así porque la información en el momento que es observada en un contexto, recopilando y reconstruyendo pequeños datos, puede revelar la capacidad operativa y económica de la institución y de sus servidores públicos, dañarles irreparablemente derechos humanos y bienes jurídicos titulados en favor de la nación y sociedad mexicana, pues la información obtenida por dicho medio, así como notas periodísticas e incluso redes sociales (vínculos familiares), los grupos delictivos y delincuentes estarían capacitados y en condiciones de conocer e identificar las operaciones e identificar, las rutas y zonas de traslados/viajes, de cada una de las personas que realizan actos de investigación y persecución de los delitos federales y delincuencia organizada.

De esta manera, la publicidad de la información solicitada, no sólo es susceptible de transparentar y conocer la capacidad de reacción operativa y estado de fuerza de la Fiscalía General de la República, sino de diversas instituciones lo que genera amenazas al éxito del combate a los delitos federales y la delincuencia organizada a través de actos tendentes a obstaculizar o bloquear actividades de inteligencia o contrainteligencia en el combate a la delincuencia y la investigación de delitos federales, ya que al identificarse sus actividades de los servidores públicos encargados de dichas tareas se encontrarán expuestos a amenazas reales e inminentes, tanto a su vida e integridad física como a la de su familia, pues es uno de los medios utilizados por los grupos delincuenciales para tener acceso y descubrimiento de información sensible.

Además, se destaca que la divulgación de la información de los servidores públicos de esta Fiscalía pone en peligro la secrecía constitucional y legal que deben guardar las investigaciones, pues tal información implica la revelación de la identidad de quienes, en



Instituto Nacional de  
Transparencia, Acceso a la  
Información y Protección de  
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la  
solicitud:** Fiscalía General de la República  
**Folio:** 330024622002060  
**Expediente:** RRA 11901/22  
**Comisionado Ponente:** Francisco Javier Acuña  
Llamas

el contexto actual, se encuentran al frente y llevan a cabo tareas de alta peligrosidad (investigación y persecución de los delitos federales). Dicha información, frente a los actuales índices y tipos de criminalidad que se viven puede ser utilizada por sujetos ajenos al procedimiento penal para impedir el debido combate a la delincuencia.

De todo lo anterior se acredita un nexo causal entre la entrega de información solicitada y la eficacia, objetividad y debida diligencia que rigen a esta institución y a sus servidores públicos, además de una vulneración flagrante a su derecho a la dignidad humana, vida, seguridad, salud de estos y sus familias por lo que no existe justificación para que se vulneren dichos derechos frente al derecho a la información del solicitante.

Finalmente, no es óbice señalar que, la fundamentación y motivación de los elementos contenidos en las pruebas de daño materia del presente, no se pueden contextualizar de manera aislada, puesto que cualquier dato cuya divulgación pueda considerarse intrascendente puede afectar, una actividad esencial del Estado mexicano, como lo es la relativa a la procuración de justicia cuando se correlaciona con otras piezas que permitan tener una visión en conjunto.

#### **Fracción V**

**Riesgo real, demostrable e identificable:** En un primer sentido se debe precisar que el SIICDO contiene información como el nombre y adscripción de los Agentes del Ministerio Público de la Federación, mismos que en el ejercicio de sus atribuciones tienen a cargo la investigación de los delitos relacionados con la delincuencia organizada y conexos, así como datos de las personas analistas que realizan la captura de la información en el mismo

Al tenor de lo anterior, es de considerar que tanto los AMPF como los servidores públicos que integran este Centro Nacional tienen acceso a toda aquella información generada en materia de inteligencia e insumos que son utilizados para la preservación de la seguridad nacional, por lo que dar a conocer datos sobre ellos, pone en riesgo su vida, seguridad, salud e integridad, incluso las de sus familiares.

En adición a lo anterior, la identificación de estas personas físicas y sus actividades en cumplimiento del servicio público que tiene encomendado, permite que eventualmente puedan ser localizados mediante la búsqueda a través de instrumentos como internet, redes sociales. etc.

Ello, toda vez que con la publicidad de dichos datos, conllevaría el riesgo de ser sujetos identificables y susceptibles de amenazas, extorsiones, intimidaciones y atentados por miembros de la delincuencia, ya que al conocer y/o al haber conocido de información inmersa en las averiguaciones previas o carpetas de investigación, así como la derivada de las labores de inteligencia y contrainteligencia que resulta útil para el combate a la delincuencia organizada, los hace vulnerables de represalias y objetos del crimen para la revelación de datos de su interés.



Instituto Nacional de  
Transparencia, Acceso a la  
Información y Protección de  
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la  
solicitud:** Fiscalía General de la República  
**Folio:** 330024622002060  
**Expediente:** RRA 11901/22  
**Comisionado Ponente:** Francisco Javier Acuña  
Llamas

Luego entonces, es dable concluir que, al dar a conocer la información, se genera un estado de riesgo a su seguridad personal, de sus familias, amigos y todos aquellos individuos que se encuentren dentro de su círculo de proximidad y que derivado de sus actividades puedan ser identificables en circunstancias de tiempo, modo y lugar pues además de tener disponible la información institucional, les sería posible conocer su ubicación y actividades rutinarias, lo cual sería de utilidad, para interceptarlas, aspecto que de ocurrir impactaría negativamente en su seguridad, así como en el debido ejercicio de las facultades y atribuciones que en materia de investigación y persecución de los delitos que tiene el personal de esta Fiscalía.

**Riesgo de perjuicio:** El divulgar datos de los Agentes del Ministerio Público de la Federación y de las personas analistas que coadyuvan con los mismos, los hace blancos identificables y no sólo pone en riesgo su vida, seguridad y salud, así como la de sus familiares, sino también las actividades realizadas por la FGR, toda vez que podrían ser sujetos de amenazas y extorsiones por parte de miembros de la delincuencia, con la finalidad de obtener la información de inteligencia y contrainteligencia para el resguardo de la Seguridad Nacional o simplemente ser blanco de represalias ya que la información de que se trata, está relacionada con el combate y persecución de los delitos atribuibles a la delincuencia organizada.

Esto cobra relevancia a la luz del criterio de la Suprema Corte al resolver el amparo directo 2931/2015, en el cual concluyó de manera esencial que, el derecho a ser informado no es absoluto pues a pesar de que el Estado tiene la obligación de informar a la población sobre temas de interés y relevancia pública, también se debe proteger y garantizar el derecho al honor o el derecho a la privacidad de las personas.

De ahí que la calidad de servidor público no suprime los derechos humanos a la vida, seguridad, privacidad que deben gozar las personas. Por el contrario, el interés general a la misma vida, seguridad y privacidad hace necesaria la debida ponderación entre el derecho a la información que no es absoluto frente a los derechos humanos de los servidores públicos de la Fiscalía General de la República y sus familias.

En este sentido resulta indispensable resaltar que el Estado y sus instituciones están obligados a publicar de oficio sólo aquella información que esté relacionada con asuntos de relevancia o interés público que pueda trascender a la vida o el ejercicio de los derechos de las personas y que sea necesaria para garantizar el pleno ejercicio del derecho a la información en su dimensión colectiva, sin embargo, dicha instrucción conlleva una limitante incluso de orden constitucional a través de lo establecido en el artículo 6°, apartado A, fracción VIII en concordancia con las causales previstas y previamente señaladas del artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Bajo esa tesitura, en el caso concreto como ya ha quedado apuntado, la divulgación de la información contenida en SIICDO actualizaría el riesgo de perjuicio para la vida, seguridad o salud de las personas involucradas en dicho sistema, así como para sus familias y personas cercanas a ellos, por lo que el ejercicio de ponderación de derechos de la



Instituto Nacional de  
Transparencia, Acceso a la  
Información y Protección de  
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la  
solicitud:** Fiscalía General de la República  
**Folio:** 330024622002060  
**Expediente:** RRA 11901/22  
**Comisionado Ponente:** Francisco Javier Acuña  
Llamas

colectividad que debe prevalecer es aquel relacionado con la procuración de justicia bajo los principios constitucionales contenidos en el artículo 20 de la carta magna, en relación a esclarecer los hechos, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen.

**Principio de proporcionalidad:** La publicidad de los datos del personal señalado afecta las atribuciones constitucionales de la FGR para investigar y perseguir delitos federales, pues revela su capacidad de despliegue y reacción, ya que la recopilación y cruce de información aparentemente inofensiva y aislada para descubrir vulnerabilidades estratégicas que son susceptibles de explotación puede dificultar la procuración de justicia o actos de contra inteligencia.

Es dable reforzar lo antes señalado con lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la controversia constitucional 325/2019, en la que derivado de un estudio de elementos normativos se estableció la salvaguarda del personal sustantivo y administrativo de diversas unidades de la institución.

El reservar la información relacionada con los datos de los AMPF y personas analistas, resulta el medio menos restrictivo, ya que las personas que tienen conocimiento de información de inteligencia y contrainteligencia en contra de la delincuencia, los coloca en una situación de riesgo, por lo que proteger su vida, seguridad y salud, así como las de sus familiares, es proporcional a la excepción del derecho de acceso a la información.

En razón de lo antes expuesto, se concluye que el divulgar o hacer del dominio público cualquier tipo de dato relacionado con estos, pondría en riesgo no sólo su vida, seguridad e integridad o la de sus familiares, sino también el intercambio de información sensible entre las unidades administrativas, comprometiéndola y potenciando el riesgo de que exista fuga.

**III.** Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General y el correlativo del artículo 110 de la Ley Federal de la materia, se clasifica como **información reservada conforme a su fracción VII**. La información que contiene el SIICDO, que no le fue entregada al particular porque obstruye la prevención o persecución de los delitos;

### **Fracción VII**

**Riesgo real, demostrable e identificable:** La divulgación de los datos contenidos en el SIICDO, al formar parte de una averiguación previa o carpeta de investigación, representa un riesgo real al obstruir las funciones que ejerce el Ministerio Público o su equivalente durante la etapa de investigación.

Lo anterior, en virtud de que, hacer del dominio público datos de los probables responsables, así como los datos de prueba ofrecidos y los productos que se puedan generar de dicha gestión, permitiría descifrar ciertas líneas de investigación y con ello anticiparse a las acciones previstas por el AMP con la finalidad de evitar la acreditación del hecho delictivo o la participación del o los probables responsables.



Instituto Nacional de  
Transparencia, Acceso a la  
Información y Protección de  
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la  
solicitud:** Fiscalía General de la República  
**Folio:** 330024622002060  
**Expediente:** RRA 11901/22  
**Comisionado Ponente:** Francisco Javier Acuña  
Llamas

Aunado a lo anterior, el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales<sup>15</sup>, establece que, los documentos relacionados con la investigación independientemente de su naturaleza o contenido son estrictamente reservados, por ministerio de Ley.

Bajo este argumento, la información alojada en el Sistema para el esclarecimiento de hechos posiblemente constitutivos de delitos, no solo son parte de la investigación, sino un insumo indispensable para la localización de presuntos responsables o incluso la identificación de patrones delincuenciales, por lo que su publicidad representa no sólo una contravención al ánimo del Legislador de salvaguardar esta información, sino un menoscabo directo a las investigaciones y por ende a la procuración de justicia.

Ello es así pues entregar la información solicitada implica exponer los datos de las actividades llevadas a cabo en cumplimiento de las funciones de las instituciones de procuración de justicia y seguridad pública que contribuyen a el mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno, así como la preservación de la democracia, fundada en el desarrollo económico social y político del país y sus habitantes, por ende a la seguridad nacional del estado mexicano, ya que las referidas variables al contener datos descriptivos, revelan lugares, personas, actividades llevados a cabo en cumplimiento de las funciones de procuración de justicia de la Fiscalía General de la República, sin que exista alguna circunstancia peculiar que implique de la referida información deba ser de interés para la sociedad, pues se reitera que dicho sistema tiene por objeto analizar la tendencia delictiva en el país por medio de herramientas de posicionamiento geográfico para que las dependencias que participan en el combate a la delincuencia cuenten con lo necesario para operar acciones para el fortalecimiento de investigaciones a cargo de diversas autoridades, siendo por ello que de revelarse dichos rubros se podrían revelar planes estratégicos y próximos operativos de combate a la delincuencia o lugares específicos que son investigados por diversos hechos denunciados.

Y considerando que la seguridad pública en su vertiente de procuración de justicia circunstancias sean de interés para la sociedad, sino al contrario a la sociedad le interesa que la procuración de justicia sea efectiva y el entregar la información provoca que cualquier persona pudiese aprovecharse de ella, pueda estorbar las estrategias y planes diseñados para los actos de investigación y persecución de los delitos, lo que incluso deriva en la violación del sigilo que deben guardar estas conforme lo dispone el artículo 218 de la Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que llevaría al titular de esta Fiscalía General de la República a incurrir en una responsabilidad conforme lo dispone el artículo 102, Apartado A, constitucional. Insistiéndose que no solo son datos descriptivos de los delitos del orden federal sino inclusive de las entidades federativas y de los municipios.

Siendo por dicha razón que resulta además que estamos imposibilitados jurídicamente evidenciar algún número de averiguación previa/carpeta de investigación o proceso penal determinado, así como de dirección y coordinación de los servidores públicos que llevan a cabo funciones sustantivas y el personal que los auxilia; sin embargo, la existencia de



Instituto Nacional de  
Transparencia, Acceso a la  
Información y Protección de  
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la  
solicitud:** Fiscalía General de la República  
**Folio:** 330024622002060  
**Expediente:** RRA 11901/22  
**Comisionado Ponente:** Francisco Javier Acuña  
Llamas

carpetas de investigación/averiguaciones previas, se puede corroborar conforme la incidencia delictiva que se reporta mes con mes y que se encuentra disponible en la página electrónica de Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; [https://drive.google.com/file/d/1GzH2wuFYeYWxh6dgcV39IKB\\_4meBBfc/view](https://drive.google.com/file/d/1GzH2wuFYeYWxh6dgcV39IKB_4meBBfc/view), y del orden estatal en la dirección electrónica: [https://drive.google.com/file/d/1Y\\_hJxiS0cbCh9j0q6ufiTfzBmzzAdXw7/view](https://drive.google.com/file/d/1Y_hJxiS0cbCh9j0q6ufiTfzBmzzAdXw7/view), así como de la municipal en [https://drive.google.com/file/d/1zZrm3iRmsQ84kcoD-4hls3J\\_TZoiMR6/view](https://drive.google.com/file/d/1zZrm3iRmsQ84kcoD-4hls3J_TZoiMR6/view). Así mismo tenemos también las cifras que reporta el INEGI disponibles en la siguiente página: <https://www.inegi.org.mx/temas/incidencia/>

En tal virtud, se debe considerar que tratándose de averiguaciones previas/carpetas de investigación y procesos penales que la revelación de información podría impactar a las partes del proceso penal, las cuales son las únicas legitimadas para tener información al respecto, ya que cuando quien solicita la información no es parte en la indagatoria o proceso, el Estado está obligado a contar con mecanismos menos lesivos al derecho de acceso a la justicia para proteger la difusión del contenido de las investigaciones en curso y la integridad de los expedientes.

Luego entonces, bajo este tenor también se acredita el vínculo que existe entre la información solicitada y las carpetas de investigación/averiguaciones previas o procesos penales en trámite, a los que se relaciona la información contenida en SIICDO, puesto que los hechos por los que se iniciaron al ser posiblemente constitutivos de delitos del orden federal corresponden en su investigación y ejercicio de la acción penal a esta Fiscalía General de la República a través de sus servidores públicos, de ahí la importancia de mantener su reserva.

**Riesgo de perjuicio:** La información que se encuentra en el SIICDO representa insumos útiles para el Ministerio Público en la obtención de información y datos que permitan conducir al probable responsable o imputado al proceso penal, o, en su caso la identificación de patrones que permitan vincularlo a una organización criminal.

En este tenor, la publicidad de datos específicos derivados de dichos requerimientos, es perjudicial para las acciones realizadas por los AMPF tendentes a la consolidación de su teoría del caso o líneas de acción para la investigación, esto toda vez que, el conocimiento de los mismos permite por analogía establecer ciertos escenarios y circunstancias que no sólo pueden intervenir en las diligencias ministeriales, sino en una afectación a las partes involucradas al ser posibles blancos de extorsión y con ello intervenir en el curso de la investigación.

Abona a lo anterior el hecho de que la divulgación de la información trasciende a los funcionarios públicos de esta Fiscalía General de la República y al ser enlazados o asociados con otra información obtenida de diversas fuentes, a partir de estos, se revelan otros datos que en su conjunto les permiten reconstruir las actividades en cumplimiento del mandato constitucional de buscar datos de prueba relativos a los hechos que se investigan, así como los lugares objeto de futuras diligencias de investigación.



Instituto Nacional de  
Transparencia, Acceso a la  
Información y Protección de  
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la  
solicitud:** Fiscalía General de la República  
**Folio:** 330024622002060  
**Expediente:** RRA 11901/22  
**Comisionado Ponente:** Francisco Javier Acuña  
Llamas

Asimismo, no debe pasar por alto que estas actividades deben realizarse en regiones que son de dominio predominante de delinquentes federales y de grupos delincuenciales, lo que pone en riesgo el alcance y fines de las actividades de investigación e inclusive el ejercicio de la acción penal afectando el normal y correcto cumplimiento de las funciones constitucionales de la Fiscalía General de la República.

En consecuencia, se actualizan los parámetros internacionales consagrados en nuestro artículo 6 Constitucional que prevé, que el derecho de acceso a la información puede limitarse en virtud de: a) interés público, así como remite a la legislación secundaria para el desarrollo de los supuestos específicos en que procedan las excepciones que busquen proteger los bienes constitucionales enunciados como límites al derecho de acceso a la Información.

**Principio de proporcionalidad:** De las manifestaciones vertidas se advierte, la relevancia de mantener la reserva y confidencialidad de los datos inmersos en SIICDO, dicha preminencia se prospecta en el ánimo del legislador para reservar en sentido estricto toda aquella información derivada de actos de investigación, por lo que, partiendo de que las leyes y normas son las bases para la convivencia y tutela de los derechos de los miembros de la sociedad, el interés superior es evidente y se antepone al derecho particular de acceso a la información.

Por lo que dicha reserva debe prevalecer al proteger las funciones de procuración de Justicia que reportan el beneficio o perjuicio de la sociedad mexicana, ya que estas funciones realizadas, por la Fiscalía General de la República, inciden en los intereses de ésta, pues es a los gobernados, a quien le repercute directamente el éxito o fracaso de la sanción penal de los delitos federales conforme a las leyes existentes.

Sin que pase por alto destacar que, también las víctimas de los delitos federales cobran un papel preponderante a considerar, puesto que ante ellas, el estado mexicano tiene el deber de lograr una reparación integral del daño, por lo que de revelarse la información podría resultar contraproducente a las funciones ministeriales que se reitera son de orden público al ser el único órgano constitucionalmente facultado para ejercer la acción penal, así como incidir en la protección de la vida, la seguridad y la salud, de cualquier ciudadano y funcionario público, como bien jurídico tutelado, ya que éstos tienen como fin garantizar en todo momento una procuración de justicia federal eficaz y eficiente apegada a los principios de legalidad certeza jurídica y respeto a los derechos, humanos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás Leyes y Tratados Internacionales.

Robustece lo anterior, la Tesis aislada emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual señala:

**DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO  
TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR  
LOS DERECHOS DE TERCEROS.** El derecho a la información consagrado en La



Instituto Nacional de  
Transparencia, Acceso a la  
Información y Protección de  
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la  
solicitud:** Fiscalía General de la República  
**Folio:** 330024622002060  
**Expediente:** RRA 11901/22  
**Comisionado Ponente:** Francisco Javier Acuña  
Llamas

última parte del artículo 60, de la Constitución Federal no es absoluto, sino que, como toda garantía, se halla sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en la protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a los intereses de la sociedad como a los derechos de los gobernados, limitaciones que, incluso, han dado origen a la figura jurídica del secreto de información que se conoce en la doctrina como 'reserva de información' o 'secreto burocrático'. En estas condiciones, al encontrarse obligado el Estado, como sujeto pasivo de la citada garantía, a velar por dichos intereses, con apego a las normas constitucionales y legales, el mencionado derecho no puede ser garantizado indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuentra excepciones que lo regulan y a su vez lo garantizan. En atención a la materia a que se refiera; así, en cuanto a la seguridad nacional, se tienen normas que, por un lado, restringen el acceso a la información en esta materia, en razón de que su conocimiento público puede generar daños a los intereses nacionales y, por el otro, sancionan la inobservancia de esa reserva; por lo que hace al interés social, se cuenta con normas que tienden a proteger la averiguación de los delitos, la salud y la mora públicas mientras que por lo que respecta a la protección de la persona existen normas que protegen el derecho a la vida o a la privacidad de los gobernados.

**IV.** Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General y el correlativo del artículo 110 de la Ley Federal de la materia, se clasifica como **información reservada conforme a su fracción XII**. La información que contiene el SIICDO, que no le fue entregada al particular porque se encuentra contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público forma parte de las investigaciones:

#### **Fracción XII**

**Riesgo real, demostrable e identificable:** Los datos que conforman el SIICDO permiten allegar al Ministerio Público información útil, que coadyuve eficaz, eficiente, efectiva y oportunamente a la localización, detención o aprehensión de probables responsables, imputados o bien en la identificación y vinculación de elementos que le permitan establecer líneas de investigación.

Bajo este contexto y atentos al contenido de los párrafos segundo del artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales y primero del artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la información contenida en las investigaciones a cargo del AMPF es estrictamente reservada, por ministerio de Ley.

**Riesgo de perjuicio:** La información del SIICDO tiene su origen en una indagatoria y su finalidad es, coadyuvar con el Ministerio Público en la obtención de información y datos que permitan conducir al probable responsable o imputado al proceso penal, así como la identificación de elementos que permitan establecer su vínculo con diversas organizaciones criminales o bien con otras investigaciones.





Instituto Nacional de  
Transparencia, Acceso a la  
Información y Protección de  
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la  
solicitud:** Fiscalía General de la República  
**Folio:** 330024622002060  
**Expediente:** RRA 11901/22  
**Comisionado Ponente:** Francisco Javier Acuña  
Llamas

En este sentido, es factible señalar que conforme a lo establecido en los artículos 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, 225 fracción XXVIII del Código Penal Federal y 49 fracción V de la Ley General de Responsabilidades Administrativas<sup>21</sup> los servidores públicos que quebranten la reserva de la información serán acreedores a responsabilidades administrativas o del tipo penal que correspondan, en consecuencia la divulgación de la información contenida en el multicitado Sistema, no sólo contradicen lo establecido en los preceptos legales señalados con antelación, sino que revierten sanciones para los servidores públicos que otorguen cualquier tipo de información.

**Principio de proporcionalidad:** De las manifestaciones vertidas se advierte el ánimo del legislador para reservar en sentido estricto toda aquella información derivada de actos de investigación, por lo que, partiendo de que las leyes y normas son las bases para la convivencia y tutela de los derechos de los miembros de la sociedad, el interés superior es evidente y se antepone al derecho particular de acceso a la información.

Finalmente, no es óbice señalar que la fundamentación y motivación de los elementos contenidos en las pruebas de daño materia del presente, no se pueden contextualizar de manera aislada, puesto que cualquier dato cuya divulgación pueda considerarse intrascendente puede afectar, una actividad esencial del Estado mexicano, como lo es la relativa a la procuración de justicia cuando se correlaciona con otras piezas que permitan tener una visión en conjunto.

Por lo expuesto, fundado y motivado, atentamente solicito a usted C. Comisionada ponente:

**PRIMERO.** - En atención a las consideraciones señaladas en el presente escrito, tener por reconocida mi personalidad, y por hechas las manifestaciones en él contenidas.

**SEGUNDO.** - En su oportunidad y previo los trámites de ley, confirme el presente recurso de revisión, conforme a lo dispuesto en el artículo 157 fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

**X.** El 21 de septiembre de 2022, se presentó el proyecto de resolución RRA 11901/22 para ser votado en la sesión del Pleno de este Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, no obstante, al no reunir la mayoría necesaria, dicho recurso se retornó a la Ponencia del Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas.

**XI.** El 30 de septiembre de 2022, se notificó al sujeto obligado un requerimiento de información adicional, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, en los términos siguientes:

“[...]”



Instituto Nacional de  
Transparencia, Acceso a la  
Información y Protección de  
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la  
solicitud:** Fiscalía General de la República  
**Folio:** 330024622002060  
**Expediente:** RRA 11901/22  
**Comisionado Ponente:** Francisco Javier Acuña  
Llamas

1. Señale respecto del Sistema Integral de Información Contra la Delincuencia Organizada, la naturaleza de dicho Sistema, es decir, explique de forma general el funcionamiento de almacenamiento de datos en el mismo.
2. Indique si es posible la extracción, exportación o descarga de los datos registrados en dicho Sistema.
3. En atención a la manifestación efectuada en el escrito de alegatos, relativa a: *contiene información personal y confidencial, así como estrictamente reservada para esta Institución*, en relación con la **fracción I, del artículo 110**, de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública*, explique de qué forma se compromete la seguridad pública, se pone en peligro las funciones a cargo de la Federación, la Ciudad de México, los Estados y los Municipios, tendientes a preservar y resguardar la vida, la salud, la integridad y el ejercicio de los derechos de las personas, así como para el mantenimiento del orden público.
4. En relación con la **fracción V, del artículo 110**, de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública*, acredite el vínculo, entre alguna persona física y la información que pueda poner en riesgo su vida, seguridad o salud.
5. En relación con la **fracción VII, del artículo 110**, de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública*, acredite lo siguiente:
  - i. Señale el proceso penal en sustanciación o la carpeta de investigación en trámite;
  - ii. Indique la forma en que se acredita el vínculo entre la información solicitada y la carpeta de investigación, o el proceso penal, según sea el caso;
  - iii. Precise la forma en que la difusión de la información puede impedir u obstruir las funciones que ejerce el Ministerio Público o su equivalente durante la etapa de investigación o ante los tribunales judiciales con motivo del ejercicio de la acción penal;
6. En relación con la **fracción X, del artículo 110**, de la Ley de la materia, indique lo siguiente:
  - i. Precise si el procedimiento judicial, administrativo o arbitral se encuentra en trámite.
  - ii. Si ese sujeto obligado es parte en de cada procedimiento.
  - iii. Si la información es o no conocida por la contraparte.
  - iv. De qué forma su divulgación afecta la oportunidad de llevar a cabo alguna de las garantías del debido proceso.
  - v. En relación con los nueve puntos solicitados por el particular, indique, por cada uno, la forma en que proporcionar los mismos, podrían afectar el debido proceso.
  - vi. En relación con la causal de reserva invocada, formule la prueba de daño, en términos de lo establecido en el artículo 104 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.



Instituto Nacional de  
Transparencia, Acceso a la  
Información y Protección de  
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la  
solicitud:** Fiscalía General de la República  
**Folio:** 330024622002060  
**Expediente:** RRA 11901/22  
**Comisionado Ponente:** Francisco Javier Acuña  
Llamas

7. En relación con la fracción XII, del artículo 110, de la Ley de la materia, indique lo siguiente:
  - i. Los datos de identificación de expediente judicial o del procedimiento administrativos seguido en forma de juicio
  - ii. El marco normativo que lo regula.
  - iii. El estado procesal en el que se encuentra, señalando si ha causado estado o se encuentran en trámite.
  - iv. Demuestre que la información solicitada se trata de actuaciones, diligencias o constancias propias del procedimiento.
  - v. Indique la manera en que la difusión de la información requerida puede vulnerar la conducción de los expedientes judiciales seguidos en forma de juicio.
  - vi. Indique el nexo causal entre la información clasificada y el procedimiento invocado.
  - vii. En relación con la causal de reserva invocada, formule la prueba de daño, en términos de lo establecido en el artículo 104 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
8. Proporcione, en términos del artículo 104 de la *Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública*, y del numeral Trigésimo Tercero de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, la prueba de daño aplicable a las causales de reserva invocadas.
9. En relación con el artículo 113, fracción I, de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública*, enliste los datos personales que se encuentran contenidos dentro del Sistema Integral de Información Contra la Delincuencia Organizada.  
[...]" (sic)

**XII.** El 13 de octubre de 2022, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la Fiscalía General de la República dio atención al requerimiento de información adicional que le fue notificado, en los términos siguientes:

"[...]"

**1. Señale respecto del Sistema Integral de Información Contra la Delincuencia Organizada, la naturaleza de dicho Sistema, es decir, explique de forma detallada el funcionamiento de almacenamiento de datos en el mismo.**

Esta Fiscalía creó el SIICDO como una herramienta interna atendiendo a las atribuciones conferidas al Centro Nacional de Análisis de Información para el Combate a la Delincuencia, para suministrar oportunamente a las unidades administrativas y órganos de la institución la información disponible que requieran para el desempeño de sus funciones.

Al respecto, SIICDO cuenta con una estructura de 25 módulos y atendiendo a la motivación y naturaleza de su origen como una herramienta para dotar a las autoridades



Instituto Nacional de  
Transparencia, Acceso a la  
Información y Protección de  
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la  
solicitud:** Fiscalía General de la República  
**Folio:** 330024622002060  
**Expediente:** RRA 11901/22  
**Comisionado Ponente:** Francisco Javier Acuña  
Llamas

de elementos útiles, contiene datos personales, así como los inherentes a las investigaciones, por lo que fue diseñado para fines de **meramente de captura y consulta** de información que auxilia al personal de la Institución que está dedicado a la investigación y persecución de los delitos por lo que inclusive con la finalidad de salvaguardar la información que se cargó en su momento en dicho sistema, no contempla la descarga de registros.

Los usuarios finales que integran las áreas sustantivas del CENAPI, capturan las variables de información que integran el Sistema SIICDO, a través de la interacción y llenado de la interfaz gráfica **que almacena la información en una unidad de almacenamiento resguardada en el Centro de Datos del CENAPI**

**2. Indique si es posible la extracción, exportación o descarga de los datos registrados en dicho Sistema.**

La naturaleza del Sistema Integral de Información contra Delincuencia Organizada (SIICDO) obedece exclusivamente a la concreción de fines y necesidades institucionales en materia de procuración de justicia, por lo que, como medio de seguridad de la información ahí contenida, **no permite la extracción, exportación y/o descarga de los datos.**

Asimismo, es necesario puntualizar que el Sistema de mérito **no es una base de datos exportable**, como pudiera ser por ejemplo un archivo en formato Excel; sino que es un sistema que como herramienta tecnológica contiene datos inherentes a las investigaciones y cuyo objetivo primordial es el de dotar a las autoridades de elementos útiles, de ahí que no cuente con datos de carácter genérico que puedan exponerse al hoy recurrente.

A mayor abundamiento es necesario señalar que derivado de la naturaleza del Sistema no es posible descargar o sistematizar la información que contiene en reportes o documentos en formato Excel, Word, PDF o CSV.

En este orden de ideas se precisa que si bien es cierto se podrían realizar algunas capturas de pantalla, también lo es que, derivado de la estructura de la información y de la cantidad de registros que contiene no es materialmente posible generar uno a uno la captura de los documentos, registros, archivos de imagen y audio (escuchas) así como de los demás elementos que conforman el presente sistema, para con ello atender lo requerido por el particular.

En resumen, al consultarse el sistema a través de un equipo de cómputo dentro de la red interna, la información puede ser extraída mediante la captura de pantallas, ello derivado a que esta funcionalidad es propia de los equipos de trabajo, más no propia del sistema de mérito.

Aunado a lo manifestado en líneas precedentes es importante mencionar que el SIICDO actualmente ya no se encuentra en operación, precisando que su último registro atiende



Instituto Nacional de  
Transparencia, Acceso a la  
Información y Protección de  
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la  
solicitud:** Fiscalía General de la República  
**Folio:** 330024622002060  
**Expediente:** RRA 11901/22  
**Comisionado Ponente:** Francisco Javier Acuña  
Llamas

al mes de agosto del año en curso, sin embargo, su funcionalidad y auxilio a las actividades de investigación a cargo de los Agentes del Ministerio Público de la Federación atiende per se a su consulta histórica.

A lo anterior debemos sumar que existen disposiciones legales que mandatan la reserva de la información de todos aquellos registros de voz e imágenes o cosas que estén relacionados con las averiguaciones previstas o carpetas de investigación, disposición que se contravendría al realizar capturas de pantalla de la información, tal como se advierte en lo establecido por el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales se establece que:

“...Los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo que **únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en este Código y demás disposiciones aplicables...**” (énfasis añadido)

Lo que se robustece con lo previsto en el artículo 16 del entonces Código Federal de Procedimientos Penales, aplicable a la información relativa a las averiguaciones previas que se encuentra sistema que hoy nos ocupa, al tenor de lo siguiente:

“...Al expediente de averiguación previa únicamente tendrán acceso el inculpado, su defensor y la víctima u ofendido o su representante legal. La averiguación previa así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, y los objetos, registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados...” (énfasis añadido)

Bajo este contexto, se puede advertir la imposibilidad para la exportación y descarga de la información, puesto que aun en el supuesto sin conceder que se generaran capturas de pantalla, se estaría contraviniendo las disposiciones adjetivas de la materia, antes señaladas, a las cuales se suma lo previsto por el artículo 20 de la Ley de la Fiscalía General de la República en el que se precisa que las personas que reciban la información deberán resguardarla con la reserva o confidencialidad que amerite el caso.

**3. Señale con precisión los rubros, módulos o componentes del Sistema requerido por el particular.**



Instituto Nacional de  
Transparencia, Acceso a la  
Información y Protección de  
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la  
solicitud:** Fiscalía General de la República  
**Folio:** 330024622002060  
**Expediente:** RRA 11901/22  
**Comisionado Ponente:** Francisco Javier Acuña  
Llamas

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| • Actos Terroristas       | • Asaltos                                    |
| • Delitos ambientales     | • Delitos Electorales                        |
| • Extorsión               | • Falsificación de Documentos                |
| • Falsificación de Moneda | • Individuos                                 |
| • Individuos más buscados | • Lavado de dinero                           |
| • Libertad de Expresión   | • Narcotráfico                               |
| • Organizaciones          | • Piratería                                  |
| • Retratos hablados       | • Robo de Hidrocarburo                       |
| • Robo de vehículos       | • Secuestros                                 |
| • Tatuajes                | • Tráfico de indocumentados                  |
| • Tráfico de órganos      | • Tráfico de piezas                          |
| • Trata de personas       | • Tráfico de sustancias químicas controladas |

**4. En atención a la manifestación efectuada en el escrito de alegatos, relativa a: contiene información personal y confidencial, así como. estrictamente reservada para esta Institución, en relación con la fracción I, del artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública explique de qué forma se compromete la seguridad pública, se ponen en peligro las funciones a cargo de la Federación, la Ciudad de México, los Estados y los Municipios, tendientes a preservar y resguardar la vida, la salud, la integridad y el ejercicio de los derechos de las personas, así como para el mantenimiento del orden público.**

El contexto de la información contenida en el sistema de mérito, se encuentra intrínsecamente relacionado a las atribuciones conferidas a la Fiscalía General de la República, antes Procuraduría General de la República, esto debido a que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 21, párrafo noveno, prevé que la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son la salvaguarda de la vida, la libertad, la integridad y el patrimonio de las personas, así como la contribución a la generación y preservación del orden público y la paz social.

De ahí que es dable apuntar que la seguridad pública conlleva la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la aplicación de sanciones por infracciones administrativas.

En este orden de ideas, se desarrolla el objetivo principal de SIICDO, toda vez que advierte la colaboración que se lleva a cabo con los Agentes del Ministerio Público, mediante la recopilación de la información que se integra a las averiguaciones previas y carpetas de investigación, esto a través de elaboración de herramientas, para la generación de análisis estratégico de apoyo a las labores ministeriales y la generación de productos de inteligencia.

Lo anterior cobra relevancia para la seguridad pública, ya que en el marco del “CONVENIO de Colaboración que celebran la Procuraduría General de la República, la Procuraduría General de Justicia Militar y las Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia de las entidades federativas”, el SIICDO se constituye como la herramienta informática que



Instituto Nacional de  
Transparencia, Acceso a la  
Información y Protección de  
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la  
solicitud:** Fiscalía General de la República  
**Folio:** 330024622002060  
**Expediente:** RRA 11901/22  
**Comisionado Ponente:** Francisco Javier Acuña  
Llamas

permite la eficacia de este tipo de mecanismos de coordinación y colaboración recíproca para el cumplimiento de las funciones de procuración de justicia en los ámbitos de la Federación, la Ciudad de México, los Estados y los Municipios, con lo cual se logra adoptar una política integral que permite diseñar y ejecutar estrategias conjuntas en la lucha contra la delincuencia. Luego entonces, de una concatenación de los elementos manifestados en líneas anteriores, podemos concluir que la divulgación de cualquiera de los datos contenidos en el sistema materia del presente, compromete la seguridad pública por su estrecha relación con la procuración de justicia, puesto que el propósito fundamental de ambas es la reducción de la violencia y el combate a los delitos incluidos aquellos que mayor grado de vulnerabilidad causan a la sociedad, como son el homicidio, el secuestro e incluso la delincuencia organizada.

En razón de lo antes expuesto, la publicidad de cualquier dato contenido en el expediente por más mínimo y aislado que pueda creerse, conlleva la revelación de información que al ser analizada y asociada con el contenido de otras fuentes y/o medios podría ser utilizada para entorpecer, retrasar o desviar las investigaciones a cargo de los Ministerios Públicos, esto a través de la identificación de personas, circunstancias y lugares que podrían ser aprovechados para implementar acciones de extorsión, amenazas y/o corrupción para obstaculizar la prevención, investigación y persecución de los delitos.

Lo anterior, implica un perjuicio directo a la seguridad pública pues pone potencialmente en riesgo las funciones a cargo de la Federación, la Ciudad de México, los Estados y los Municipios, no solo en el ámbito de la procuración de justicia, si no de aquellos tendientes a preservar y resguardar la vida, la salud, la integridad y el ejercicio de los derechos de las personas, así como para el mantenimiento del orden público.

**5. En relación con la fracción V, del artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, acredite el vínculo, entre alguna persona física y la información que pueda poner en riesgo su vida, seguridad o salud.**

En un primer punto se debe precisar que el SIICDO contiene información que ubica en modo, tiempo y lugar a los Agentes del Ministerio Público de la Federación, mismos que en el ejercicio de sus atribuciones tienen a cargo la investigación de delitos de delincuencia organizada y conexos, así como datos de las personas analistas que realizan la captura de la información en el mismo.

Bajo este tenor, la identificación de estas personas físicas en cumplimiento del servicio público que tiene encomendado, permite que eventualmente puedan ser localizados mediante la búsqueda a través de herramientas como internet, redes sociales o cualquier fuente abierta y con ello ser susceptibles de amenazas, extorsiones, intimidaciones y atentados por miembros de la delincuencia, ya que el conocer y/o haber conocido información inmersa en las averiguaciones previas o carpetas de investigación, así como la derivada de las labores de inteligencia y contrainteligencia los convierte en un blanco perfecto y de fácil acceso para los grupos criminales que pretenden allegarse de datos de su interés para evadir la justicia o bien para concertar represalias por las acciones que hubiesen impactado en la comisión de los delitos asociados a los mismos,



Instituto Nacional de  
Transparencia, Acceso a la  
Información y Protección de  
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la  
solicitud:** Fiscalía General de la República  
**Folio:** 330024622002060  
**Expediente:** RRA 11901/22  
**Comisionado Ponente:** Francisco Javier Acuña  
Llamas

Ahora bien, no es óbice señalar que de igual forma el SIICDO como herramienta para dotar a las autoridades de elementos útiles contiene datos de personas físicas tales como nombre completo, media filiación, números telefónicos, datos biométricos y vínculos familiares, mismos que hacen plenamente identificable a los sujetos inmersos en las investigaciones, así como a su círculo de proximidad más cercano, esto es relaciones familiares, sociales o de su entorno económico.

En este sentido, la publicidad de cualquiera de los datos señalados en líneas precedentes permite la identificación de una persona relacionada con una averiguación o carpeta de investigación, así como la de sus seres cercanos, lo que de forma implícita representa un riesgo para su seguridad e integridad física pues serían objetos de represalias y señalamientos, ello con independencia de la calidad que tengan en dicha investigación. Por lo anterior, es dable concluir que la información contenida en SIICDO se encuentra plenamente vinculada a personas físicas tanto Agentes del Ministerio Público de la Federación, personas analistas y aquellas que forman parte de la averiguación previa y/o carpeta de investigación, cuya divulgación representa un riesgo a su seguridad e integridad, la de sus familias, amigos y todos aquellos individuos que se encuentren dentro del referido círculo de proximidad y que derivado de sus actividades puedan ser identificables en circunstancias de tiempo, modo y lugar, lo que implica un acceso fácil a su ubicación y con ello a cualquier atentado en contra de su vida a efecto de obtener información relacionada con el caso o bien evitar el esclarecimiento de los hechos y la localización de los probables responsables.

**6. En relación con la fracción VII, del artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la, Información Pública, acredite lo siguiente:**

...

El SIICDO es un sistema que se encuentra conformado por datos recolectados de una gran cantidad de averiguaciones previas y carpetas de investigación, mismas que se encuentran en diversos estados de substanciación y trámite.

Sin embargo, es preciso señalar que derivado de la cantidad de datos alojados en el mismo el estatus de cada uno de los expedientes, se encuentra en permanente actualización derivado de las acciones llevadas a cabo por los agentes del Ministerio público de la Federación y de las Entidades Federativas, por lo que el rastreo del estado que guardan resulta materialmente imposible.

Asimismo, la divulgación de los datos contenidos en el SIICDO, al formar parte de una averiguación previa o carpeta de investigación, representa un riesgo real al obstruir las funciones que ejerce el Ministerio Público o su equivalente durante la etapa de investigación.

Lo anterior, en virtud de que, el vínculo entre la información solicitada y las carpetas de investigación emana del contenido de los mismos ya que hacen referencia a probables responsables, así como datos de prueba ofrecidos y productos generados en dicha





Instituto Nacional de  
Transparencia, Acceso a la  
Información y Protección de  
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la  
solicitud:** Fiscalía General de la República  
**Folio:** 330024622002060  
**Expediente:** RRA 11901/22  
**Comisionado Ponente:** Francisco Javier Acuña  
Llamas

gestión, lo cual permitiría conocer las líneas de investigación seguidas en cada caso particular y con ello anticiparse a las acciones previstas por el AMP con la finalidad de evitar la acreditación del hecho delictivo o la participación del o los probables responsables.

Aunado a lo anterior, como ya quedo apuntado los artículos 218 y 16 del Código Nacional de Procedimientos Penales y del entonces Código Federal de Procedimientos Penales, respectivamente, establecen que, los documentos relacionados con la investigación independientemente de su naturaleza o contenido son estrictamente reservados, por ministerio de Ley.

Bajo este argumento, la información alojada en el Sistema para el esclarecimiento de hechos posiblemente constitutivos de delitos como parte de la investigación, representa un insumo indispensable para la localización de presuntos responsables o incluso la identificación de patrones delincuenciales, por lo que su publicidad representa no sólo una contravención al ánimo del Legislador de salvaguardar esta información, sino un menoscabo directo a las investigaciones y por ende a la procuración de justicia.

En tal virtud, se debe considerar que tratándose de averiguaciones previas/carpetas de investigación y procesos penales que la revelación de información podría impactar a las partes del proceso penal, las cuales por mandato de ley son las únicas legitimadas para tener información al respecto, ya que cuando quien solicita la información no es parte en la indagatoria o proceso, el Estado está obligado a contar con mecanismos menos lesivos al derecho de acceso a la justicia para proteger la difusión del contenido de las investigaciones en curso y la integridad de los expedientes.

En razón de lo anterior, podemos concluir la importancia que tiene para las carpetas de investigación/averiguaciones previas o procesos penales en trámite, mantener su reserva.

**7. En relación con la fracción X, del artículo 110, de la Ley de la materia, indique lo siguiente:**

...

Como se ha manifestado en líneas precedentes, el SIICDO contiene datos de averiguaciones previas y carpetas de investigación en trámite, es decir el origen de estos, parte de los expedientes sustanciados para las investigaciones a cargo de los AMP, por lo que sus estados procesales se encuentran en permanente actualización, en tal virtud atento al cúmulo de registros que conforman el sistema que hoy nos ocupa, representaría llevar a cabo un trabajo para la elaboración de un documento ad hoc, con una erogación excesiva de recursos humanos y materiales.

Asimismo, es preciso señalar que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 102 en su apartado A, señala que el Ministerio Público de la Federación se organizará en una Fiscalía General de la República, aunado a ello el artículo 5 de la Ley de la Fiscalía General de la República establece que al Ministerio Público de la Federación le corresponde, en representación de los intereses de la sociedad: la investigación y la persecución de los delitos del orden federal y los de su competencia ante los tribunales.



Instituto Nacional de  
Transparencia, Acceso a la  
Información y Protección de  
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la  
solicitud:** Fiscalía General de la República  
**Folio:** 330024622002060  
**Expediente:** RRA 11901/22  
**Comisionado Ponente:** Francisco Javier Acuña  
Llamas

En este orden de ideas podemos concluir que la Fiscalía General de la República a través de los AMPF es parte en cada uno de los procedimientos contenidos en SIICDO, al conocer de los hechos posiblemente constitutivos de delito, dirigir la investigación y participar activamente en el desarrollo de audiencias derivadas de los diversos expedientes que tiene a su cargo, ello con responsabilidades dirigidas a la impartición de justicia en beneficio de las víctimas u ofendidos y de la sociedad en su conjunto.

Asimismo, es menester puntualizar que en virtud de que el SIICDO representa una herramienta institucional útil para coadyuvar en las labores de investigación y persecución de los delitos a través de la vinculación de diversos elementos útiles para la construcción de la teoría del caso por parte de los AMPF, su divulgación prematura podría causar una afectación al debido proceso, ya que el conocimiento por parte de la contraparte, está supeditado al momento en que los agentes de ministerio público reúnen los elementos necesarios para su presentación ante los órganos jurisdiccionales para la debida administración de justicia.

En suma, la afectación que podría ocasionar al debido proceso la difusión de la información, parte de lo previsto en el artículo 12 del Código Nacional de Procedimientos Penales<sup>2</sup> mismo que prevé como elementos del debido proceso la imparcialidad en la sustanciación de los asuntos, así como el pleno respeto a los derechos humanos. A mayor abundamiento el Código Nacional de Procedimientos Penales, específicamente en su artículo 15, dispone que cualquier persona tiene derecho a que se respeten éstos; así como que se proteja la información de su vida privada y datos personales, ya que, de revelar alguna información, aún de forma indirecta, atentaría contra su intimidad, honor, inclusive su buen nombre; lo cual se adminicula con lo establecido en el artículo 218 del mismo Código Adjetivo, que ordena la estricta reserva de cualquier dato que se encuentre contenido en las investigaciones.

De lo aquí apuntado, se concluye que hacer del dominio público la información de cualquier dato contenido en el SIICDO, por aislado que parezca e incluso insignificante, a través de una concatenación de elementos de carácter público que permitan su analogía implica el quebrantamiento a diversos principios que rigen el sistema penal como los son: el de presunción de inocencia, debido proceso y la tutela judicial efectiva; del mismo modo, se pondría en riesgo el pleno ejercicio de algún acto o acción de las partes en la investigación, además de que con dichos datos se podría obtener información que vulneraría la seguridad e identidad de las víctimas u ofendidos, y consecuentemente, trastocar su derecho a la reparación del daño.

Sin que sea óbice para lo anterior, destacar que SIICDO no contiene datos genéricos sino intrínsecamente vinculados entre sí en razón de un individuo o expediente por lo que contempla perfiles de seguridad restringidos para su consulta.

**8. En relación con la fracción XII, del artículo 110, de la Ley de la materia, indique lo siguiente:**

...



Instituto Nacional de  
Transparencia, Acceso a la  
Información y Protección de  
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la  
solicitud:** Fiscalía General de la República  
**Folio:** 330024622002060  
**Expediente:** RRA 11901/22  
**Comisionado Ponente:** Francisco Javier Acuña  
Llamas

A lo largo de las manifestaciones vertidas para dar cumplimiento al requerimiento materia del presente, han sido reiterados los argumentos en los que se puntualiza que, derivado del cumulo de expedientes contenidos en el sistema y del origen de los mismos como los son las averiguaciones previas y carpetas de investigación a cargo de los AMP, el rastreo de los estados que guardan actualmente los mismos, resulta materialmente imposible, de ahí que se evidencia el riesgo de la divulgación prematura de los datos, puesto que tanto en aquellos procesos penales que se encuentren en reserva como en archivo temporal, como en aquellos que hubieran sido judicializados existiría un riesgo de posible afectación al curso de las investigaciones, puesto que existen casos en los que se deriva un desglose de investigación por delitos conexos o diversos probables responsables implicados.

Lo anterior, puesto que SIICDO se encuentra alimentado por información propia de la Carpeta de Investigación en la que se incluyen las diligencias que realizan los AMP para allegarse de información útil que les permita establecer líneas de investigación para el esclarecimiento de los hechos posiblemente constitutivos de delito hechos de su conocimiento, por lo que la acreditación de que los datos contenidos en el Sistema queda superada con la conjunción de los elementos manifiestos a través del presente.

Ahora bien, respecto al marco normativo que lo regula, es de señalar que el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su apartado A, señala que el Ministerio Público de la Federación se organizará en una Fiscalía General de la República, por su parte el artículo 21 de la misma norma suprema prevé que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función, destacando que el ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde a éste.

Aunado a ello el artículo 5 de la Ley de la Fiscalía General de la República establece que al Ministerio Público de la Federación le corresponde, en representación de los intereses de la sociedad: la investigación y la persecución de los delitos del orden federal y los de su competencia ante los tribunales. Disposiciones legales en las que se enmarcan las atribuciones del Ministerio Público para llevar a cabo la investigación y persecución de los delitos, de las cuales emanaron los requerimientos de información que dieron origen a los datos contenidos en SIICDO.

Ahora bien, a efecto de abundar en los argumentos que sustentan que la información del SIICDO puede afectar la conducción de los expedientes seguidos en forma de juicio y establecer el nexo causal entre la misma y el procedimiento invocado, se debe contemplar que las actuaciones ministeriales derivan necesariamente en un proceso judicial, por lo que cualquier afectación a la información de la que pueda allegarse el AMP para sustentar su teoría del caso en la etapa de juicio repercute paralelamente en el desarrollo de las audiencias.

En este sentido debemos reiterar que el nexo causal entre los datos que conforman el SIICDO y el procedimiento invocado, se encuentra en las atribuciones propias del Ministerio Público, las cuales le permiten allegarse de información útil, que coadyuve eficaz, eficiente, efectiva y oportunamente a la localización, detención o aprehensión de



Instituto Nacional de  
Transparencia, Acceso a la  
Información y Protección de  
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la  
solicitud:** Fiscalía General de la República  
**Folio:** 330024622002060  
**Expediente:** RRA 11901/22  
**Comisionado Ponente:** Francisco Javier Acuña  
Llamas

probables responsables, imputados o bien en la identificación y vinculación de elementos que le permitan establecer líneas de investigación.

Bajo este contexto y atentos al contenido de los párrafos segundo del artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales<sup>3</sup> y primero del artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales<sup>4</sup>, la información contenida en las investigaciones a cargo del AMPF es estrictamente reservada, por ministerio de Ley. Por cuanto hace a la prueba de daño requerida en este apartado, la misma será desarrollada en el numeral 10 del presente desahogo de requerimiento de información adicional.

**9. Respecto de cada una de las fracciones referidas del artículo 110, de la Ley de la materia, indique con precisión las secciones, o rubros de información que acreditan cada una de las causales de reserva.**

El Sistema Integral de Información Contra la Delincuencia Organizada tiene como objetivo generar productos de información táctica y estratégica para el combate de los 15 delitos tipificados como delincuencia organizada, contando con 24 campos que se encuentran asociados a expedientes y objetivos específicos (individuos) mismos que se enlistan a continuación:

- |  |                           |
|--|---------------------------|
| • Asaltos                                    | • Actos Terroristas       |
| • Delitos Electorales                        | • Delitos ambientales     |
| • Falsificación de Documentos                | • Extorsión               |
| • Individuos                                 | • Falsificación de Moneda |
| • Lavado de dinero                           | • Individuos más buscados |
| • Narcotráfico                               | • Libertad de Expresión   |
| • Piratería                                  | • Organizaciones          |
| • Robo de Hidrocarburo                       | • Retratos hablados       |
| • Secuestros                                 | • Robo de vehículos       |
| • Tráfico de indocumentados                  | • Tatuajes                |
| • Tráfico de piezas                          | • Tráfico de órganos      |
| • Tráfico de sustancias químicas controladas | • Trata de personas       |

En este sentido es dable señalar que cada uno de los módulos enlistados contienen datos recolectados de averiguaciones previas y carpetas de investigación, así como de carácter confidencial por tratarse de datos personales, por lo que todo el sistema per se actualiza las causales de reserva establecidas en el artículo **110 fracciones I, V, VII, X, XII y 113 fracción I** de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública en concordancia con los numerales décimo séptimo fracción VII, décimo octavo, vigésimo tercero, vigésimo sexto, vigésimo noveno, trigésimo primero, trigésimo octavo fracción I y cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información

**10. Proporcione, en términos del artículo 104 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y del numeral Trigésimo Tercero de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la**



Instituto Nacional de  
Transparencia, Acceso a la  
Información y Protección de  
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la  
solicitud:** Fiscalía General de la República  
**Folio:** 330024622002060  
**Expediente:** RRA 11901/22  
**Comisionado Ponente:** Francisco Javier Acuña  
Llamas

**información, así como para la elaboración de versiones públicas, la prueba de daño aplicable a las causales de reserva invocadas.**

Al respecto, se solicita se tenga legítimamente reproducida la prueba de daño aplicable a las causales de reserva invocadas que fue desahogada en la etapa de alegatos, en este sentido a efecto resaltar los puntos más relevantes de cada uno de los riesgos que conlleva la difusión de la información solicitada, se presentan las ideas sustanciales al tenor de lo siguiente: Fracción I

La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable, de perjuicio significativo a la seguridad pública toda vez que, en virtud de las actuales condiciones que opera el rubro de seguridad en el país de hacerse del conocimiento público las variables aludidas en el SIICDO se atentaría directamente en las labores implementadas para el combate a la delincuencia organizada principalmente porque al no tener posibilidades de desagregar la información para realizar versiones públicas necesariamente se tendría que revelar información personal que corresponde al rubro de lo privado, así como estrictamente reservada, lo que se traduce en un perjuicio a la procuración de justicia a favor de la sociedad, debido a que las diferentes organizaciones delictivas pueden obtener datos que sean utilizados para conocer las líneas estratégicas que quedan registradas en dicho sistema seguidas por diversas instancias para identificar patrones y lugares con mayor abundamiento de incidencia delictiva y con ello establecer sus zonas de operación.

En ese sentido, revelar la información solicitada, significa evidenciar los lugares, personas, actividades llevadas a cabo en cumplimiento de las funciones constitucionales de la Fiscalía General de la República y demás instituciones, implicaría que cualquier persona pudiese anticiparse a ellas, estorbando con ellos los actos de investigación y persecución de los delitos que constituyen amenazas al orden público.

**El riesgo del perjuicio** se advierte al considerar que este Centro Nacional conforme a lo establecido en el artículo 93 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República concatenado con los numerales segundo y cuarto transitorios de la Ley de la Fiscalía General de la República cuenta con la facultad para el establecimiento de sistemas y mecanismos de intercambio de información en materia de procuración de justicia, la difusión de cualquier tipo de información relativa a las investigaciones, implica un perjuicio en la coordinación con diversas dependencias con las cuales se han establecido mecanismos de colaboración en beneficio de la procuración de justicia y orden público como elementos sustanciales de la Seguridad Pública. Por ello se insiste en su clasificación de reserva, puesto que su divulgación supone un riesgo en perjuicio de la Seguridad Pública y por ende una afectación directa a la procuración de justicia, dado que dicha información ubica en tiempo y lugar las actividades llevadas a cabo por el personal ministerial, sus auxiliares y demás servidores públicos que coadyuvan en la encomienda de cumplir con los mandatos constitucionales de la Fiscalía General de la República.

Atendiendo el principio de proporcionalidad, se desprende que el reservar la información solicitada, es el medio menos restrictivo de acceso a la información y dicha reserva debe



Instituto Nacional de  
Transparencia, Acceso a la  
Información y Protección de  
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la  
solicitud:** Fiscalía General de la República  
**Folio:** 330024622002060  
**Expediente:** RRA 11901/22  
**Comisionado Ponente:** Francisco Javier Acuña  
Llamas

prevalecer al proteger la seguridad pública la cual atiende a los derechos inherentes a los ciudadanos como la garantía del orden público y la persecución de los delitos.

El hacer del dominio público información contenida en el sistema, implica la revelación de la estructura y fuentes de información relacionadas con la investigación, ello involucra no sólo una afectación en las actividades desempeñadas por este Centro, sino una sublevación que amenaza el orden institucional y por ende la procuración de justicia. Asimismo, se advierte que la difusión de la misma puede entorpecer los sistemas de coordinación interinstitucional en materia de seguridad pública y con ello una afectación directa en el curso de las investigaciones y mecanismos de colaboración en materia de procuración de justicia para el combate a la delincuencia, evitando que se satisfagan de manera oportuna las exigencias actuales de la sociedad,

En este sentido, se advierte un riesgo directo en las acciones tendientes a preservar y resguardar la vida, la salud, la integridad y el ejercicio de los derechos de las personas, así como el mantenimiento del orden público; en razón de lo anterior la reserva de la información requerida, no puede traducirse en un medio restrictivo a su derecho de acceso a la información, toda vez que el interés general se coloca por encima de un interés particular, por ello, la protección otorgada al interés público tiene mayor alcance jurídico que la tutela concedida a los intereses privados.

## **Fracción V**

### **Riesgo real, demostrable e identificable:**

En un primer sentido se debe precisar que el SIICDO contiene información como el nombre y adscripción de los Agentes del Ministerio Público de la Federación, mismos que en el ejercicio de sus atribuciones tienen a cargo la investigación de los delitos relacionados con la delincuencia organizada y conexos, así como datos de las personas analistas que realizan la captura de la información en el mismo

Al tenor de lo anterior, es de considerar que tanto los AMPF como los servidores públicos que integran este Centro Nacional tienen acceso a toda aquella información generada en materia de inteligencia e insumos que son utilizados para la preservación de la seguridad nacional, por lo que dar a conocer datos sobre ellos, pone en riesgo su vida, seguridad, salud e integridad, incluso las de sus familiares.

En adición a lo anterior, la identificación de estas personas físicas y sus actividades en cumplimiento del servicio público que tiene encomendado, permite que eventualmente puedan ser localizados mediante la búsqueda a través de instrumentos como internet, redes sociales, etc.

Ello, toda vez que con la publicidad de dichos datos, conllevaría el riesgo de ser sujetos identificables y susceptibles de amenazas, extorsiones, intimidaciones y atentados por miembros de la delincuencia, ya que al conocer y/o al haber conocido de información inmersa en las averiguaciones previas o carpetas de investigación, así como la derivada



Instituto Nacional de  
Transparencia, Acceso a la  
Información y Protección de  
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la  
solicitud:** Fiscalía General de la República  
**Folio:** 330024622002060  
**Expediente:** RRA 11901/22  
**Comisionado Ponente:** Francisco Javier Acuña  
Llamas

de las labores de inteligencia y contrainteligencia que resulta útil para el combate a la delincuencia organizada, los hace vulnerables de represalias y objetos del crimen para la revelación de datos de su interés.

En esa tesitura, a manera de ejemplo se plantea una hipótesis en la cual se llevará a cabo una búsqueda en medios abiertos de los datos específicos contenidos en SIICDO y que pueden ser relacionados con los nombres de las personas contenidas o actuantes en las averiguaciones previas o carpetas de investigación, conforme a lo siguiente:

1. La búsqueda en medios abiertos y plataformas digitales, a los cuales tiene acceso cualquier persona que cuente con una conexión a internet de un expediente específico, puede arrojar información relacionada con el lugar de los hechos, testigos e incluso de probables responsables y su situación jurídica.
2. Con los datos específicos obtenidos en buscadores abiertos, se pudiera realizar una búsqueda secundaria a través de redes sociales, identificando vínculos familiares, laborales y sociales de víctimas, testigos o imputados señalados en los registros contenidos en SIICDO.
3. A través de la identificación de esos datos, se actualiza un riesgo potencial para obtener patrones de ubicación y datos de personas allegadas a ellos.
4. El posible daño de que pudieran ser objeto las personas identificadas, son extorsiones o coacción para mermar su participación en el desarrollo de las investigaciones o bien para obtener beneficios sobre el curso que lleva la misma en tratándose de probables coautores o partícipes en la comisión de los delitos relacionados con las carpetas o averiguaciones previas.

Luego entonces, es dable concluir que, al dar a conocer la información, se genera un estado de riesgo a su seguridad personal, de sus familias, amigos y todos aquellos individuos que se encuentren dentro de su círculo de proximidad y que derivado de sus actividades puedan ser identificables en circunstancias de tiempo, modo y lugar pues además de tener disponible la información institucional, les sería posible conocer su ubicación y actividades rutinarias, lo cual sería de utilidad, para interceptarlas, aspecto que de ocurrir impactaría negativamente en su seguridad, así como en el debido ejercicio de las facultades y atribuciones que en materia de investigación y persecución de los delitos que tiene el personal de esta Fiscalía.

**Riesgo de perjuicio:** El divulgar datos de los Agentes del Ministerio Público de la Federación y de las personas analistas que coadyuvan con los mismos, los hace blancos identificables y no sólo pone en riesgo su vida, seguridad y salud, así como la de sus familiares, sino también las actividades realizadas por la FGR, toda vez que podrían ser sujetos de amenazas y extorsiones por parte de miembros de la delincuencia, con la finalidad de obtener la información de inteligencia y contrainteligencia para el resguardo de la Seguridad Nacional o simplemente ser blanco de represalias ya que la información de que se trata, está relacionada con el combate y persecución de los delitos materia de los requerimientos ministeriales e incluso de aquellos atribuibles a la delincuencia organizada.



Instituto Nacional de  
Transparencia, Acceso a la  
Información y Protección de  
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la  
solicitud:** Fiscalía General de la República  
**Folio:** 330024622002060  
**Expediente:** RRA 11901/22  
**Comisionado Ponente:** Francisco Javier Acuña  
Llamas

Esto cobra relevancia a la luz del criterio de la Suprema Corte al resolver el amparo directo 2931/20155, en el cual concluyó de manera esencial que, el derecho a ser informado no es absoluto pues a pesar de que el Estado tiene la obligación de informar a la población sobre temas de interés y relevancia pública, también se debe proteger y garantizar el derecho al honor o el derecho a la privacidad de las personas.

De ahí que la calidad de servidor público no suprime los derechos humanos a la vida, seguridad, privacidad que deben gozar las personas. Por el contrario, el interés general a la misma vida, seguridad y privacidad hace necesaria la debida ponderación entre el derecho a la información que no es absoluto frente a los derechos humanos de los servidores públicos de la Fiscalía General de la República y sus familias.

En este sentido resulta indispensable resaltar que el Estado y sus instituciones están obligados a publicar de oficio sólo aquella información que esté relacionada con asuntos de relevancia o interés público que pueda trascender a la vida o el ejercicio de los derechos de las personas y que sea necesaria para garantizar el pleno ejercicio del derecho a la información en su dimensión colectiva, sin embargo, dicha instrucción conlleva una limitante incluso de orden constitucional a través de lo establecido en el artículo 66 , apartado A, fracción VIII en concordancia con las causales previstas y previamente señaladas del artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Bajo esa tesitura, en el caso concreto como ya ha quedado apuntado, la divulgación de la información contenida en SIICDO actualizaría el riesgo de perjuicio para la vida, seguridad o salud de las personas involucradas en dicho sistema, así como para sus familias y personas cercanas a ellos, por lo que el ejercicio de ponderación de derechos de la colectividad que debe prevalecer es aquel relacionado con la procuración de justicia bajo los principios constitucionales contenidos en el artículo 20 de la carta magna, en relación a esclarecer los hechos, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen.

**Principio de proporcionalidad:** La publicidad de los datos del personal señalado afecta las atribuciones constitucionales de la FGR para investigar y perseguir delitos federales, pues revela su capacidad de despliegue y reacción, ya que la recopilación y cruce de información aparentemente inofensiva y aislada para descubrir vulnerabilidades estratégicas que son susceptibles de explotación puede dificultar la procuración de justicia o actos de contra inteligencia.

Es dable reforzar lo antes señalado con lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la controversia constitucional 325/20197, en la que derivado de un estudio de elementos normativos se estableció la salvaguarda del personal sustantivo y administrativo de diversas unidades de la institución.

El reservar la información relacionada con los datos de los AMPF y personas analistas, resulta el medio menos restrictivo, ya que las personas que tienen conocimiento de información de inteligencia y contrainteligencia en contra de la delincuencia, los coloca en





Instituto Nacional de  
Transparencia, Acceso a la  
Información y Protección de  
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la  
solicitud:** Fiscalía General de la República  
**Folio:** 330024622002060  
**Expediente:** RRA 11901/22  
**Comisionado Ponente:** Francisco Javier Acuña  
Llamas

una situación de riesgo, por lo que proteger su vida, seguridad y salud, así como las de sus familiares, es proporcional a la excepción del derecho de acceso a la información. Debido a lo antes expuesto, se concluye que el divulgar o hacer del dominio público cualquier tipo de dato relacionado con estos, pondría en riesgo no sólo su vida, seguridad e integridad o la de sus familiares, sino también el intercambio de información sensible entre las unidades administrativas, comprometiéndola y potenciando el riesgo de que exista fuga.

### **Fracción VII**

**Riesgo real, demostrable e identificable:** La divulgación de los datos contenidos en el SIICDO, al formar parte de una averiguación previa o carpeta de investigación, representa un riesgo real al obstruir las funciones que ejerce el Ministerio Público o su equivalente durante la etapa de investigación.

Lo anterior, en virtud de que, hacer del dominio público datos de los probables responsables, así como los datos de prueba ofrecidos y los productos que se puedan generar de dicha gestión, permitiría descifrar ciertas líneas de investigación y con ello anticiparse a las acciones previstas por el AMP con la finalidad de evitar la acreditación del hecho delictivo o la participación del o los probables responsables.

Aunado a lo anterior, el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales<sup>8</sup>, establece que, los documentos relacionados con la investigación independientemente de su naturaleza o contenido son estrictamente reservados, por ministerio de Ley.

Bajo este argumento, la información alojada en el Sistema para el esclarecimiento de hechos posiblemente constitutivos de delitos, no solo son parte de la investigación, sino un insumo indispensable para la localización de presuntos responsables o incluso la identificación de patrones delincuenciales, por lo que su publicidad representa no sólo una contravención al ánimo del Legislador de salvaguardar esta información, sino un menoscabo directo a las investigaciones y por ende a la procuración de justicia.

Ello es así pues entregar la información solicitada implica exponer los datos de las actividades llevadas a cabo en cumplimiento de las funciones de las instituciones de procuración de justicia y seguridad pública que contribuyen al mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno, así como la preservación de la democracia, fundada en el desarrollo económico social y político del país y sus habitantes, por ende a la seguridad nacional del estado mexicano, ya que las referidas variables al contener datos descriptivos, revelan lugares, personas, actividades llevados a cabo en cumplimiento de las funciones de procuración de justicia de la Fiscalía General de la República, sin que exista alguna circunstancia peculiar que implique de la referida información deba ser de interés para la sociedad, pues se reitera que dicho sistema tiene por objeto analizar la tendencia delictiva en el país o para que las dependencias que participan en el combate a la delincuencia cuenten con lo necesario para operar acciones para el fortalecimiento de investigaciones a cargo de diversas autoridades, siendo por ello que de revelarse dichos rubros se podrían revelar planes



Instituto Nacional de  
Transparencia, Acceso a la  
Información y Protección de  
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la  
solicitud:** Fiscalía General de la República  
**Folio:** 330024622002060  
**Expediente:** RRA 11901/22  
**Comisionado Ponente:** Francisco Javier Acuña  
Llamas

estratégicos y próximos operativos de combate a la delincuencia o lugares específicos que son investigados por diversos hechos denunciados.

Ahora bien es menester considerar que es de interés para la sociedad que la seguridad pública en su vertiente de procuración de justicia sea efectiva, por lo que al entregar la información se provoca que cualquier persona que pudiese aprovecharse de ella, pueda estorbar las estrategias y planes diseñados para los actos de investigación y persecución de los delitos, lo que incluso deriva en la violación del sigilo que deben guardar estas conforme lo dispone el artículo 218 de la Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que llevaría al titular de esta Fiscalía General de la República a incurrir en una responsabilidad conforme lo dispone el artículo 102, Apartado A, constitucional. Insistiéndose que no solo son datos descriptivos de los delitos del orden federal sino inclusive de las entidades federativas y de los municipios.

Siendo por dicha razón que resulta además que estamos imposibilitados jurídicamente evidenciar algún número de averiguación previa/carpeta de investigación o proceso penal determinado, así como de dirección y coordinación de los servidores públicos que llevan a cabo funciones sustantivas y el personal que los auxilia; sin embargo, la existencia de carpetas de investigación/averiguaciones previas, se puede corroborar conforme la incidencia delictiva que se reporta mes con mes y que se encuentra disponible en la página electrónica de Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, aunado a ello se tiene también las cifras que reporta el INEGI disponibles en sus respectivas páginas de internet.

En tal virtud, se debe considerar que tratándose de averiguaciones previas/carpetas de investigación y procesos penales que la revelación de información podría impactar a las partes del proceso penal, las cuales son las únicas legitimadas para tener información al respecto, ya que cuando quien solicita la información no es parte en la indagatoria o proceso, el Estado está obligado a contar con mecanismos menos lesivos al derecho de acceso a la justicia para proteger la difusión del contenido de las investigaciones en curso y la integridad de los expedientes.

**Riesgo de perjuicio:** La información que se encuentra en el SIICDO representa insumos útiles para el Ministerio Público en la obtención de información y datos que permitan conducir al probable responsable o imputado al proceso penal, o, en su caso la identificación de patrones que permitan vincularlo a una organización criminal.

En este tenor, la publicidad de datos específicos derivados de dichos requerimientos, es perjudicial para las acciones realizadas por los AMPF tendentes a la consolidación de su teoría del caso o líneas de acción para la investigación, esto toda vez que, el conocimiento de los mismos permite por analogía establecer ciertos escenarios y circunstancias que no sólo pueden intervenir en las diligencias ministeriales, sino en una afectación a las partes involucradas al ser posibles blancos de extorsión y con ello intervenir en el curso de la investigación.



Instituto Nacional de  
Transparencia, Acceso a la  
Información y Protección de  
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la  
solicitud:** Fiscalía General de la República  
**Folio:** 330024622002060  
**Expediente:** RRA 11901/22  
**Comisionado Ponente:** Francisco Javier Acuña  
Llamas

Abona a lo anterior el hecho de que la divulgación de la información trasciende a los funcionarios públicos de esta Fiscalía General de la República y al ser enlazados o asociados con otra información obtenida de diversas fuentes, a partir de estos, se revelan otros datos que en su conjunto les permiten reconstruir las actividades en cumplimiento del mandato constitucional de buscar datos de prueba relativos a los hechos que se investigan, así como los lugares objeto de futuras diligencias de investigación.

Asimismo, no debe pasar por alto que estas actividades deben realizarse en regiones que son de dominio predominante de delinquentes federales y de grupos delincuenciales, lo que pone en riesgo el alcance y fines de las actividades de investigación e inclusive el ejercicio de la acción penal afectando el normal y correcto cumplimiento de las funciones constitucionales de la Fiscalía General de la República.

En consecuencia, se actualizan los parámetros internacionales consagrados en nuestro artículo 6 Constitucional que prevé, que el derecho de acceso a la información puede limitarse en virtud de: a) interés público, así como remite a la legislación secundaria para el desarrollo de los supuestos específicos en que procedan las excepciones que busquen proteger los bienes constitucionales enunciados como límites al derecho de acceso a la Información.

**Principio de proporcionalidad:** De las manifestaciones vertidas se advierte, la relevancia de mantener la reserva y confidencialidad de los datos inmersos en SIICDO, dicha preminencia se prospecta en el ánimo del legislador para reservar en sentido estricto toda aquella información derivada de actos de investigación, por lo que, partiendo de que las leyes y normas son las bases para la convivencia y tutela de los derechos de los miembros de la sociedad, el interés superior es evidente y se antepone al derecho particular de acceso a la información.

Por lo que dicha reserva debe prevalecer al proteger las funciones de procuración de Justicia que reportan el beneficio o perjuicio de la sociedad mexicana, ya que estas funciones realizadas, por la Fiscalía General de la República, inciden en los intereses de ésta, pues es a los gobernados, a quien le repercute directamente el éxito o fracaso de la sanción penal de los delitos federales conforme a las leyes existentes.

Sin que pase por alto destacar que, también las víctimas de los delitos federales cobran un papel preponderante a considerar, puesto que ante ellas, el estado mexicano tiene el deber de lograr una reparación integral del daño, por lo que de revelarse la información podría resultar contraproducente a las funciones ministeriales que se reitera son de orden público al ser el único órgano constitucionalmente facultado para ejercer la acción penal, así como incidir en la protección de la vida, la seguridad y la salud, de cualquier ciudadano y funcionario público, como bien jurídico tutelado, ya que éstos tienen como fin garantizar en todo momento una procuración de justicia federal eficaz y eficiente apegada a los principios de legalidad certeza jurídica y respeto a los derechos, humanos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás Leyes y Tratados Internacionales.



Instituto Nacional de  
Transparencia, Acceso a la  
Información y Protección de  
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la  
solicitud:** Fiscalía General de la República  
**Folio:** 330024622002060  
**Expediente:** RRA 11901/22  
**Comisionado Ponente:** Francisco Javier Acuña  
Llamas

Robustece lo anterior, la Tesis aislada emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual señala:

[Se transcribe]

### **Fracción X**

**Riesgo real, demostrable e identificable** revelar la información solicitada, significa evidenciar los lugares, personas, actividades llevadas a cabo en cumplimiento de las funciones constitucionales de la Fiscalía General de la República y demás instituciones, implicaría que cualquier persona pudiese anticiparse a ellas, estorbando con ellos los actos de investigación y persecución de los delitos, violentando con ello las garantías del debido proceso.

**Riesgo de perjuicio** es menester puntualizar que en virtud de que el SIICDO representa una herramienta institucional útil para coadyuvar en las labores de investigación y persecución de los delitos a través de la vinculación de diversos elementos útiles para la construcción de la teoría del caso por parte de los AMPF, su divulgación prematura podría causar una afectación al debido proceso, ya que el conocimiento por parte de la contraparte, está supeditado al momento en que los agentes de ministerio público reúnen los elementos necesarios para su presentación ante los órganos jurisdiccionales para la debida administración de justicia.

Asimismo, al darse a conocer datos sensibles de las actividades y ejercicio de las funciones constitucionales la Fiscalía General de la República, datos de personas de carácter de sensibles como tatuajes y media filiación, pues refieren la esfera más íntima de las personas al tratarse de elementos que los identifican, así como otros rubros que contiene el sistema revela líneas y estrategias de investigación, poniendo en riesgo el éxito de las funciones institucionales, frente a imputados del orden federal, que son de alta peligrosidad así como los grupos de la delincuencia organizada, ello, derivado de que las actuaciones de la Fiscalía General de la República, tienen como fin el interés público o general, así como la investigación y persecución de los delitos federales.

A lo anterior se abona el hecho que la divulgación de la información solicitada, al ser enlazada o asociada con otra información obtenida de diversas fuentes, revela otros datos que en su conjunto que les permiten reconstruir las actividades en cumplimiento del mandato constitucional de buscar las pruebas relativas a los hechos que se investigan, los indicios y pruebas que se buscan, los lugares objeto de las diligencias de investigación, sobre todo tomando en cuenta que estas actividades deben realizarse en regiones que son de dominio predominante de delincuentes federales y de grupos delincuenciales.

Luego la divulgación de esta información pondría en riesgo el éxito de las actividades de investigación, afectando el normal y correcto cumplimiento de las funciones constitucionales de la Fiscalía General de la República en combate a la delincuencia organizada.



Instituto Nacional de  
Transparencia, Acceso a la  
Información y Protección de  
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la  
solicitud:** Fiscalía General de la República  
**Folio:** 330024622002060  
**Expediente:** RRA 11901/22  
**Comisionado Ponente:** Francisco Javier Acuña  
Llamas

Bajo esa tesitura es que se actualizan los parámetros internacionales consagrados en nuestro artículo 6 Constitucional, que prevé, que el derecho de acceso a la información puede limitarse en virtud de: a) interés público, b) vida privada y c) datos personales, así como remite a la legislación secundaria para el desarrollo de los supuestos específicos en que procedan las excepciones que busquen proteger los bienes constitucionales enunciados como límites al derecho de acceso a la información.

**Principio de proporcionalidad,** se desprende que el reservar la información solicitada, es el medio menos restrictivo de acceso a la información y dicha reserva debe prevalecer para salvaguardar las garantías establecidas por el legislador al debido proceso, mismas que se encuentran encaminadas a una procuración de justicia eficiente la cual atiende al interés de toda la Nación.

Luego entonces, se debe considerar que la información solicitada puede lesionar gravemente el interés público de la sociedad, ya que muchas veces los datos que se obtienen bajo la tutela del ejercicio del derecho a la información, cuando se correlaciona con otras piezas permitan tener una visión de conjunto del “mosaico” que constituye la estructura y operación de una institución de Procuración de Justicia, como es el caso de la Fiscalía General de la República.

Además, se destaca que la divulgación de la información de los servidores públicos de esta Fiscalía pone en peligro la secrecía constitucional y legal que deben guardar las investigaciones, pues tal información implica la revelación de la identidad de quienes, en el contexto actual, se encuentran al frente y llevan a cabo tareas de alta peligrosidad (investigación y persecución de los delitos federales). Dicha información, frente a los actuales índices y tipos de criminalidad que se viven puede ser utilizada por sujetos ajenos al procedimiento penal para impedir el debido combate a la delincuencia.

## **Fracción XII**

**Riesgo real, demostrable e identificable:** Los datos que conforman el SIICDO permiten allegar al Ministerio Público información útil, que coadyuve eficaz, eficiente, efectiva y oportunamente a la localización, detención o aprehensión de probables responsables, imputados o bien en la identificación y vinculación de elementos que le permitan establecer líneas de investigación. Bajo este contexto y atentos al contenido de los párrafos segundo del artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales y primero del artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la información contenida en las investigaciones a cargo del AMPF es estrictamente reservada, por ministerio de Ley.

**Riesgo de perjuicio:** La información del SIICDO tiene su origen en una indagatoria y su finalidad es, coadyuvar con el Ministerio Público en la obtención de información y datos que permitan conducir al probable responsable o imputado al proceso penal, así como la identificación de elementos que permitan establecer su vínculo con diversas organizaciones criminales o bien con otras investigaciones. En este sentido, es factible señalar que conforme a lo establecido en los artículos 16 del Código Federal de



Instituto Nacional de  
Transparencia, Acceso a la  
Información y Protección de  
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la  
solicitud:** Fiscalía General de la República  
**Folio:** 330024622002060  
**Expediente:** RRA 11901/22  
**Comisionado Ponente:** Francisco Javier Acuña  
Llamas

Procedimientos Penales, 225 fracción XXVIII del Código Penal Federal y 49 fracción V de la Ley General de Responsabilidades Administrativas los servidores públicos que quebranten la reserva de la información serán acreedores a responsabilidades administrativas o del tipo penal que correspondan, en consecuencia la divulgación de la información contenida en el multicitado Sistema, no sólo contradicen lo establecido en los preceptos legales señalados con antelación, sino que revierten sanciones para los servidores públicos que otorguen cualquier tipo de información.

**Principio de proporcionalidad:** De las manifestaciones vertidas se advierte el ánimo del legislador para reservar en sentido estricto toda aquella información derivada de actos de investigación, por lo que, partiendo de que las leyes y normas son las bases para la convivencia y tutela de los derechos de los miembros de la sociedad, el interés superior es evidente y se antepone al derecho particular de acceso a la información.

**11. En relación con el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en liste los datos personales que se encuentran contenidos dentro del Sistema Integral de Información Contra la Delincuencia Organizada.**

- |                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| • Edad                 | • Nacionalidad         |
| • Lugar de nacimiento  | • Fecha de nacimiento  |
| • Estado civil         | • CURP                 |
| • Puesto de trabajo    | • Lugar de trabajo     |
| • Teléfono             | • Licencia de conducir |
| • Nombre completo      | • Fotografía           |
| • Media filiación      | • Alias y/o seudónimo  |
| • Domicilio            | • Firma autógrafa      |
| • Números telefónicos  | • Datos biométricos    |
| • Vínculos familiares  | • Religión             |
| • Tendencia ideológica | • Perfil ideológico    |
| • Clase social         | • Reclusiones          |
| • Cuentas bancarias    | • Tarjetas de crédito  |
|                        | • Tatujes              |

En este sentido es menester señalar que , toda vez que SIICDO es una herramienta ministerial para coadyuvar con la investigación de delitos de delincuencia organizada, el hecho de que los datos personales inmersos en el mismo se ventilen y logren la identificación de diversas personas vinculadas con investigaciones en trámite o pasadas, vulnera su derechos a la privacidad, encontrándose esta Fiscalía General de la República con una imposibilidad jurídica para ventilar datos personales relacionados con indagatorias; ello en virtud de ser información que se ubica en el ámbito de lo privado, al amparo de la figura de la confidencialidad en términos del artículo 113, fracción I de la LFTAIP; ya que hacer de conocimiento público datos personales que hagan identificables a personas implica vincularlos con la comisión de delitos atentando contra la intimidad, honor, buen nombre y presunción de inocencia de la persona en comento.



Instituto Nacional de  
Transparencia, Acceso a la  
Información y Protección de  
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la  
solicitud:** Fiscalía General de la República  
**Folio:** 330024622002060  
**Expediente:** RRA 11901/22  
**Comisionado Ponente:** Francisco Javier Acuña  
Llamas

Por tal motivo, el dar a conocer información que asocie a una persona con la existencia de algún procedimiento relacionado con la comisión de delitos, afectaría directamente su intimidad, honor y buen nombre, incluso vulnera la presunción de inocencia, al generar un juicio a priori por parte de la sociedad, sin que la autoridad competente haya determinado su culpabilidad o inocencia a través del dictado de una sentencia.

Al efecto, se solicita que considere que dichos derechos están constitucional e internacionalmente reconocidos, conforme los artículos 1 y 6 de nuestra Carta Magna, de donde se desprende que toda persona tiene derecho a que se le respete su vida privada y todo lo esto conlleva, así como el normal desarrollo de su personalidad, por lo que inclusive el artículo 6° Apartado A, fracción II Constitucional prevé expresamente:

[Se transcribe]

Finalmente, no es óbice señalar que la fundamentación y motivación de los elementos contenidos en las pruebas de daño materia del presente, no se pueden contextualizar de manera aislada, puesto que cualquier dato cuya divulgación pueda considerarse intrascendente puede afectar, una actividad esencial del Estado mexicano, como lo es la relativa a la procuración de justicia cuando se correlaciona con otras piezas que permitan tener una visión en conjunto

Por lo expuesto y fundado, atentamente solicito a usted C. Comisionado ponente:

**PRIMERO.** - En atención a las consideraciones señaladas en el presente escrito, tener por hechas las manifestaciones en él contenidas.

**SEGUNDO.** - En su oportunidad y previo los trámites de ley, confirme el presente recurso de revisión, conforme a lo dispuesto en el artículo 157 fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.  
[...]” (sic)

**XIII.** El 17 de octubre de 2022, el Secretario de Acuerdos y Ponencia de Acceso a la Información, adscrito a la Oficina del Comisionado Ponente, dictó un acuerdo por medio del cual se decretó el cierre de instrucción en el medio de impugnación que nos ocupa; lo anterior, en términos del artículo 156, fracción VI de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública*.

**XIV.** El 18 de octubre de 2022, se notificó a la Fiscalía General de la República a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, el referido acuerdo de cierre de instrucción.

**XV.** El 18 de octubre de 2022, se notificó a la parte recurrente mediante la Plataforma Nacional de Transparencia el acuerdo de cierre de instrucción de conformidad con lo



Instituto Nacional de  
Transparencia, Acceso a la  
Información y Protección de  
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la  
solicitud:** Fiscalía General de la República  
**Folio:** 330024622002060  
**Expediente:** RRA 11901/22  
**Comisionado Ponente:** Francisco Javier Acuña  
Llamas

establecido en el artículo 149, fracción II, de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública*.

**XVI.** Al día de la presente resolución, no se recibieron manifestaciones adicionales del sujeto obligado.

## CONSIDERANDOS

**PRIMERO.** El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) es competente para pronunciarse respecto del asunto, de conformidad con lo ordenado en el artículo 6o, Apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en el artículo 3o., fracción XIII y los Transitorios Primero y Quinto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como lo dispuesto en los artículos 21, fracción II, 146, 147 y 148, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis; así como los artículos 12, fracciones I y V, y 18, fracciones V, XIV, XV, XVI del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de enero de dos mil diecisiete.

**SEGUNDO.** Por cuestión de técnica jurídica y previo al análisis de fondo, esta autoridad resolutoria analizará de manera oficiosa si en el presente recurso de revisión se actualiza alguna causal de improcedencia o sobreseimiento, ya que debe tomarse en consideración que dichas causales están relacionadas con aspectos necesarios para la válida constitución de un proceso y, al tratarse de una cuestión de orden público, su estudio debe ser preferente.

Al respecto, el artículo 161 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, establece como causales de improcedencia las siguientes:

**Artículo 161.** El recurso será desechado por improcedente cuando:

- I.** Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el artículo 147 de la presente Ley;
- II.** Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el recurrente;
- III.** No actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 148 de la presente Ley;
- IV.** No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el artículo 150 de la presente Ley;
- V.** Se impugne la veracidad de la información proporcionada;





Instituto Nacional de  
Transparencia, Acceso a la  
Información y Protección de  
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la  
solicitud:** Fiscalía General de la República  
**Folio:** 330024622002060  
**Expediente:** RRA 11901/22  
**Comisionado Ponente:** Francisco Javier Acuña  
Llamas

- VI.** Se trate de una consulta, o
- VII.** El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los nuevos contenidos.

Dicho lo anterior, de las constancias que obran en autos, se desprende que **no actualiza ninguna de las causales de improcedencia referidas**, ya que el recurso de revisión que nos ocupa fue presentado en tiempo y forma, ya que como se desprende de autos, la respuesta fue entregada el 09 de agosto de 2022 y la persona solicitante la impugnó el 10 de agosto de la misma anualidad; así, el plazo para la interposición del recurso comenzó a correr a partir del 10 de agosto y feneció el 30 de agosto de 2022, por lo que se encuentra dentro del plazo de 15 días establecido en el artículo 147 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

En ese sentido, de conformidad con el artículo 148 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el recurso de revisión que nos ocupa actualiza lo dispuesto en la fracción I, ya que el agravio de la persona recurrente se centra en la clasificación de la información.

Por otro lado, esta autoridad resolutora no tiene antecedente de la existencia de algún recurso o medio de defensa en trámite ante los tribunales del Poder Judicial Federal por parte de la persona recurrente; no se le realizó prevención alguna, toda vez que el recurso de revisión cumplió con lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; de las manifestaciones de la persona no se desprende que haya impugnado la veracidad de la información proporcionada; que la pretensión estribe en una consulta o que hubiera modificado los términos de su solicitud inicial.

Ahora bien, es de vital importancia el análisis al artículo 162 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, mismo que a continuación se transcribe:

**Artículo 162.** El recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuando, una vez admitido, se actualicen alguno de los siguientes supuestos:

- I.** El recurrente se desista expresamente del recurso;
- II.** El recurrente fallezca o tratándose de personas morales que se disuelvan;
- III.** El sujeto obligado responsable del acto lo modifique o revoque de tal manera que el recurso de revisión quede sin materia, o
- IV.** Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia en los términos del presente Capítulo.



Instituto Nacional de  
Transparencia, Acceso a la  
Información y Protección de  
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la  
solicitud:** Fiscalía General de la República  
**Folio:** 330024622002060  
**Expediente:** RRA 11901/22  
**Comisionado Ponente:** Francisco Javier Acuña  
Llamas

En la especie, del análisis realizado por este Instituto, se advierte que no se actualiza ninguna de las causales de sobreseimiento del artículo en cita, pues la persona solicitante no se ha desistido del recurso; no se tiene conocimiento de que haya fallecido, y el sujeto obligado reiteró su respuesta en alegatos, por lo que el recurso de revisión no quedó sin materia. Por tanto, lo conducente es entrar al estudio de fondo del presente asunto.

### **TERCERO. Resumen de agravios.**

La persona solicitante requirió a la Fiscalía General de la República la entrega, **mediante la Plataforma Nacional de Transparencia**, de la versión pública de la base de datos o las bases de datos que conforman el Sistema Integral de Información Contra la Delincuencia Organizada con el que cuenta el Centro Nacional de Análisis de Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI).

En respuesta, la Fiscalía General de la República, por conducto del **Centro Nacional de Análisis de Información para el Combate a la Delincuencia**, manifestó que, posterior a realizar una búsqueda exhaustiva, el Sistema Integral de Información Contra la Delincuencia Organizada tiene como objetivo suministrar información para la generación de productos para el fortalecimiento de investigaciones a cargo de diversas autoridades.

En ese sentido, precisó que el Sistema Integral de Información Contra la Delincuencia Organizada cuenta con una estructura de 25 módulos y atendiendo a la motivación y naturaleza de su origen como una herramienta para dotar a las autoridades de elementos útiles, contiene datos inherentes a las investigaciones, es decir, el sistema fue diseñado para fines de captura y consulta de información, misma a la que la legislación aplicable en materia penal le otorga una determinada clasificación, por lo que, con la finalidad de salvaguardarla, dicho sistema no contempla la descarga de registros.

Así, la autoridad afirmó que el Centro Nacional de Análisis de Información para el Combate a la Delincuencia se encuentra ante una imposibilidad técnica para proporcionar una versión pública de la base de datos o las bases de datos que conforman el multicitado sistema, en virtud de que su creación obedece a un uso exclusivo para la concreción de fines institucionales en materia de procuración de justicia, lo que da origen a un impedimento material, ya que en su diseño no fue considerada la generación, exportación y/o descarga de reportes y/o registros que pudieran atender lo solicitado, resultando aplicable el Criterio 07/17 emitido por el



Instituto Nacional de  
Transparencia, Acceso a la  
Información y Protección de  
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la  
solicitud:** Fiscalía General de la República  
**Folio:** 330024622002060  
**Expediente:** RRA 11901/22  
**Comisionado Ponente:** Francisco Javier Acuña  
Llamas

Pleno de este Instituto, en el sentido de que no es necesario que el Comité de Transparencia confirme formalmente la inexistencia de la información, en aquellos casos en que no se advierta obligación alguna de los sujetos obligados para contar con la información, derivado del análisis a la normativa aplicable a la materia de la solicitud; y además no se tengan elementos de convicción que permitan suponer que ésta debe obrar en sus archivos.

Inconforme con lo anterior, la persona interpuso ante este Instituto el presente recurso de revisión, mediante el cual impugnó que el sujeto obligado clasificó la información como reservada sin realizar una prueba de daño.

Una vez admitido el presente recurso de revisión, en vía de alegatos, el sujeto obligado reiteró su respuesta, argumentando que la inconformidad de la persona es errónea, dado que en ningún momento clasificó la información peticionada, sino que únicamente se precisó una imposibilidad técnica para poder generar la documental de interés, pues el Sistema Integral de Información Contra la Delincuencia Organizada fue diseñado para fines de captura y consulta de información, misma a la que la legislación aplicable en materia penal le otorga una determinada clasificación, por lo que, con la finalidad de salvaguardarla, dicho sistema no contempla la descarga de registros.

En esa tesitura, la autoridad señaló que reiteraba la imposibilidad técnica para proporcionar una versión pública de la base de datos o las bases de datos que conforman el multicitado sistema, en virtud de que su creación obedece a un uso exclusivo para la concreción de fines institucionales en materia de procuración de justicia, lo que da origen a un impedimento material, ya que en su diseño no fue considerada la generación, exportación y/o descarga de reportes y/o registros que pudieran atender lo solicitado.

Posteriormente, el ente recurrido remitió un alcance a este Instituto, mediante el cual realizó las manifestaciones siguientes:

- Que la Fiscalía creó el Sistema Integral de Información Contra la Delincuencia Organizada como una herramienta interna atendiendo a las atribuciones conferidas al Centro Nacional de Análisis de Información para el Combate a la Delincuencia, para suministrar oportunamente a las unidades administrativas y órganos de la institución la información disponible que requieran para el desempeño de sus funciones.



Instituto Nacional de  
Transparencia, Acceso a la  
Información y Protección de  
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la  
solicitud:** Fiscalía General de la República  
**Folio:** 330024622002060  
**Expediente:** RRA 11901/22  
**Comisionado Ponente:** Francisco Javier Acuña  
Llamas

- Que el Sistema Integral de Información Contra la Delincuencia Organizada cuenta con una estructura de 25 módulos y atendiendo a la motivación y naturaleza de su origen como una herramienta para dotar a las autoridades de elementos útiles, contiene datos personales, así como los inherentes a las investigaciones, por lo que fue diseñado para fines de meramente de captura y consulta de información que auxilia al personal de la Institución que está dedicado a la investigación y persecución de los delitos por lo que inclusive **con la finalidad de salvaguardar la información que se cargó en su momento en dicho sistema, no contempla la descarga de registros.**
- Que el **Sistema Integral de Información contra Delincuencia Organizada (SIICDO)** obedece exclusivamente a la concreción de fines y necesidades institucionales en materia de procuración de justicia, por lo que como medio de seguridad de la información ahí contenida, **no permite la exportación y/o descarga de reportes y/o registros** que pudieran atender lo solicitado por la persona, máxime que este contiene información personal y confidencial, así como estrictamente reservada para esta Institución, debido a que los datos que contiene versan sobre delincuencia organizada, por lo que no se trata solo de procuración de justicia, o de seguridad pública solamente, sino que también involucra a la seguridad nacional.
- Que el Sistema Integral de Información contra Delincuencia Organizada actualmente ya no se encuentra en operación, sin embargo, su funcionalidad y auxilio a las actividades de investigación a cargo de los Agentes del Ministerio Público de la Federación atiende per se a su consulta histórica, precisando que su último registro atiende al mes de agosto de 2022.
- Que derivado de la naturaleza para la que fue creado y en su momento utilizado, el sistema contiene diversos datos personales como: nombres de probable responsable, víctimas, ofendido, testigos, fotografías, señas particulares, media filiación, entre otros, por ello, constituye información clasificada como confidencial, ya que contiene **datos personales** de una persona física identificada o identificable, de conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Que toda vez que dicho registro es para consulta ministerial que coadyuven con la investigación de delitos de delincuencia organizada, es que el hecho de que los datos personales inmersos en el mismo se ventilen y logren la identificación de



Instituto Nacional de  
Transparencia, Acceso a la  
Información y Protección de  
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la  
solicitud:** Fiscalía General de la República  
**Folio:** 330024622002060  
**Expediente:** RRA 11901/22  
**Comisionado Ponente:** Francisco Javier Acuña  
Llamas

diversas personas vinculadas con investigaciones pasadas se vulnera su derechos a la privacidad, encontrándose esta Fiscalía General de la República con una imposibilidad jurídica para ventilar datos personales relacionados con indagatorias; ello en virtud de ser información que se ubica en el ámbito de lo privado, encontrando para tal efecto la protección bajo la figura de la **confidencialidad** en términos del artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; ya que hacer de conocimiento público datos personales que hagan identificables a personas sería vincularlos con la comisión de delitos atentando contra la intimidad, honor, buen nombre y presunción de inocencia de la persona en comento.

- Que el sistema también contiene información personal estrictamente reservada para la Institución, debido a que los datos que contiene versan sobre delincuencia organizada, por lo que no se trata de un tema de seguridad pública solamente, sino que también involucra a la seguridad nacional (artículo 5, fracciones III, V y X de la Ley de Seguridad Nacional), lo que en ambos casos se encuentra tutelado por la causal de reserva prevista en el artículo 110, fracción I de la Ley Federal que regula la materia, pues es fundamental advertir que SIICDO tiene como objetivo principal la colaboración con el Ministerio Público Federal mediante la integración de la información de las averiguaciones previas y carpetas de investigación, esto a través de elaboración de herramientas, para la generación de análisis estratégico de apoyo a las labores ministeriales de inteligencia.
- Que el sistema contempla dos grupos de información básica, individuos y organizaciones, a partir de la cual se establecen los vínculos entre estos y los módulos periféricos de los delitos que lo conforman, por lo que la sensibilidad y naturaleza de la información que se aloja en el multicitado sistema deviene de que su contenido incluye por mencionar algunos, el análisis de las transcripciones que derivan de la escucha de audios relacionados con las averiguaciones previas y carpetas de investigación, productos de inteligencia que derivan de la sistematización y análisis de los datos inmersos en el mismo, tales como redes de vínculos que establecen la representación gráfica de vínculos existentes entre diversos objetivos, redes técnicas en las que se establece la relación entre comunicaciones, documentos relativos a los requerimientos ministeriales con nombres y puesto del personal a cargo de atenderlo, fotografías, así como audios y videos que están intrínsecamente relacionados con las investigaciones incoadas por diversos delitos.



Instituto Nacional de  
Transparencia, Acceso a la  
Información y Protección de  
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la  
solicitud:** Fiscalía General de la República  
**Folio:** 330024622002060  
**Expediente:** RRA 11901/22  
**Comisionado Ponente:** Francisco Javier Acuña  
Llamas

- Que la divulgación de la información contenida en dicho sistema implica per se la revelación de una fuente específica que resulta útil para la adecuada procuración de justicia, pues como se detalló en líneas precedentes resultan necesarias para las labores de inteligencia tendentes a la persecución de los delitos y al combate a la delincuencia organizada, elementos inherentes a la seguridad nacional.
- Que la entrega de cualquier dato contenido en el sistema conlleva un riesgo real al dificultar las estrategias o acciones para combatir la delincuencia organizada por parte de la institución. Ello puesto que de ser revelada, podría derivar en un mal uso de estos por parte de las organizaciones criminales, a las cuales se estaría dando cuenta de las fuentes y métodos a través de los que se vinculan datos útiles para la conformación de las investigaciones, con lo cual se estaría impidiendo a las autoridades procuradoras de justicia, actuar contra la delincuencia organizada y por ende se actualizaría el riesgo de obstaculizar o bloquear actividades de inteligencia o contrainteligencia, por parte del Estado.
- Que el riesgo que implica la divulgación de la información requerida, compromete la seguridad pública, al poner en peligro el intercambio de información y las acciones interinstitucionales a cargo de la Federación, la Ciudad de México, los Estados y los Municipios para el desempeño de sus atribuciones encaminadas a la procuración de justicia.
- Que si bien el derecho de acceso a la información tiene como finalidad principal que cualquier persona pueda solicitar información que obre en los archivos de los sujetos obligados, y de acuerdo a lo previsto en el artículo 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Fiscalía General de la República, es un sujeto obligado en la materia, lo cierto es que, entre sus facultades, no se encuentra la de crear bases de datos que contengan estadística que deba hacerse del conocimiento del público en general, sino que la creación de este Sistema Integral de Información Contra la Delincuencia Organizada (SIICDO) tiene como objetivo suministrar información para la generación de productos para el fortalecimiento de investigaciones a cargo de diversas autoridades.
- Que **no existe obligación para la Institución de tener contar con una base de datos como el SIICDO, sino que se creó al interior de la Institución para dotar a las autoridades de información útil inherente a las investigaciones de delitos de delincuencia organizada y, por tanto, por el formato que se utilizó**



Instituto Nacional de  
Transparencia, Acceso a la  
Información y Protección de  
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la  
solicitud:** Fiscalía General de la República  
**Folio:** 330024622002060  
**Expediente:** RRA 11901/22  
**Comisionado Ponente:** Francisco Javier Acuña  
Llamas

**en su creación para que la información que contiene no fuera exportable, es imposible compartir su contenido.**

- **Que el sistema fue creado de tal manera que no sea posible que la información que contiene sean exportable**, ya que cualquier dato que se difunda, por más aislado e inofensivo que parezca, de conformidad con la “teoría del mosaico” –que ya fue aceptada y aplicada por el Pleno de la Suprema Corte–, podría ser conectado con otros datos igual de aparentemente dispersos con el fin de afectar la estrategia de investigación y persecución de los delitos de delincuencia organizada, vulnerando así la capacidad del Estado para hacer frente a estos fenómenos criminales de tan alto impacto para el país, por lo que, lo contrario impactaría de manera importante a la facultad de investigación y persecución de esta Fiscalía General, en obvio detrimento a la seguridad pública y nacional del país, y, por tanto, al interés público.

Así, este Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales efectuó un requerimiento de información adicional a la Fiscalía General de la República, el cual fue atendido en los términos siguientes:

**1. Señale respecto del Sistema Integral de Información Contra la Delincuencia Organizada, la naturaleza de dicho Sistema, es decir, explique de forma detallada el funcionamiento de almacenamiento de datos en el mismo.**

- ✍ Esta Fiscalía creó el SIICDO como una herramienta interna atendiendo a las atribuciones conferidas al Centro Nacional de Análisis de Información para el Combate a la Delincuencia, para suministrar oportunamente a las unidades administrativas y órganos de la institución la información disponible que requieran para el desempeño de sus funciones.
- ✍ Al respecto, SIICDO cuenta con una estructura de 25 módulos y atendiendo a la motivación y naturaleza de su origen como una herramienta para dotar a las autoridades de elementos útiles, contiene datos personales, así como los inherentes a las investigaciones, por lo que fue diseñado para fines de meramente de captura y consulta de información que auxilia al personal de la Institución que está dedicado a la investigación y persecución de los delitos por lo que inclusive con la finalidad de salvaguardar la información que se cargó en su momento en dicho sistema, no contempla la descarga de registros.



Instituto Nacional de  
Transparencia, Acceso a la  
Información y Protección de  
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la  
solicitud:** Fiscalía General de la República  
**Folio:** 330024622002060  
**Expediente:** RRA 11901/22  
**Comisionado Ponente:** Francisco Javier Acuña  
Llamas

- ✗ Los usuarios finales que integran las áreas sustantivas del CENAPI, capturan las variables de información que integran el Sistema SIICDO, a través de la interacción y llenado de la interfaz gráfica **que almacena la información en una unidad de almacenamiento resguardada en el Centro de Datos del CENAPI**

**2. Indique si es posible la extracción, exportación o descarga de los datos registrados en dicho Sistema.**

- ✗ La naturaleza del Sistema Integral de Información contra Delincuencia Organizada (SIICDO) obedece exclusivamente a la concreción de fines y necesidades institucionales en materia de procuración de justicia, por lo que, como medio de seguridad de la información ahí contenida, **no permite la extracción, exportación y/o descarga de los datos.**
- ✗ Asimismo, es necesario puntualizar que el Sistema de mérito **no es una base de datos exportable**, como pudiera ser por ejemplo un archivo en formato Excel; sino que es un sistema que como herramienta tecnológica contiene datos inherentes a las investigaciones y cuyo objetivo primordial es el de dotar a las autoridades de elementos útiles, de ahí que no cuente con datos de carácter genérico que puedan exponerse al hoy recurrente.
- ✗ A mayor abundamiento es necesario señalar que derivado de la naturaleza del Sistema no es posible descargar o sistematizar la información que contiene en reportes o documentos en formato Excel, Word, PDF o CSV.
- ✗ Derivado de la estructura de la información y de la cantidad de registros que contiene no es materialmente posible generar uno a uno la captura de los documentos, registros, archivos de imagen y audio (escuchas) así como de los demás elementos que conforman el presente sistema, para con ello atender lo requerido por el particular.
- ✗ En resumen, al consultarse el sistema a través de un equipo de cómputo dentro de la red interna, la información puede ser extraída mediante la captura de pantallas, ello derivado a que esta funcionalidad es propia de los equipos de trabajo, más no propia del sistema de mérito.
- ✗ A lo anterior debemos sumar que existen disposiciones legales que mandatan la reserva de la información de todos aquellos registros de voz e imágenes o cosas que estén relacionados con las averiguaciones previstas o carpetas de





Instituto Nacional de  
Transparencia, Acceso a la  
Información y Protección de  
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la  
solicitud:** Fiscalía General de la República  
**Folio:** 330024622002060  
**Expediente:** RRA 11901/22  
**Comisionado Ponente:** Francisco Javier Acuña  
Llamas

investigación, disposición que se contravendría al realizar capturas de pantalla de la información, tal como se advierte en lo establecido por el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales se estable que:

- ✧ “...Los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en este Código y demás disposiciones aplicables.
- ✧ Lo que se robustece con lo previsto en el artículo 16 del entonces Código Federal de Procedimientos Penales, aplicable a la información relativa a las averiguaciones previas que se encuentra sistema que hoy nos ocupa, al tenor de lo siguiente:
- ✧ “...Al expediente de averiguación previa únicamente tendrán acceso el inculpado, su defensor y la víctima u ofendido o su representante legal. La averiguación previa así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, y los objetos, registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados...” (énfasis añadido)
- ✧ Bajo este contexto, se puede advertir la imposibilidad para la exportación y descarga de la información, puesto que aun en el supuesto sin conceder que se generaran capturas de pantalla, se estaría contraviniendo las disposiciones adjetivas de la materia, antes señaladas, a las cuales se suma lo previsto por el artículo 20 de la Ley de la Fiscalía General de la República en el que se precisa que las personas que reciban la información deberán resguardarla con la reserva o confidencialidad que amerite el caso.

**3. Señale con precisión los rubros, módulos o componentes del Sistema requerido por el particular.**



Instituto Nacional de  
Transparencia, Acceso a la  
Información y Protección de  
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la  
solicitud:** Fiscalía General de la República  
**Folio:** 330024622002060  
**Expediente:** RRA 11901/22  
**Comisionado Ponente:** Francisco Javier Acuña  
Llamas

- Actos Terroristas
- Delitos ambientales
- Extorsión
- Falsificación de Moneda
- Individuos más buscados
- Libertad de Expresión
- Organizaciones
- Retratos hablados
- Robo de vehículos
- Tatuajes
- Tráfico de órganos
- Trata de personas
- Asaltos
- Delitos Electorales
- Falsificación de Documentos
- Individuos
- Lavado de dinero
- Narcotráfico
- Piratería
- Robo de Hidrocarburo
- Secuestros
- Tráfico de indocumentados
- Tráfico de piezas
- Tráfico de sustancias químicas controladas

**4. En atención a la manifestación efectuada en el escrito de alegatos, relativa a: contiene información personal y confidencial, así como. estrictamente reservada para esta Institución, en relación con la fracción I, del artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública explique de qué forma se compromete la seguridad pública, se ponen en peligro las funciones a cargo de la Federación, la Ciudad de México, los Estados y los Municipios, tendientes a preservar y resguardar la vida, la salud, la integridad y el ejercicio de los derechos de las personas, así como para el mantenimiento del orden público.**

✍ El contexto de la información contenida en el sistema de mérito, se encuentra intrínsecamente relacionado a las atribuciones conferidas a la Fiscalía General de la República, antes Procuraduría General de la República, esto debido a que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 21, párrafo noveno, prevé que la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son la salvaguarda de la vida, la libertad, la integridad y el patrimonio de las personas, así como la contribución a la generación y preservación del orden público y la paz social.

✍ De ahí que es dable apuntar que la seguridad pública conlleva la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la aplicación de sanciones por infracciones administrativas.

✍ En este orden de ideas, se desarrolla el objetivo principal de SIICDO, toda vez que advierte la colaboración que se lleva a cabo con los Agentes del Ministerio Público, mediante la recopilación de la información que se integra a las averiguaciones



Instituto Nacional de  
Transparencia, Acceso a la  
Información y Protección de  
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la  
solicitud:** Fiscalía General de la República  
**Folio:** 330024622002060  
**Expediente:** RRA 11901/22  
**Comisionado Ponente:** Francisco Javier Acuña  
Llamas

previas y carpetas de investigación, esto a través de elaboración de herramientas, para la generación de análisis estratégico de apoyo a las labores ministeriales y la generación de productos de inteligencia.

- ✗ Lo anterior cobra relevancia para la seguridad pública, ya que en el marco del “CONVENIO de Colaboración que celebran la Procuraduría General de la República, la Procuraduría General de Justicia Militar y las Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia de las entidades federativas”, el SIICDO se constituye como la herramienta informática que permite la eficacia de este tipo de mecanismos de coordinación y colaboración recíproca para el cumplimiento de las funciones de procuración de justicia en los ámbitos de la Federación, la Ciudad de México, los Estados y los Municipios, con lo cual se logra adoptar una política integral que permite diseñar y ejecutar estrategias conjuntas en la lucha contra la delincuencia. Luego entonces, de una concatenación de los elementos manifestados en líneas anteriores, podemos concluir que la divulgación de cualquiera de los datos contenidos en el sistema materia del presente, compromete la seguridad pública por su estrecha relación con la procuración de justicia, puesto que el propósito fundamental de ambas es la reducción de la violencia y el combate a los delitos incluidos aquellos que mayor grado de vulnerabilidad causan a la sociedad, como son el homicidio, el secuestro e incluso la delincuencia organizada.
- ✗ En razón de lo antes expuesto, la publicidad de cualquier dato contenido en el expediente por más mínimo y aislado que pueda creerse, conlleva la revelación de información que al ser analizada y asociada con el contenido de otras fuentes y/o medios podría ser utilizada para entorpecer, retrasar o desviar las investigaciones a cargo de los Ministerios Públicos, esto a través de la identificación de personas, circunstancias y lugares que podrían ser aprovechados para implementar acciones de extorsión, amenazas y/o corrupción para obstaculizar la prevención, investigación y persecución de los delitos.
- ✗ Lo anterior, implica un perjuicio directo a la seguridad pública pues pone potencialmente en riesgo las funciones a cargo de la Federación, la Ciudad de México, los Estados y los Municipios, no solo en el ámbito de la procuración de justicia, si no de aquellos tendientes a preservar y resguardar la vida, la salud, la integridad y el ejercicio de los derechos de las personas, así como para el mantenimiento del orden público.

**5. En relación con la fracción V, del artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, acredite el vínculo, entre**



Instituto Nacional de  
Transparencia, Acceso a la  
Información y Protección de  
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la  
solicitud:** Fiscalía General de la República  
**Folio:** 330024622002060  
**Expediente:** RRA 11901/22  
**Comisionado Ponente:** Francisco Javier Acuña  
Llamas

**alguna persona física y la información que pueda poner en riesgo su vida, seguridad o salud.**

- ✍ En un primer punto se debe precisar que el SIICDO contiene información que ubica en modo, tiempo y lugar a los Agentes del Ministerio Público de la Federación, mismos que en el ejercicio de sus atribuciones tienen a cargo la investigación de delitos de delincuencia organizada y conexos, así como datos de las personas analistas que realizan la captura de la información en el mismo.
- ✍ Bajo este tenor, la identificación de estas personas físicas en cumplimiento del servicio público que tiene encomendado, permite que eventualmente puedan ser localizados mediante la búsqueda a través de herramientas como internet. redes sociales o cualquier fuente abierta y con ello ser susceptibles de amenazas, extorsiones, intimidaciones y atentados por miembros de la delincuencia, ya que el conocer y/o haber conocido información inmersa en las averiguaciones previas o carpetas de investigación, así como la derivada de las labores de inteligencia y contrainteligencia los convierte en un blanco perfecto y de fácil acceso para los grupos criminales que pretenden allegarse de datos de su interés para evadir la justicia o bien para concertar represalias por las acciones que hubiesen impactado en la comisión de los delitos asociados a los mismos,
- ✍ Ahora bien, no es óbice señalar que de igual forma el SIICDO como herramienta para dotar a las autoridades de elementos útiles contiene datos de personas físicas tales como nombre completo, media filiación, números telefónicos, datos biométricos y vínculos familiares, mismos que hacen plenamente identificable a los sujetos inmersos en las investigaciones, así como a su círculo de proximidad más cercano, esto es relaciones familiares, sociales o de su entorno económico.
- ✍ En este sentido, la publicidad de cualquiera de los datos señalados en líneas precedentes permite la identificación de una persona relacionada con una averiguación o carpeta de investigación, así como la de sus seres cercanos, lo que de forma implícita representa un riesgo para su seguridad e integridad física pues serían objetos de represalias y señalamientos, ello con independencia de la calidad que tengan en dicha investigación. Por lo anterior, es dable concluir que la información contenida en SIICDO se encuentra plenamente vinculada a personas físicas tanto Agentes del Ministerio Público de la Federación, personas analistas y aquellas que forman parte de la averiguación previa y/o carpeta de investigación, cuya divulgación representa un riesgo a su seguridad e integridad, la de sus familias, amigos y todos aquellos individuos que se encuentren dentro del referido



Instituto Nacional de  
Transparencia, Acceso a la  
Información y Protección de  
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la  
solicitud:** Fiscalía General de la República  
**Folio:** 330024622002060  
**Expediente:** RRA 11901/22  
**Comisionado Ponente:** Francisco Javier Acuña  
Llamas

círculo de proximidad y que derivado de sus actividades puedan ser identificables en circunstancias de tiempo, modo y lugar, lo que implica un acceso fácil a su ubicación y con ello a cualquier atentado en contra de su vida a efecto de obtener información relacionada con el caso o bien evitar el esclarecimiento de los hechos y la localización de los probables responsables.

**6. En relación con la fracción VII, del artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la, Información Pública, acredite lo siguiente:**

- ✍ El SIICDO es un sistema que se encuentra conformado por datos recolectados de una gran cantidad de averiguaciones previas y carpetas de investigación, mismas que se encuentran en diversos estados de substanciación y trámite.
- ✍ Sin embargo, es preciso señalar que derivado de la cantidad de datos alojados en el mismo el estatus de cada uno de los expedientes, se encuentra en permanente actualización derivado de las acciones llevadas a cabo por los agentes del Ministerio público de la Federación y de las Entidades Federativas, por lo que el rastreo del estado que guardan resulta materialmente imposible.
- ✍ Asimismo, la divulgación de los datos contenidos en el SIICDO, al formar parte de una averiguación previa o carpeta de investigación, representa un riesgo real al obstruir las funciones que ejerce el Ministerio Público o su equivalente durante la etapa de investigación.
- ✍ Lo anterior, en virtud de que, el vínculo entre la información solicitada y las carpetas de investigación emana del contenido de los mismos ya que hacen referencia a probables responsables, así como datos de prueba ofrecidos y productos generados en dicha gestión, lo cual permitiría conocer las líneas de investigación seguidas en cada caso particular y con ello anticiparse a las acciones previstas por el AMP con la finalidad de evitar la acreditación del hecho delictivo o la participación del o los probables responsables.
- ✍ Aunado a lo anterior, como ya quedo apuntado los artículos 218 y 16 del Código Nacional de Procedimientos Penales y del entonces Código Federal de Procedimientos Penales, respectivamente, establecen que, los documentos relacionados con la investigación independientemente de su naturaleza o contenido son estrictamente reservados, por ministerio de Ley.



Instituto Nacional de  
Transparencia, Acceso a la  
Información y Protección de  
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la  
solicitud:** Fiscalía General de la República  
**Folio:** 330024622002060  
**Expediente:** RRA 11901/22  
**Comisionado Ponente:** Francisco Javier Acuña  
Llamas

- ✗ Bajo este argumento, la información alojada en el Sistema para el esclarecimiento de hechos posiblemente constitutivos de delitos como parte de la investigación, representa un insumo indispensable para la localización de presuntos responsables o incluso la identificación de patrones delincuenciales, por lo que su publicidad representa no sólo una contravención al ánimo del Legislador de salvaguardar esta información, sino un menoscabo directo a las investigaciones y por ende a la procuración de justicia.
- ✗ En tal virtud, se debe considerar que tratándose de averiguaciones previas/carpetas de investigación y procesos penales que la revelación de información podría impactar a las partes del proceso penal, las cuales por mandato de ley son las únicas legitimadas para tener información al respecto, ya que cuando quien solicita la información no es parte en la indagatoria o proceso, el Estado está obligado a contar con mecanismos menos lesivos al derecho de acceso a la justicia para proteger la difusión del contenido de las investigaciones en curso y la integridad de los expedientes.
- ✗ En razón de lo anterior, podemos concluir la importancia que tiene para las carpetas de investigación/averiguaciones previas o procesos penales en trámite, mantener su reserva.

**7. En relación con la fracción X, del artículo 110, de la Ley de la materia, indique lo siguiente:**

- ✗ Como se ha manifestado en líneas precedentes, el SIICDO contiene datos de averiguaciones previas y carpetas de investigación en trámite, es decir el origen de estos, parte de los expedientes sustanciados para las investigaciones a cargo de los AMP, por lo que sus estados procesales se encuentran en permanente actualización, en tal virtud atento al cúmulo de registros que conforman el sistema que hoy nos ocupa, representaría llevar a cabo un trabajo para la elaboración de un documento ad hoc, con una erogación excesiva de recursos humanos y materiales.
- ✗ Asimismo, es preciso señalar que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 102 en su apartado A, señala que el Ministerio Público de la Federación se organizará en una Fiscalía General de la República, aunado a ello el artículo 5 de la Ley de la Fiscalía General de la República establece que al Ministerio Público de la Federación le corresponde, en representación de los intereses de la



Instituto Nacional de  
Transparencia, Acceso a la  
Información y Protección de  
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la  
solicitud:** Fiscalía General de la República  
**Folio:** 330024622002060  
**Expediente:** RRA 11901/22  
**Comisionado Ponente:** Francisco Javier Acuña  
Llamas

sociedad: la investigación y la persecución de los delitos del orden federal y los de su competencia ante los tribunales.

- ✧ En este orden de ideas podemos concluir que la Fiscalía General de la República a través de los AMPF es parte en cada uno de los procedimientos contenidos en SIICDO, al conocer de los hechos posiblemente constitutivos de delito, dirigir la investigación y participar activamente en el desarrollo de audiencias derivadas de los diversos expedientes que tiene a su cargo, ello con responsabilidades dirigidas a la impartición de justicia en beneficio de las víctimas u ofendidos y de la sociedad en su conjunto.
- ✧ Asimismo, es menester puntualizar que en virtud de que el SIICDO representa una herramienta institucional útil para coadyuvar en las labores de investigación y persecución de los delitos a través de la vinculación de diversos elementos útiles para la construcción de la teoría del caso por parte de los AMPF, su divulgación prematura podría causar una afectación al debido proceso, ya que el conocimiento por parte de la contraparte, está supeditado al momento en que los agentes de ministerio público reúnen los elementos necesarios para su presentación ante los órganos jurisdiccionales para la debida administración de justicia.
- ✧ En suma, la afectación que podría ocasionar al debido proceso la difusión de la información, parte de lo previsto en el artículo 12 del Código Nacional de Procedimientos Penales mismo que prevé como elementos del debido proceso la imparcialidad en la sustanciación de los asuntos, así como el pleno respeto a los derechos humanos. A mayor abundamiento el Código Nacional de Procedimientos Penales, específicamente en su artículo 15, dispone que cualquier persona tiene derecho a que se respeten éstos; así como que se proteja la información de su vida privada y datos personales, ya que, de revelar alguna información, aún de forma indirecta, atentaría contra su intimidad, honor, inclusive su buen nombre; lo cual se adminicula con lo establecido en el artículo 218 del mismo Código Adjetivo, que ordena la estricta reserva de cualquier dato que se encuentre contenido en las investigaciones.
- ✧ De lo aquí apuntado, se concluye que hacer del dominio público la información de cualquier dato contenido en el SIICDO, por aislado que parezca e incluso insignificante, a través de una concatenación de elementos de carácter público que permitan su analogía implica el quebrantamiento a diversos principios que rigen el sistema penal como los son: el de presunción de inocencia, debido proceso y la tutela judicial efectiva; del mismo modo, se pondría en riesgo el pleno ejercicio de



Instituto Nacional de  
Transparencia, Acceso a la  
Información y Protección de  
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la  
solicitud:** Fiscalía General de la República  
**Folio:** 330024622002060  
**Expediente:** RRA 11901/22  
**Comisionado Ponente:** Francisco Javier Acuña  
Llamas

algún acto o acción de las partes en la investigación, además de que con dichos datos se podría obtener información que vulneraría la seguridad e identidad de las víctimas u ofendidos, y consecuentemente, trastocar su derecho a la reparación del daño.

- ✍ Sin que sea óbice para lo anterior, destacar que SIICDO no contiene datos genéricos sino intrínsecamente vinculados entre sí en razón de un individuo o expediente por lo que contempla perfiles de seguridad restringidos para su consulta.

**8. En relación con la fracción XII, del artículo 110, de la Ley de la materia, indique lo siguiente:**

- ✍ A lo largo de las manifestaciones vertidas para dar cumplimiento al requerimiento materia del presente, han sido reiterados los argumentos en los que se puntualiza que, derivado del cumulo de expedientes contenidos en el sistema y del origen de los mismos como los son las averiguaciones previas y carpetas de investigación a cargo de los AMP, el rastreo de los estados que guardan actualmente los mismos, resulta materialmente imposible, de ahí que se evidencia el riesgo de la divulgación prematura de los datos, puesto que tanto en aquellos procesos penales que se encuentren en reserva como en archivo temporal, como en aquellos que hubieran sido judicializados existiría un riesgo de posible afectación al curso de las investigaciones, puesto que existen casos en los que se deriva un desglose de investigación por delitos conexos o diversos probables responsables implicados.
- ✍ Lo anterior, puesto que SIICDO se encuentra alimentado por información propia de la Carpeta de Investigación en la que se incluyen las diligencias que realizan los AMP para allegarse de información útil que les permita establecer líneas de investigación para el esclarecimiento de los hechos posiblemente constitutivos de delito hechos de su conocimiento, por lo que la acreditación de que los datos contenidos en el Sistema queda superada con la conjunción de los elementos manifiestos a través del presente.
- ✍ Ahora bien, respecto al marco normativo que lo regula, es de señalar que el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su apartado A, señala que el Ministerio Público de la Federación se organizará en una Fiscalía General de la República, por su parte el artículo 21 de la misma norma suprema prevé que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio





Instituto Nacional de  
Transparencia, Acceso a la  
Información y Protección de  
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la  
solicitud:** Fiscalía General de la República  
**Folio:** 330024622002060  
**Expediente:** RRA 11901/22  
**Comisionado Ponente:** Francisco Javier Acuña  
Llamas

de esta función, destacando que el ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde a éste.

- ✂ Aunado a ello el artículo 5 de la Ley de la Fiscalía General de la República establece que al Ministerio Público de la Federación le corresponde, en representación de los intereses de la sociedad: la investigación y la persecución de los delitos del orden federal y los de su competencia ante los tribunales. Disposiciones legales en las que se enmarcan las atribuciones del Ministerio Público para llevar a cabo la investigación y persecución de los delitos, de las cuales emanaron los requerimientos de información que dieron origen a los datos contenidos en SIICDO.
- ✂ Ahora bien, a efecto de abundar en los argumentos que sustentan que la información del SIICDO puede afectar la conducción de los expedientes seguidos en forma de juicio y establecer el nexo causal entre la misma y el procedimiento invocado, se debe contemplar que las actuaciones ministeriales derivan necesariamente en un proceso judicial, por lo que cualquier afectación a la información de la que pueda allegarse el AMP para sustentar su teoría del caso en la etapa de juicio repercute paralelamente en el desarrollo de las audiencias.
- ✂ En este sentido debemos reiterar que el nexo causal entre los datos que conforman el SIICDO y el procedimiento invocado, se encuentra en las atribuciones propias del Ministerio Público, las cuales le permiten allegarse de información útil, que coadyuve eficaz, eficiente, efectiva y oportunamente a la localización, detención o aprehensión de probables responsables, imputados o bien en la identificación y vinculación de elementos que le permitan establecer líneas de investigación.
- ✂ Bajo este contexto y atentos al contenido de los párrafos segundo del artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales<sup>3</sup> y primero del artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales<sup>4</sup>, la información contenida en las investigaciones a cargo del AMPF es estrictamente reservada, por ministerio de Ley. Por cuanto hace a la prueba de daño requerida en este apartado, la misma será desarrollada en el numeral 10 del presente desahogo de requerimiento de información adicional.

**9. Respecto de cada una de las fracciones referidas del artículo 110, de la Ley de la materia, indique con precisión las secciones, o rubros de información que acreditan cada una de las causales de reserva.**



Instituto Nacional de  
Transparencia, Acceso a la  
Información y Protección de  
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la  
solicitud:** Fiscalía General de la República  
**Folio:** 330024622002060  
**Expediente:** RRA 11901/22  
**Comisionado Ponente:** Francisco Javier Acuña  
Llamas

✂ El Sistema Integral de Información Contra la Delincuencia Organizada tiene como objetivo generar productos de información táctica y estratégica para el combate de los 15 delitos tipificados como delincuencia organizada, contando con 24 campos que se encuentran asociados a expedientes y objetivos específicos (individuos) mismos que se enlistan a continuación:

- |  |                           |
|--|---------------------------|
| • Asaltos                                    | • Actos Terroristas       |
| • Delitos Electorales                        | • Delitos ambientales     |
| • Falsificación de Documentos                | • Extorsión               |
| • Individuos                                 | • Falsificación de Moneda |
| • Lavado de dinero                           | • Individuos más buscados |
| • Narcotráfico                               | • Libertad de Expresión   |
| • Piratería                                  | • Organizaciones          |
| • Robo de Hidrocarburo                       | • Retratos hablados       |
| • Secuestros                                 | • Robo de vehículos       |
| • Tráfico de indocumentados                  | • Tatuajes                |
| • Tráfico de piezas                          | • Tráfico de órganos      |
| • Tráfico de sustancias químicas controladas | • Trata de personas       |

En ese orden de ideas, la presente resolución analizará el agravio de la parte recurrente en función de la respuesta que le fue notificada, ello, en términos de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública*.

**CUARTO. Litis y procedencia.** De las manifestaciones vertidas por la persona recurrente, se advierte que la Litis en el presente medio de impugnación consiste en la clasificación de la información.

Establecida así la controversia, la presente resolución tendrá por objeto determinar la legalidad de la respuesta emitida por parte de la Fiscalía General de la República, a la luz del agravio de la persona recurrente. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y demás disposiciones aplicables.

**QUINTO. Estudio de fondo.**

Ahora bien, cabe retomar que la parte recurrente indicó como agravio la clasificación de la información.



Instituto Nacional de  
Transparencia, Acceso a la  
Información y Protección de  
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la  
solicitud:** Fiscalía General de la República  
**Folio:** 330024622002060  
**Expediente:** RRA 11901/22  
**Comisionado Ponente:** Francisco Javier Acuña  
Llamas

En ese sentido, de manera inicial y en relación con el procedimiento que deben seguir los sujetos obligados para dar atención a las solicitudes, se debe destacar que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece lo siguiente:

**ARTÍCULO 130.** Las Unidades de Transparencia auxiliarán a los particulares en la elaboración de las solicitudes de acceso a la información, en particular en los casos en que el solicitante no sepa leer ni escribir. Cuando la información solicitada no sea competencia del sujeto obligado ante el cual se presente la solicitud de acceso, la Unidad de Transparencia orientará al particular sobre los posibles sujetos obligados competentes.

...

Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre así lo permita.

...

**ARTÍCULO 133.** Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo con sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada.

De lo anterior, se desprende lo siguiente:

- Los sujetos obligados deberán otorgar el acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con las facultades, competencias o funciones que le sean conferidas, en el formato en que le sean solicitados, conforme a las características físicas de la información o del lugar en donde se encuentre.
- Las Unidades de Transparencia deben garantizar que las solicitudes de información se turnen a todas las áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla, de acuerdo con sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que éstas realicen la búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada.

En relación con lo anterior, y derivado de las constancias que obran en el presente expediente, se tiene que el sujeto obligado turnó la solicitud de acceso al **Centro Nacional de Análisis de Información para el Combate a la Delincuencia**, quien de conformidad con el Manual de Organización General de la Procuraduría General de la República<sup>1</sup>, se encarga de establecer y proporcionar los sistemas de información

<sup>1</sup> Disponible en: [https://www.dof.gob.mx/nota\\_detalle.php?codigo=5423438&fecha=25/01/2016#gsc.tab=0](https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5423438&fecha=25/01/2016#gsc.tab=0)



Instituto Nacional de  
Transparencia, Acceso a la  
Información y Protección de  
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la  
solicitud:** Fiscalía General de la República  
**Folio:** 330024622002060  
**Expediente:** RRA 11901/22  
**Comisionado Ponente:** Francisco Javier Acuña  
Llamas

estadística y análisis para la generación de productos de información encaminados a desalentar las conductas ilícitas derivadas de la delincuencia.

Así las cosas, se concluye que la unidad administrativa consultada cuenta con atribuciones para conocer de lo requerido

Ahora bien, se debe retomar que el interés de la parte recurrente fue acceder a la versión pública de la base de datos que conforman el Sistema Integral de Información Contra la Delincuencia Organizada con el que cuenta el Centro Nacional de Análisis de Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI).

En respuesta, el sujeto obligado, por conducto del **Centro Nacional de Análisis de Información para el Combate a la Delincuencia**, manifestó que, posterior a realizar una búsqueda exhaustiva, el Sistema Integral de Información Contra la Delincuencia Organizada tiene como objetivo suministrar información para la generación de productos para el fortalecimiento de investigaciones a cargo de diversas autoridades.

En ese sentido, precisó que el Sistema Integral de Información Contra la Delincuencia Organizada cuenta con una estructura de 25 módulos y atendiendo a la motivación y naturaleza de su origen como una herramienta para dotar a las autoridades de elementos útiles, contiene datos inherentes a las investigaciones, es decir, el sistema fue diseñado para fines de captura y consulta de información, misma a la que la legislación aplicable en materia penal le otorga una determinada clasificación, por lo que, con la finalidad de salvaguardarla, dicho sistema no contempla la descarga de registros.

Así, la autoridad afirmó que el Centro Nacional de Análisis de Información para el Combate a la Delincuencia se encuentra ante una imposibilidad técnica para proporcionar una versión pública de la base de datos o las bases de datos que conforman el multicitado sistema, en virtud de que su creación obedece a un uso exclusivo para la concreción de fines institucionales en materia de procuración de justicia, lo que da origen a un impedimento material, ya que en su diseño no fue considerada la generación, exportación y/o descarga de reportes y/o registros que pudieran atender lo solicitado, resultando aplicable el Criterio 07/17 emitido por el Pleno de este Instituto, en el sentido de que no es necesario que el Comité de Transparencia confirme formalmente la inexistencia de la información, en aquellos casos en que no se advierta obligación alguna de los sujetos obligados para contar con la información, derivado del análisis a la normativa aplicable a la materia de la



Instituto Nacional de  
Transparencia, Acceso a la  
Información y Protección de  
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la  
solicitud:** Fiscalía General de la República  
**Folio:** 330024622002060  
**Expediente:** RRA 11901/22  
**Comisionado Ponente:** Francisco Javier Acuña  
Llamas

solicitud; y además no se tengan elementos de convicción que permitan suponer que ésta debe obrar en sus archivos.

Cabe señalar que este Instituto realizó una búsqueda de información pública, localizando el 5° Informe de Labores del sujeto obligado<sup>2</sup>, en el cual se menciona que el **Sistema Integral de Información Contra la Delincuencia Organizada** (SIICDO) tiene como objetivo generar productos de información táctica y estratégica para el combate de los 15 delitos tipificados como delincuencia organizada.

Asimismo, se señala que la información ha fortalecido la integración de las averiguaciones previas, permitiendo un ejercicio expedito en la investigación de delitos.

El sistema cuenta con 24 módulos de operación, con un total de 1 millón 160 mil 476 registros acumulados al 30 de junio de 2017, contra el mismo número de módulos y 1 millón 134 mil 759 registros acumulados al 30 de junio de 2016.

Con el propósito de mantener la confiabilidad y seguridad de la información que se almacene en el Sistema de Registro de Detenidos, es competencia exclusiva de la AIC/CENAPI el administrar el sistema a nivel de usuarios. En el periodo del 1° de septiembre de 2016 al 30 de junio de 2017, se capacitó a 363 personas para el registro, consulta y/o supervisión del SIREDD; asimismo, se crearon 264 cuentas de usuario y se ingresaron 7 mil 520 registros de detención, los cuales corresponden a 10 mil 433 personas involucradas.

Esto es, el sistema de interés, fue creado para generar productos de información táctica y estratégica para el combate de los 15 delitos tipificados como delincuencia organizada, siendo competencia exclusiva del Centro Nacional de Análisis de Información para el Combate a la Delincuencia el administrar el sistema.

Cabe señalar que el sujeto obligado en ningún momento clasificó la información, sino que señaló que tiene la imposibilidad técnica para proporcionar una versión pública de la base de datos o las bases de datos que conforman el multicitado sistema, en virtud de que su creación obedece a un uso exclusivo para la concreción de fines institucionales en materia de procuración de justicia, lo que da origen a un impedimento material, ya que en su diseño no fue considerada la generación, exportación y/o descarga de reportes y/o registros que pudieran atender lo solicitado.

---

<sup>2</sup> Disponible en: <https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/253665/8.AIC.pdf>



Instituto Nacional de  
Transparencia, Acceso a la  
Información y Protección de  
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la  
solicitud:** Fiscalía General de la República  
**Folio:** 330024622002060  
**Expediente:** RRA 11901/22  
**Comisionado Ponente:** Francisco Javier Acuña  
Llamas

Así, ante la manifestación del sujeto obligado, se estima que existe un impedimento para proporcionar la documentación con los parámetros indicados.

Luego entonces, se advierte que **la solicitud fue turnada a la unidad administrativa competente**, quien ya precisó que después de realizar una búsqueda exhaustiva, no cuenta en sus archivos con la información solicitada, toda vez que la base de datos no fue diseñada para la generación, exportación y/o descarga de sus reportes y/o registros.

Ahora bien, a efecto de abundar sobre la naturaleza del **Sistema Integral de Información Contra la Delincuencia Organizada**, se efectuó un requerimiento de información adicional a la Fiscalía General de la República.

Así, respecto de la naturaleza del Sistema Integral de Información Contra la Delincuencia Organizada, la Fiscalía General de la República, informó que creó el SIICDO como una herramienta interna atendiendo a las atribuciones conferidas al Centro Nacional de Análisis de Información para el Combate a la Delincuencia, para suministrar oportunamente a las unidades administrativas y órganos de la institución la información disponible que requieran para el desempeño de sus funciones.

Al respecto, SIICDO cuenta con una estructura de 25 módulos y atendiendo a la motivación y naturaleza de su origen como una herramienta para dotar a las autoridades de elementos útiles, contiene datos personales, así como los inherentes a las investigaciones, por lo que fue diseñado para fines **meramente de captura y consulta de información** que auxilia al personal de la Institución que está dedicado a la investigación y persecución de los delitos por lo que inclusive con la finalidad de **salvaguardar la información que se cargó en su momento en dicho sistema, no contempla la descarga de registros.**

Los usuarios finales que integran las áreas sustantivas del CENAPI, capturan las variables de información que integran el Sistema SIICDO, a través de la interacción y llenado de la interfaz gráfica **que almacena la información en una unidad de almacenamiento resguardada en el Centro de Datos del CENAPI.**

Asimismo, la Fiscalía General de la República, informó que la naturaleza del Sistema Integral de Información contra Delincuencia Organizada (SIICDO) obedece exclusivamente a la concreción de fines y necesidades institucionales en materia de



Instituto Nacional de  
Transparencia, Acceso a la  
Información y Protección de  
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la  
solicitud:** Fiscalía General de la República  
**Folio:** 330024622002060  
**Expediente:** RRA 11901/22  
**Comisionado Ponente:** Francisco Javier Acuña  
Llamas

procuración de justicia, por lo que, como medio de seguridad de la información ahí contenida, **no permite la extracción, exportación y/o descarga de los datos.**

Lo anterior, en tanto **no es una base de datos exportable**, como pudiera ser por ejemplo un archivo en formato Excel; sino que es un sistema que como herramienta tecnológica contiene datos inherentes a las investigaciones y cuyo objetivo primordial es el de dotar a las autoridades de elementos útiles, de ahí que no cuente con datos de carácter genérico que puedan exponerse al hoy recurrente.

A mayor abundamiento es necesario señalar que **derivado de la naturaleza del Sistema no es posible descargar o sistematizar la información que contiene en reportes o documentos en formato Excel, Word, PDF o CSV.**

Derivado de la estructura de la información y de la cantidad de registros que contiene **no es materialmente posible generar uno a uno la captura de los documentos, registros, archivos de imagen y audio (escuchas)** así como de los demás elementos que conforman el presente sistema, para con ello atender lo requerido por el particular.

Bajo este contexto, se puede advertir la imposibilidad que tiene el sujeto obligado para la exportación y descarga de la información, es decir, para permitir el acceso en una versión pública, puesto que **NO ES POSIBLE descargar o sistematizar la información en formato algún formato Excel, Word, PDF o CSV, ello derivado de que no es una base de datos exportable que permita la extracción, exportación y/o descarga de los datos.**

En consecuencia, la única opción de consulta sería de la de consulta directa, no obstante, el sujeto obligado aludió a la imposibilidad de la misma, en tanto el Sistema en análisis cuenta con información de carácter reservado y confidencial, por lo que resulta necesario efectuar el análisis de las causales aludidas por la Fiscalía General de la República.

→ **Causal de reserva de la información en relación con el artículo 110, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.**

En principio, resulta necesario analizar la causal de clasificación contenida en el artículo 110, fracción I de la Ley de la materia.



Instituto Nacional de  
Transparencia, Acceso a la  
Información y Protección de  
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la  
solicitud:** Fiscalía General de la República  
**Folio:** 330024622002060  
**Expediente:** RRA 11901/22  
**Comisionado Ponente:** Francisco Javier Acuña  
Llamas

**Artículo 110.** Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:

I. Comprometa la **seguridad nacional**, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable;  
[...]

Por su parte, la *Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública*, dispone lo siguiente:

**Artículo 113.** Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:

I. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable;

Asimismo, debe señalarse el “*Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas*”, establece lo siguiente:

**Décimo octavo.** De conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, aquella que comprometa la seguridad pública, al poner en peligro las funciones a cargo de la Federación, la Ciudad de México, los Estados y los Municipios, tendientes a preservar y resguardar la vida, la salud, la integridad y el ejercicio de los derechos de las personas, así como para el mantenimiento del orden público.

Se pone en peligro el orden público cuando la difusión de la información pueda entorpecer los sistemas de coordinación interinstitucional en materia de seguridad pública, menoscabar o dificultar las estrategias contra la evasión de reos; o menoscabar o limitar la capacidad de las autoridades encaminadas a disuadir o prevenir disturbios sociales.

Del Lineamiento en cita, se desprende que, podrá considerarse como información reservada, aquella que comprometa **la seguridad pública**, al poner en peligro las funciones a cargo de la Federación, la Ciudad de México, los Estados y los Municipios, tendientes a preservar y resguardar la vida, la salud, la integridad y el ejercicio de los derechos de las personas, así como para el mantenimiento del orden público.

Se pone en peligro el orden público cuando la difusión de la información pueda **entorpecer los sistemas de coordinación interinstitucional en materia de seguridad pública, menoscabar o dificultar las estrategias contra la evasión de**





Instituto Nacional de  
Transparencia, Acceso a la  
Información y Protección de  
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la  
solicitud:** Fiscalía General de la República  
**Folio:** 330024622002060  
**Expediente:** RRA 11901/22  
**Comisionado Ponente:** Francisco Javier Acuña  
Llamas

**reos; o menoscabar o limitar la capacidad de las autoridades encaminadas a  
disuadir o prevenir disturbios sociales.**

Al respecto, el sujeto obligado efectuó las siguientes manifestaciones:

- ✍ De ahí que es dable apuntar que la seguridad pública conlleva la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la aplicación de sanciones por infracciones administrativas.
- ✍ En este orden de ideas, se desarrolla el objetivo principal de SIICDO, toda vez que advierte la colaboración que se lleva a cabo con los Agentes del Ministerio Público, mediante la recopilación de la información que se integra a las averiguaciones previas y carpetas de investigación, esto a través de elaboración de herramientas, para la generación de análisis estratégico de apoyo a las labores ministeriales y la generación de productos de inteligencia.
- ✍ En razón de lo antes expuesto, la publicidad de cualquier dato contenido en el expediente por más mínimo y aislado que pueda creerse, conlleva la revelación de información que al ser analizada y asociada con el contenido de otras fuentes y/o medios podría ser utilizada para entorpecer, retrasar o desviar las investigaciones a cargo de los Ministerios Públicos, esto a través de la identificación de personas, circunstancias y lugares que podrían ser aprovechados para implementar acciones de extorsión, amenazas y/o corrupción para obstaculizar la prevención, investigación y persecución de los delitos.
- ✍ Lo anterior, implica un perjuicio directo a la seguridad pública pues pone potencialmente en riesgo las funciones a cargo de la Federación, la Ciudad de México, los Estados y los Municipios, no solo en el ámbito de la procuración de justicia, si no de aquellos tendientes a preservar y resguardar la vida, la salud, la integridad y el ejercicio de los derechos de las personas, así como para el mantenimiento del orden público.

De lo anterior, se advierte que el Sistema Integral de Información Contra la Delincuencia Organizada, es una herramienta para dotar a las autoridades de elementos útiles, con datos inherentes a las investigaciones, no es información que pueda entorpecer los sistemas de coordinación interinstitucional en materia de seguridad pública, menoscabar o dificultar las estrategias contra la evasión de reos; o menoscabar o limitar la capacidad de las autoridades encaminadas a disuadir o prevenir disturbios sociales.



Instituto Nacional de  
Transparencia, Acceso a la  
Información y Protección de  
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la  
solicitud:** Fiscalía General de la República  
**Folio:** 330024622002060  
**Expediente:** RRA 11901/22  
**Comisionado Ponente:** Francisco Javier Acuña  
Llamas

Así, la Ley de Seguridad Nacional<sup>3</sup> en sus artículos 3, 5, fracción III, 12 y 13 dispone lo siguiente:

- Que la Ley de Seguridad Nacional tiene por objeto establecer las bases de integración y acción coordinada de las instituciones y autoridades encargadas de preservar la seguridad nacional, en sus respectivos ámbitos de competencia; así como, la forma y los términos en que las autoridades de las entidades federativas y los municipios colaborarán con la Federación en dicha tarea; regular los instrumentos legítimos para fortalecer los controles aplicables a la materia.
- Las **acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano**, que conlleven son aquellas, entre otras las de **protección de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrente nuestro país**.
- Son amenazas a la Seguridad Nacional los actos que impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada.
- Que para la coordinación de acciones orientadas a preservar la seguridad nacional se establece el Consejo de Seguridad Nacional, que estará integrado por:
  - El Titular del Ejecutivo Federal, quien lo preside;
  - El Secretario de Gobernación, quien funge como Secretario Ejecutivo;
  - El Secretario de la Defensa Nacional;
  - El Secretario de Marina;
  - El Secretario de Seguridad Pública;
  - El Secretario de Hacienda y Crédito Público;
  - El Secretario de la Función Pública;
  - El Secretario de Relaciones Exteriores;
  - El Secretario de Comunicaciones y Transportes;
  - **El Fiscalía General de la República**, y
  - El Director General del Centro de Investigación y Seguridad Nacional.

---

<sup>3</sup> Disponible en: [https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LSegNac\\_200521.pdf](https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LSegNac_200521.pdf)



Instituto Nacional de  
Transparencia, Acceso a la  
Información y Protección de  
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la  
solicitud:** Fiscalía General de la República  
**Folio:** 330024622002060  
**Expediente:** RRA 11901/22  
**Comisionado Ponente:** Francisco Javier Acuña  
Llamas

- Que el Consejo de Seguridad Nacional es una instancia deliberativa cuya finalidad es establecer y articular la política en la materia, por tanto conoce, entre otras cosas, de la integración y coordinación de los esfuerzos orientados a preservar la seguridad nacional; lineamientos que permitan el establecimiento de políticas generales para la seguridad nacional; de la definición anual de la Agenda Nacional de Riesgos, así como su seguimiento; de los programas de cooperación internacional; de los procesos de clasificación y desclasificación de información en materia de seguridad nacional, y los demás que establezcan otras disposiciones o el Presidente de la República.
- Que se entiende por inteligencia el conocimiento obtenido a partir de la recolección, procesamiento, diseminación y explotación de información, para la toma de decisiones en materia de seguridad nacional. La información sólo podrá ser recabada, compilada, procesada y diseminada con fines de seguridad nacional por las instancias autorizadas.
- Que cada instancia representada en el Consejo de Seguridad Nacional es responsable de la administración, protección, clasificación, desclasificación y acceso de la información que genere o custodie, en términos de la Ley de la materia.
- Que es información reservada por motivos de seguridad nacional: **(i)** aquella cuya aplicación implique la revelación de normas, procedimientos, métodos, fuentes, especificaciones técnicas, tecnología o equipo útiles a la generación de inteligencia para la seguridad nacional, sin importar la naturaleza o el origen de los documentos que la consignent, o **(ii)** aquella cuya revelación pueda ser utilizada para actualizar o potenciar una amenaza.

Por su parte, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública<sup>4</sup> establece lo siguiente:

**“Artículo 1.-** La presente Ley es reglamentaria del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Seguridad Pública y tiene por objeto regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como establecer la distribución de competencias y las bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios, en esta materia. Sus disposiciones son de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio nacional.

---

<sup>4</sup> Disponible en: <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGSNSP.pdf>



Instituto Nacional de  
Transparencia, Acceso a la  
Información y Protección de  
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la  
solicitud:** Fiscalía General de la República  
**Folio:** 330024622002060  
**Expediente:** RRA 11901/22  
**Comisionado Ponente:** Francisco Javier Acuña  
Llamas

Artículo 5.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

...

II. **Bases de Datos:** Las bases de datos que constituyen subconjuntos sistematizados de la información contenida en Registros Nacionales en materias relativas a detenciones, armamento, equipo y personal de seguridad pública, medidas cautelares, soluciones alternas y formas de terminación anticipada, así como las bases de datos del Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno relativas a la información criminalística, huellas dactilares de personas sujetas a un proceso o investigación penal, teléfonos celulares, personas sentenciadas y servicios de seguridad privada, así como las demás necesarias para la prevención, investigación y persecución de los delitos. **El conjunto de bases de datos conformará el Sistema Nacional de Información;**

...

XVII. **Sistema Nacional de Información:** al Sistema Nacional de Información en Seguridad Pública, el cual constituye el conjunto integrado, organizado y sistematizado de las Bases de Datos. Está integrado por elementos metodológicos y procedimentales que permiten a las Instituciones de Seguridad Pública su consulta e interconexión para el desempeño de sus funciones.

...

Artículo 7.- Conforme a las bases que establece el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Instituciones de Seguridad Pública de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, en el ámbito de su competencia y en los términos de esta Ley, deberán coordinarse para:

...

IX. Generar, compartir, intercambiar, ingresar, almacenar y proveer información, archivos y contenidos a las Bases de Datos que integran el Sistema Nacional de Información, de conformidad con lo dispuesto en la legislación en la materia.

Tratándose de manejo de datos que provengan del Registro Nacional de Detenciones se atenderá a lo dispuesto en la Ley Nacional del Registro de Detenciones;

X. Realizar acciones y operativos conjuntos de las Instituciones de Seguridad Pública;

Artículo 109.- La **Federación, las entidades federativas y los Municipios, suministrarán, consultarán y actualizarán la información que diariamente se genere sobre Seguridad Pública mediante los sistemas e instrumentos tecnológicos respectivos**, al Sistema Nacional de Información.

El Presidente del Consejo Nacional dictará las medidas necesarias, además de las ya previstas en la Ley, para la integración y preservación de la información administrada y sistematizada mediante los instrumentos de información sobre Seguridad Pública.

**Las Instituciones de Seguridad Pública tendrán acceso a la información contenida en el Sistema Nacional de Información, en el ámbito de su función de prevención,**



Instituto Nacional de  
Transparencia, Acceso a la  
Información y Protección de  
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la  
solicitud:** Fiscalía General de la República  
**Folio:** 330024622002060  
**Expediente:** RRA 11901/22  
**Comisionado Ponente:** Francisco Javier Acuña  
Llamas

**investigación y persecución de los delitos, o como auxiliares en el ejercicio de dichas funciones, según corresponda.**

El Centro Nacional de Información podrá utilizar las Bases de Datos del Sistema Nacional de Información, para generar productos que apoyen la planificación de acciones orientadas a alcanzar los objetivos del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La información sobre impartición de justicia podrá ser integrada al Sistema Nacional de Información a través de convenios con el Poder Judicial de la Federación, los Tribunales Superiores de Justicia de los tres órdenes de gobierno, en sus respectivos ámbitos de competencia y con estricto apego a las disposiciones legales aplicables.

El acceso al Sistema Nacional de Información estará condicionado al cumplimiento de esta Ley, los acuerdos generales, los convenios y demás disposiciones que de la propia Ley emanen.

**Artículo 110.-** Los integrantes del Sistema están obligados a permitir la **interconexión** de sus Bases de Datos para compartir la información sobre Seguridad Pública con el Sistema Nacional de Información, en los términos de esta Ley y otras disposiciones jurídicas aplicables.

Para efecto de dar cumplimiento al párrafo anterior, **se adoptarán los mecanismos tecnológicos necesarios para la interconexión en tiempo real y respaldo de la información.**

La información contenida en las Bases de Datos del Sistema Nacional de Información, podrá ser certificada por la autoridad respectiva y tendrá el valor probatorio que las disposiciones legales determinen.

**Se clasifica como reservada la información contenida en todas y cada una de las Bases de Datos del Sistema Nacional de Información,** así como los Registros Nacionales y la información contenida en ellos, en materia de **detenciones, información criminal, personal de seguridad pública, personal y equipo de los servicios de seguridad privada, armamento y equipo, vehículos, huellas dactilares, teléfonos celulares, medidas cautelares, soluciones alternas y formas de terminación anticipada, sentenciados** y las demás necesarias para la operación del Sistema, cuya consulta es exclusiva de las instituciones de Seguridad Pública que estén facultadas en cada caso, a través de los servidores públicos que cada institución designe, por lo que el público no tendrá acceso a la información que en ellos se contenga.”

...

**Artículo 117.-** La Federación, las entidades federativas y los Municipios serán responsables de integrar y **actualizar el Sistema Nacional de Información, con la información que generen las Instituciones de Procuración de Justicia e Instituciones Policiales, que coadyuve a salvaguardar la integridad y derechos de las personas,** así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos, mediante la prevención, persecución y sanción de las infracciones y delitos, así como la reinserción social.



Instituto Nacional de  
Transparencia, Acceso a la  
Información y Protección de  
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la  
solicitud:** Fiscalía General de la República  
**Folio:** 330024622002060  
**Expediente:** RRA 11901/22  
**Comisionado Ponente:** Francisco Javier Acuña  
Llamas

Artículo 118.- Las Bases de Datos que integran el Sistema Nacional de Información se actualizarán permanentemente y serán de **consulta obligatoria para garantizar la efectividad en las actividades de Seguridad Pública.**

Las Bases de Datos criminalísticas se conformarán de la información que aporten las instituciones de procuración de justicia y del sistema penitenciario, relativa a las investigaciones, órdenes de detención y aprehensión, procesos penales, sentencias o ejecución de penas.

El Registro Nacional de Detenciones se vinculará con las Bases de Datos a que se refiere el presente artículo, mediante el número de identificación al que hace referencia la ley de la materia.

”  
...“

En esta ley general se establece que son bases de datos, aquellas que constituyen subconjuntos sistematizados de la información contenida en **Registros Nacionales en materias relativas a detenciones, armamento, equipo y personal de seguridad pública, medidas cautelares, soluciones alternas y formas de terminación anticipada**, así como las bases de datos del Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno necesarias para la prevención, investigación y persecución de los delitos.

Estas bases de datos, se constituyen en el **Sistema Nacional de Información en Seguridad Pública**, el cual es el conjunto integrado, organizado y sistematizado, y que queda **integrado por elementos metodológicos y procedimentales que permiten a las Instituciones de Seguridad Pública su consulta e interconexión para el desempeño de sus funciones.**

Ahora bien, para la constitución, se establece que la Federación, las entidades federativas y los Municipios, **suministrarán, consultarán y actualizarán** la información que diariamente se genere sobre seguridad pública mediante los sistemas e instrumentos tecnológicos respectivos.

Asimismo, se indica que las instituciones de Seguridad Pública tendrán acceso a la información contenida en el Sistema Nacional de Información, en el ámbito de su **función de prevención, investigación y persecución de los delitos, o como auxiliares en el ejercicio de dichas funciones.**



Instituto Nacional de  
Transparencia, Acceso a la  
Información y Protección de  
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la  
solicitud:** Fiscalía General de la República  
**Folio:** 330024622002060  
**Expediente:** RRA 11901/22  
**Comisionado Ponente:** Francisco Javier Acuña  
Llamas

Del mismo modo, se establece que los integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Pública<sup>5</sup> están obligados a permitir la **interconexión de sus bases de datos para compartir la información sobre seguridad pública** con el Sistema Nacional de Información, además de que la información contenida en este sistema podrá ser certificada por la autoridad respectiva y tendrá el valor probatorio que las disposiciones legales determinen.

Al respecto, debe decirse que, en el año 2012, a través del **CONVENIO de Colaboración que celebran la Procuraduría General de la República, la Procuraduría General de Justicia Militar y las Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia de las entidades federativas**<sup>6</sup>, la otrora Procuraduría General de la República, la Procuraduría General de Justicia Militar, y las Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia de las Entidades Federativas, acordaron los siguiente:

- Establecer mecanismos para la coordinación y colaboración recíproca en sus respectivos ámbitos de competencia, y adoptar una política integral que permita diseñar y ejecutar estrategias conjuntas en la lucha contra la delincuencia.
- En materia de intercambio de información, se acordó el uso de sistemas de informática se realizará con absoluto respeto a las disposiciones constitucionales y legales de carácter federal, así como de cada entidad federativa, para lo cual se comprometieron consolidar y homologar sus sistemas informáticos y tecnológicos para el suministro, intercambio, consulta, análisis y actualización de información
- Asimismo, se comprometieron a establecer sistemas estadísticos mediante criterios uniformes para obtener información que favorezca la identificación de parámetros de medición en materia de incidencia y seguimiento de denuncias de hechos posiblemente delictivos presentadas ante el Ministerio Público o la Policía, con base en los módulos que las partes, establezcan de común acuerdo, privilegiando los delitos con alto impacto social, así como aquellos para los que procede la prisión preventiva.

<sup>5</sup> **Artículo 10.-** El Sistema se integrará por: I. El Consejo Nacional de Seguridad Pública, que será la instancia superior de coordinación y definición de políticas públicas; II. La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia; III. La Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública o sus equivalentes; IV. La Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario; V. La Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal; VI. Los Consejos Locales e Instancias Regionales, y VII. El Secretariado Ejecutivo del Sistema. El Poder Judicial de la Federación y los Tribunales Superiores de Justicia contribuirán con las instancias que integran el sistema, en la formulación de estudios, lineamientos e implementación de acciones que permitan alcanzar los fines de la seguridad pública.

<sup>6</sup> Disponible en: [https://www.dof.gob.mx/nota\\_detalle.php?codigo=5278988&fecha=23/11/2012#gsc.tab=0](https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5278988&fecha=23/11/2012#gsc.tab=0)



Instituto Nacional de  
Transparencia, Acceso a la  
Información y Protección de  
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la  
solicitud:** Fiscalía General de la República  
**Folio:** 330024622002060  
**Expediente:** RRA 11901/22  
**Comisionado Ponente:** Francisco Javier Acuña  
Llamas

- Por cuanto hace a la prevención del delito, se comprometieron a promover y participar en coordinación con el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, en la inclusión de contenidos relativos a la prevención del delito y en general en los diversos programas que implementen, con base en la incidencia delictiva.
- Mientras que, respecto a **la persecución del delito**, se acordó **intercambiar información en forma ágil y oportuna**, con pleno respeto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Constituciones Políticas de los Estados integrantes de la Federación, y desarrollar mecanismos de cooperación para la investigación de los delitos en los que se apliquen tecnologías de punta.

De esa forma se puede observar que en el Sistema de mérito, se encuentra información puntual sobre cada evento delictivo, esto es, circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos, así como el lugar del hallazgo, las características de las personas reportadas en los eventos delictivos, además de las detenciones y aseguramientos, posicionamiento geográfico, situaciones que podrían ser de utilidad para las células delictivas al conocer datos del operativo, los lugares específicos de acción de las dependencias que buscan el combate a la delincuencia organizada y que vulneran la seguridad nacional.

Esto, en tanto que en los referidos módulos integran los registros de las operaciones institucionales realizadas por los tres órdenes de gobierno, que permite aplicar estrategias y líneas de acción para acotar y combatir a la delincuencia; esto implica, el cumplimiento de la función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, de preservar la **seguridad pública** mediante la salvaguarda de la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social.

Igualmente, se desprende que la información requerida, permitiría a terceros obtenerla y utilizarla en contra de los propósitos para los que fue recabada, con lo cual se **accedería a información privilegiada y debilitar con ello la capacidad de reacción de las Instituciones con funciones de seguridad y procuración de justicia**; es decir, se estaría revelando la metodología, operaciones y acciones tácticas de las instituciones encargadas de la seguridad nacional y la seguridad para el combate al crimen organizado.

Como se observa, la información de referencia, da cuenta **del seguimiento cotidiano de los movimientos que van teniendo los diversos grupos relacionados con la**





Instituto Nacional de  
Transparencia, Acceso a la  
Información y Protección de  
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la  
solicitud:** Fiscalía General de la República  
**Folio:** 330024622002060  
**Expediente:** RRA 11901/22  
**Comisionado Ponente:** Francisco Javier Acuña  
Llamas

**delincuencia organizada**, lo cual puede advertirse como un producto de inteligencia, y que adicionalmente da cuenta no sólo del estudio que se formula sobre los movimientos de los integrantes del crimen organizados, sino además, de las estrategias que la Fiscalía General de la República, la Procuraduría General de Justicia Militar y las Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia de las entidades federativas ha desplegado y despliega en la totalidad del territorio nacional para el combate a la delincuencia.

Máxime que en la Ley de Seguridad Nacional se prevé que la información que debe ser reservada por razones de seguridad nacional, es aquella que implique la revelación de normas, procedimientos, métodos, fuentes, especificaciones técnicas, tecnología o equipo útiles a la generación de inteligencia para la seguridad nacional, sin importar la naturaleza o el origen de los documentos que la consignent; o bien, aquella cuya revelación pueda ser utilizada para actualizar o potenciar una amenaza.

Por lo tanto, este Instituto advierte que **se actualiza la causal de reserva establecida en el artículo 110 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública**, toda vez que la información requerida representa una herramienta en materia de **seguridad nacional y pública**, en tanto que contiene información estratégica de cuerpos de seguridad para la investigación y persecución de los delitos que vulnera las funciones de seguridad pública a cargo de la Federación, la Ciudad de México, los Estados y los Municipios.

Así, de conformidad con el artículo 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concatenación con el diverso 104 de la Ley General de la materia, este Instituto considera que:

- **La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés del público**, ya que la revelación de las circunstancias y características del lugar y dependencias asociadas a los eventos conlleva la revelación intrínseca de la metodología, operaciones y acciones tácticas de las instituciones encargadas de la Seguridad Nacional para el cumplimiento de sus facultades. Es decir, revelar la desagregación y otorgamiento de los módulos en cuestión da cuenta de las características específicas de los eventos delictivos, implica un riesgo real a las labores del Estado en materia de seguridad nacional.
- **El riesgo de perjuicio supera el interés público general de que se difunda**, ya que la divulgación de la información en comento propiciaría que integrantes de la delincuencia organizada o cualquier persona ajena esté en oportunidad



Instituto Nacional de  
Transparencia, Acceso a la  
Información y Protección de  
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la  
solicitud:** Fiscalía General de la República  
**Folio:** 330024622002060  
**Expediente:** RRA 11901/22  
**Comisionado Ponente:** Francisco Javier Acuña  
Llamas

de conocer las líneas estratégicas que quedan registradas en dicho sistema seguidas por diversas instancias para identificar patrones y lugares con mayor abundamiento de incidencia delictiva y con ello establecer sus zonas de operación.

- **La limitación se adecúa al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio**, pues la medida tomada consistente en la reserva de la información por un tiempo determinado resulta idónea para evitar un perjuicio en las **labores de inteligencia que son producto del intercambio de información entre diversas dependencias**, mismas que se encuentran dirigidas a **combatir la delincuencia organizada** y los delitos conexos, derivando en una obstrucción directa para la prevención y persecución de delitos y vulnerando la conducción de las relaciones interinstitucionales en materia de narcotráfico y delincuencia organizada, lo que representa un menoscabo para el bienestar social y el interés público, en razón de lo expuesto, la reserva de la información requerida, no puede traducirse en un medio restrictivo a su derecho de acceso a la información, en razón que de la naturaleza de dicha información resulta **proporcional** al atender la importancia del interés jurídico tutelado en la causal de clasificación antes invocada, consistente en la prevención y persecución de los delitos.  
Por lo cual, la reserva de la información persigue el fin constitucionalmente válido de garantizar la seguridad nacional y pública del Estado mexicano, a través del combate al crimen organizado por medio de actividades de inteligencia.

En relación con el **periodo de reserva**, el segundo párrafo del artículo 99 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el Trigésimo Cuarto de los Lineamientos Generales, disponen que la información clasificada podrá permanecer con tal carácter hasta por un periodo de cinco años.

En relación con lo anterior, el artículo 100 de la Ley Federal de la materia, establece la obligación de determinar un periodo de reserva considerando el periodo máximo de la misma.

En ese sentido, toda vez que el sujeto obligado, a través de su Comité de Transparencia, clasifico la información como reservada por un periodo de **5 años**, sin embargo, si bien no motivó dicha determinación, este Instituto estima procedente ese periodo de reserva de la información toda vez que, por la naturaleza de la información, esta es actualizada constante mente, y empleada por el personal de seguridad pública para el desempeño de sus funciones.



Instituto Nacional de  
Transparencia, Acceso a la  
Información y Protección de  
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la  
solicitud:** Fiscalía General de la República  
**Folio:** 330024622002060  
**Expediente:** RRA 11901/22  
**Comisionado Ponente:** Francisco Javier Acuña  
Llamas

Ahora bien, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece lo siguiente:

“ ...

**Artículo 64.** En cada sujeto obligado se integrará un Comité de Transparencia colegiado e integrado por un número impar, designado por el titular u órgano colegiado supremo, según se trate.

El Comité de Transparencia adoptará sus resoluciones por mayoría de votos. En caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad. A sus sesiones podrán asistir como invitados aquellos que sus integrantes consideren necesarios, quienes tendrán voz pero no voto.

Los integrantes del Comité de Transparencia no podrán depender jerárquicamente entre sí, tampoco podrán reunirse dos o más de estos integrantes en una sola persona. Cuando se presente el caso, el titular del sujeto obligado tendrá que nombrar a la persona que supla al subordinado. Los miembros propietarios de los Comités de Transparencia contarán con los suplentes designados de conformidad con la normatividad interna de los respectivos sujetos obligados, y deberán corresponder a personas que ocupen cargos de la jerarquía inmediata inferior a la de dichos propietarios.

En el caso de la Administración Pública Federal, los Comités de las dependencias y entidades se integrarán de la siguiente forma:

- I. El responsable del área coordinadora de archivos o equivalente;
- II. El titular de la Unidad de Transparencia, y
- III. El titular del Órgano Interno de Control de cada dependencia o entidad.

Los integrantes del Comité de Transparencia tendrán acceso a la información para determinar su clasificación, conforme a la normatividad previamente establecida por los sujetos obligados para el resguardo o salvaguarda de la información.

El Centro de Investigación y Seguridad Nacional; el **Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia**; el Centro Federal de Protección a Personas; las Divisiones de Inteligencia e Investigación de la Policía Federal; la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada; la Unidad de Inteligencia Financiera; el Estado Mayor Presidencial, el Estado Mayor de la Defensa Nacional, el Estado Mayor General de la Armada, la Autoridad Investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica y la del Instituto Federal de Telecomunicaciones o bien, las unidades administrativas que los sustituyan, no estarán sujetos a la autoridad de los Comités de Transparencia a que se refiere el presente artículo, siendo sus funciones responsabilidad exclusiva del titular de la propia entidad o unidad administrativa.

La clasificación, desclasificación y acceso a la información que generen o custodien las instancias de inteligencia e investigación deberá apegarse a los términos previstos en la Ley General, esta Ley y a los protocolos de seguridad y resguardo establecidos para ello.



Instituto Nacional de  
Transparencia, Acceso a la  
Información y Protección de  
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la  
solicitud:** Fiscalía General de la República  
**Folio:** 330024622002060  
**Expediente:** RRA 11901/22  
**Comisionado Ponente:** Francisco Javier Acuña  
Llamas

...

De lo anteriormente transcrito se desprende que las instancias de inteligencia e investigación, entre las que se señala al Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, **no estará sujeto a la autoridad de los Comités de Transparencia**, siendo sus funciones responsabilidad exclusiva del titular de la propia entidad o unidad administrativa.

No obstante, esta situación, no le exime de la obligación de seguir el procedimiento de clasificación de la información establecido en la normativa de la materia; por lo cual, recae en el **Titular del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia**, emitir el acta mediante la cual confirma la clasificación de la información.

→ **Causal de reserva de la información en relación con el artículo 110, fracción V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.**

Ahora bien, de conformidad con la reserva aludida por el sujeto obligado, el artículo 110, fracción V, de la Ley de la materia establece lo siguiente:

**Artículo 110.** Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:

[...]

**V.** Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;

[...]

Por su parte, el artículo 113, fracción V de la *Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública*, establece lo siguiente:

**Artículo 113.** Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:

[...]

**V.** Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;

[...]

En ese mismo tenor, en el Vigésimo Tercero de los *Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas*, prevé lo siguiente:

**Vigésimo tercero.** Para clasificar la información como reservada, de conformidad con el artículo 113, fracción V de la Ley General, será necesario acreditar un vínculo, entre la persona física y la información que pueda poner en riesgo su vida, seguridad o salud.



Instituto Nacional de  
Transparencia, Acceso a la  
Información y Protección de  
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la  
solicitud:** Fiscalía General de la República  
**Folio:** 330024622002060  
**Expediente:** RRA 11901/22  
**Comisionado Ponente:** Francisco Javier Acuña  
Llamas

En virtud de lo anterior, para que se actualice la causal de clasificación de la información prevista en el artículo 110, fracción V de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública*, deberá acreditarse un vínculo, entre la persona física y la información que pueda poner en riesgo su vida, seguridad o salud.

Al respecto, el sujeto obligado en respuesta al requerimiento que le fue notificado, señaló que la identificación de estas personas físicas en cumplimiento del servicio público que tiene encomendado, permite que eventualmente puedan ser localizados mediante la búsqueda a través de herramientas como internet, redes sociales o cualquier fuente abierta y con ello ser susceptibles de amenazas, extorsiones, intimidaciones y atentados por miembros de la delincuencia, ya que el conocer y/o haber conocido información inmersa en las averiguaciones previas o carpetas de investigación, así como la derivada de las labores de inteligencia y contrainteligencia los convierte en un blanco perfecto y de fácil acceso para los grupos criminales que pretenden allegarse de datos de su interés para evadir la justicia o bien para concertar represalias por las acciones que hubiesen impactado en la comisión de los delitos asociados a los mismos.

De esa forma, si bien el sujeto obligado señaló que se cuenta con datos de personas físicas tales como nombre completo, media filiación, números telefónicos, datos biométricos y vínculos familiares, mismos que hacen plenamente identificable a los sujetos inmersos en las investigaciones, así como a su círculo de proximidad más cercano, esto es relaciones familiares, sociales o de su entorno económico; lo cierto es que dicha información constituye datos personales susceptibles de ser analizados bajo la óptica de clasificación por confidencialidad.

En consecuencia, **no se actualiza la reserva aludida por el ente recurrido en términos del artículo 110, fracción V** de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública*, por lo que hace a personas físicas.

Caso contrario ocurriría al tratarse de servidores públicos con funciones operativas, tales como los Agentes del Ministerio Público adscritos a Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, así como a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, información **que sí actualiza la reserva aludida por el ente recurrido en términos del artículo 110, fracción V** de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública*.



Instituto Nacional de  
Transparencia, Acceso a la  
Información y Protección de  
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la  
solicitud:** Fiscalía General de la República  
**Folio:** 330024622002060  
**Expediente:** RRA 11901/22  
**Comisionado Ponente:** Francisco Javier Acuña  
Llamas

Al efecto, en términos de lo previsto en el artículo 102 de la Ley de la materia, en relación con el **riesgo real, demostrable e identificable**, en un primer sentido se debe precisar que el SIICDO contiene información como el nombre y adscripción de personal operativo que en el ejercicio de sus atribuciones tienen a cargo la investigación de los delitos relacionados con la delincuencia organizada y conexos.

Al tenor de lo anterior, es de considerar que, dichos servidores públicos tienen acceso a toda aquella información generada en materia de inteligencia e insumos que son utilizados para la preservación de la seguridad nacional, por lo que dar a conocer datos sobre ellos, pone en riesgo su vida, seguridad, salud e integridad, incluso las de sus familiares.

En adición a lo anterior, la identificación de estas personas físicas y sus actividades en cumplimiento del servicio público que tiene encomendado, permite que eventualmente puedan ser localizados mediante la búsqueda a través de instrumentos como internet, redes sociales, etc.

Ello, toda vez que con la publicidad de dichos datos, conllevaría el riesgo de ser sujetos identificables y susceptibles de amenazas, extorsiones, intimidaciones y atentados por miembros de la delincuencia, ya que al conocer y/o al haber conocido de información inmersa en las averiguaciones previas o carpetas de investigación, así como la derivada de las labores de inteligencia y contrainteligencia que resulta útil para el combate a la delincuencia organizada, los hace vulnerables de represalias y objetos del crimen para la revelación de datos de su interés.

Luego entonces, es dable concluir que, al dar a conocer la información, se genera un estado de riesgo a su seguridad personal, de sus familias, amigos y todos aquellos individuos que se encuentren dentro de su círculo de proximidad y que derivado de sus actividades puedan ser identificables en circunstancias de tiempo, modo y lugar pues además de tener disponible la información institucional, les sería posible conocer su ubicación y actividades rutinarias, lo cual sería de utilidad, para interceptarlas, aspecto que de ocurrir impactaría negativamente en su seguridad, así como en el debido ejercicio de las facultades y atribuciones que en materia de investigación y persecución de los delitos que tiene el personal de esta Fiscalía.

Bajo esa tesitura, en el caso concreto como ya ha quedado apuntado, la divulgación de la información de los Agentes del Ministerio Público adscritos a Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, así como a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada actualizaría el riesgo de



Instituto Nacional de  
Transparencia, Acceso a la  
Información y Protección de  
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la  
solicitud:** Fiscalía General de la República  
**Folio:** 330024622002060  
**Expediente:** RRA 11901/22  
**Comisionado Ponente:** Francisco Javier Acuña  
Llamas

perjuicio para la vida, seguridad o salud de las personas involucradas en dicho sistema, así como para sus familias y personas cercanas a ellos.

→ **Causal de reserva de la información en relación con el artículo 110, fracción  
fracción VII, de la Ley de la materia:**

**Artículo 110.** Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:

[...]

VII. Obstruya la prevención o persecución de los delitos;

[...]

Por su parte, el artículo 113, fracción VII de la *Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública*, establece lo siguiente:

**Artículo 113.** Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:

[...]

VII. Obstruya **la prevención o persecución de los delitos**;

[...]

En ese mismo tenor, en el Vigésimo Sexto de los *Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas*, prevé lo siguiente:

**Vigésimo sexto.** De conformidad con el artículo 113, fracción VII de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, aquella que obstruya la **prevención de delitos** al obstaculizar las acciones implementadas por las autoridades para evitar su comisión, o menoscabar o limitar la capacidad de las autoridades para evitar la comisión de delitos.

Para que se verifique el supuesto de reserva, cuando se cause un perjuicio a las actividades de **persecución de los delitos**, deben de actualizarse los siguientes elementos:

- I. La existencia de un proceso penal en sustanciación o una carpeta de investigación en trámite;
- II. Que se acredite el vínculo que existe entre la información solicitada y la carpeta de investigación, o el proceso penal, según sea el caso, y
- III. Que la difusión de la información pueda impedir u obstruir las funciones que ejerce el Ministerio Público o su equivalente durante la etapa de investigación o ante los tribunales judiciales con motivo del ejercicio de la acción penal.

...



Instituto Nacional de  
Transparencia, Acceso a la  
Información y Protección de  
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la  
solicitud:** Fiscalía General de la República  
**Folio:** 330024622002060  
**Expediente:** RRA 11901/22  
**Comisionado Ponente:** Francisco Javier Acuña  
Llamas

Al respecto, es de señalar que, el SIICDO es un sistema que da cuenta de hechos posiblemente constitutivos de delito, que coadyuva en las labores de investigación y persecución de los delitos a través de la vinculación de diversos elementos útiles para la construcción de la teoría del caso.

En ese sentido, dar a conocer el Sistema solicitado daría pie a que cualquier miembro de la delincuencia organizada conociera de los diversos expedientes que tiene a su cargo y cuya difusión representaría un perjuicio al interés público al darse a conocer información que se encuentra vinculada con hechos posiblemente constitutivos de delito y la afectación que se causaría al órgano encargado de la recopilación de los elementos necesarios para su actualización, puesto que se vería afectada de diversas maneras la labor que realiza la autoridad ministerial como persecutor de delitos, como puede ser: hacer identificable al probable responsable y su posible sustracción de la justicia, así como la eliminación u ocultamiento de los elementos que prueben la responsabilidad del infractor; **actos que van en perjuicio de la labor de procuración de justicia que realiza el estado.**

Por su parte, la prevención se refiere a evitar la comisión de delitos, es decir, “por definición la palabra **prevención** hace referencia a medidas y acciones dispuestas con anticipación con el fin de evitar o impedir que se presente un fenómeno peligroso para reducir sus efectos sobre la población (...). Por consiguiente, ‘**prevención del delito**’ es tomar medidas y realizar acciones para evitar una conducta o un comportamiento que puedan dañar o convertir a la población en sujetos o víctimas de un ilícito”.<sup>7</sup>

Desde el punto de vista criminológico, **prevenir** es “conocer con anticipación la probabilidad de una conducta criminal disponiendo de los medios necesarios para evitarla. Es decir, no permitir que alguna situación llegue a darse porque ésta se estima inconveniente”.<sup>8</sup>

De esta forma, se analizarán los elementos previstos en el Vigésimo Sexto de los *Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas*, a efecto de determinar si se causa un perjuicio a las actividades de persecución de los delitos, así como si se obstruye la prevención de delitos.

<sup>7</sup> “¿Qué es la Prevención del Delito?” Municipio de Poncitlán, Jalisco. Disponible para su consulta en <http://www.poncitan.gob.mx/prevenciondeldelito/2546-que-es-la-prevencion-del-delito.html>.

<sup>8</sup> Romo Medina, Miguel. *Criminología y Derecho*. Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2003, p. 66.





Instituto Nacional de  
Transparencia, Acceso a la  
Información y Protección de  
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la  
solicitud:** Fiscalía General de la República  
**Folio:** 330024622002060  
**Expediente:** RRA 11901/22  
**Comisionado Ponente:** Francisco Javier Acuña  
Llamas

✓ **La existencia de un proceso penal en sustanciación o una carpeta de investigación en trámite:**

Al respecto, el SIICDO contiene los datos recolectados de una gran cantidad de averiguaciones previas y carpetas de investigación, mismas que se encuentran en diversos estados de sustanciación y trámite.

Asimismo, dicho Sistema se encuentra en permanente actualización derivado de las acciones llevadas a cabo por los agentes del Ministerio público de la Federación y de las Entidades Federativas, por lo que el rastreo del estado que guardan resulta materialmente imposible. En consecuencia, se **acredita el primer elemento** en análisis.

De la misma manera, es preciso señalar que el sistema que nos ocupa resulta una herramienta indispensable para la investigación que se efectúa en las diversas carpetas que se encuentran en trámite.

✓ **Que se acredite el vínculo que existe entre la información solicitada y la carpeta de investigación, o el proceso penal, según sea el caso**

El SIICDO es un sistema que da cuenta de hechos posiblemente constitutivos de delito, y coadyuva en las labores de investigación y persecución de los delitos a través de la vinculación de diversos elementos útiles para la construcción de la teoría del caso a través de los datos que integran las diversas averiguaciones previas y carpetas de investigación en trámite.

Así, dicho Sistema, da cuenta de los mecanismos utilizados para consumar delitos, los elementos y datos de prueba, el resultado obtenido, así como todos los elementos de los delitos que en su momento actualizaron las conductas desplegadas por los sujetos activos de la misma,

De igual forma, dicha información atentaría directamente en las labores implementadas para el **combate de los fenómenos delictivos**, poniendo en peligro la actividad de inteligencia criminal que conforma el sector de Seguridad Nacional en sus diferentes instancias.

Por tanto, se advierte que con la información en comento se podría provocar la comisión de prácticas delictivas, pues tiene como propósito la generación de líneas



Instituto Nacional de  
Transparencia, Acceso a la  
Información y Protección de  
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la  
solicitud:** Fiscalía General de la República  
**Folio:** 330024622002060  
**Expediente:** RRA 11901/22  
**Comisionado Ponente:** Francisco Javier Acuña  
Llamas

estratégicas, para identificar patrones y lugares con mayor abundamiento de incidencia delictiva y con ello establecer sus zonas de operación, por lo que se **acredita el segundo elemento** en análisis.

- ✓ **Que la difusión de la información pueda impedir u obstruir las funciones que ejerce el Ministerio Público o su equivalente durante la etapa de investigación o ante los tribunales judiciales con motivo del ejercicio de la acción penal.**

Al respecto, se causa un **perjuicio a las actividades de persecución de los delitos**, pues evidenciar **alguna de las averiguaciones previas, carpetas de investigación o procesos penales determinados**, afectaría la dirección y coordinación de los servidores públicos que llevan a cabo funciones sustantivas y el personal que los auxilia.

En tal virtud, se debe considerar que tratándose de averiguaciones previas/carpetas de investigación y procesos penales, la revelación de información podría impactar el proceso penal, dentro del cual, solo las partes son las legitimadas para tener información al respecto, ya que cuando quien solicita la información no es parte en la indagatoria o proceso, el Estado está obligado a contar con mecanismos menos lesivos al derecho de acceso a la justicia para proteger la difusión del contenido de las investigaciones en curso y la integridad de los expedientes.

Asimismo, se tiene que, facilitar la información contenida en el Sistema en análisis, podría **obstruir la prevención de delitos al obstaculizar las acciones implementadas por las autoridades para evitar su comisión**, o menoscabar o limitar la capacidad de las autoridades para evitar la comisión de delitos, ello, puesto que tal y como se señaló previamente, a través del CONVENIO de Colaboración que celebran la Procuraduría General de la República, la Procuraduría General de Justicia Militar y las Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia de las entidades federativas, la otrora Procuraduría General de la República, la Procuraduría General de Justicia Militar, y las Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia de las Entidades Federativas, se comprometieron a promover y participar en coordinación con el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, en la **inclusión de contenidos relativos a la prevención del delito** y en general en los diversos programas que implementen, con base en la incidencia delictiva, **para la prevención del delito**.



Instituto Nacional de  
Transparencia, Acceso a la  
Información y Protección de  
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la  
solicitud:** Fiscalía General de la República  
**Folio:** 330024622002060  
**Expediente:** RRA 11901/22  
**Comisionado Ponente:** Francisco Javier Acuña  
Llamas

Por lo tanto, **se actualiza la reserva** de la información bajo la casual en cuestión, en términos del artículo **110 fracción VII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública**.

Ahora bien, por cuanto hace a la prueba de daño prevista en el artículo 102 de la Ley de la materia, se tiene que, el **riesgo real, demostrable e identificable** se actualiza pues la divulgación de los datos contenidos en el SIICDO, representa un riesgo real al obstruir las funciones de investigación.

Lo anterior, en virtud de que, hacer del dominio público datos de los probables responsables, así como los datos de prueba ofrecidos y los productos que se puedan generar de dicha gestión, permitiría descifrar ciertas líneas de investigación y con ello anticiparse a las acciones previstas por el AMP con la finalidad de evitar la acreditación del hecho delictivo o la participación del o los probables responsables.

Bajo este argumento, la información alojada en el Sistema para el esclarecimiento de hechos posiblemente constitutivos de delitos, no solo son parte de la investigación, sino un insumo indispensable para la localización de presuntos responsables o incluso la identificación de patrones delictuales, por lo que su publicidad representa no sólo una contravención al ánimo del Legislador de salvaguardar esta información, sino un menoscabo directo a las investigaciones y por ende a la procuración de justicia.

Ello es así pues entregar la información solicitada implica exponer los datos de las actividades llevadas a cabo en cumplimiento de las funciones de las instituciones de procuración de justicia y seguridad pública que contribuyen al mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno, así como la preservación de la democracia, fundada en el desarrollo económico social y político del país y sus habitantes, por ende a la seguridad nacional del estado mexicano, ya que las referidas variables al contener datos descriptivos, revelan lugares, personas, actividades llevados a cabo en cumplimiento de las funciones de procuración de justicia de la Fiscalía General de la República, sin que exista alguna circunstancia peculiar que implique de la referida información deba ser de interés para la sociedad, pues se reitera que dicho sistema tiene por objeto analizar la tendencia delictiva en el país o para que las dependencias que participan en el combate a la delincuencia cuenten con lo necesario para operar acciones para el fortalecimiento de investigaciones a cargo de diversas autoridades, siendo por ello que de revelarse dichos rubros se podrían revelar planes estratégicos y próximos operativos de combate a la delincuencia o lugares específicos que son investigados por diversos hechos denunciados.



Instituto Nacional de  
Transparencia, Acceso a la  
Información y Protección de  
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la  
solicitud:** Fiscalía General de la República  
**Folio:** 330024622002060  
**Expediente:** RRA 11901/22  
**Comisionado Ponente:** Francisco Javier Acuña  
Llamas

Ahora bien, es menester considerar que es de interés para la sociedad que la seguridad pública en su vertiente de procuración de justicia sea efectiva, por lo que al entregar la información se provoca que cualquier persona que pudiese aprovecharse de ella, pueda estorbar las estrategias y planes diseñados para los actos de investigación y persecución de los delitos.

→ **Causal de reserva de la información en relación con el artículo 110, fracción fracción X, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.**

Ahora bien, cabe señalar que el sujeto obligado también clasificó la información peticionada, en términos del artículo 110, fracción X de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública*, el cual dispone lo siguiente:

**Artículo 110.** Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:

...

**X.** Afecte los derechos del debido proceso;  
[...]

Por su parte, la *Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública*, señala lo siguiente:

**Artículo 113.** Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:

[...]

**X.** Afecte los derechos del debido proceso;  
[...]

Al respecto, los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones pública, disponen lo siguiente:

**Vigésimo noveno.** De conformidad con el artículo 113, fracción X de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, aquella que de divulgarse afecte el debido proceso al actualizarse los siguientes elementos:

I. La existencia de un procedimiento judicial, administrativo o arbitral en trámite;

II. Que el sujeto obligado sea parte en ese procedimiento;



Instituto Nacional de  
Transparencia, Acceso a la  
Información y Protección de  
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la  
solicitud:** Fiscalía General de la República  
**Folio:** 330024622002060  
**Expediente:** RRA 11901/22  
**Comisionado Ponente:** Francisco Javier Acuña  
Llamas

III. Que la información no sea conocida por la contraparte antes de la presentación de la misma en el proceso, y

IV. Que con su divulgación se afecte la oportunidad de llevar a cabo alguna de las garantías del debido proceso.

De lo anterior se colige que, la causal de clasificación prevista en la fracción X, del artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental tiene por objeto proteger los derechos del debido proceso. En ese sentido conviene traer a colación lo manifestado por el Poder Judicial de la Federación:

**Época:** Décima Época

**Registro:** 2005401

**Instancia:** Primera Sala

**Tipo de Tesis:** Aislada

**Fuente:** Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

**Libro 2, Enero de 2014, Tomo II**

**Materia(s):** Constitucional

**Tesis:** 1a. IV/2014 (10a.)

**Página:** 1112

#### **DERECHO HUMANO AL DEBIDO PROCESO. ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN.**

El artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce el derecho humano al debido proceso al establecer que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Ahora bien, este derecho ha sido un elemento de interpretación constante y progresiva en la jurisprudencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, del que cabe realizar un recuento de sus elementos integrantes hasta la actualidad en dos vertientes: 1) la referida a las formalidades esenciales del procedimiento, la que a su vez, puede observarse a partir de dos perspectivas, esto es: a) desde quien es sujeto pasivo en el procedimiento y puede sufrir un acto privativo, en cuyo caso adquieren valor aplicativo las citadas formalidades referidas a la notificación del inicio del procedimiento y de sus consecuencias, **el derecho a alegar y a ofrecer pruebas, así como la emisión de una resolución que dirima las cuestiones debatidas** y, b) desde quien insta la función jurisdiccional para reivindicar un derecho como sujeto activo, desde la cual se protege que **las partes tengan una posibilidad efectiva e igual de defender sus puntos de vista y ofrecer pruebas en apoyo de sus pretensiones, dimensión ligada estrechamente con el derecho de acceso a la justicia**; y, 2) por la que se enlistan determinados bienes sustantivos constitucionalmente protegidos, mediante las formalidades esenciales del procedimiento, como son: **la libertad, las propiedades, y las posesiones o los derechos**. De ahí que previo a evaluar si existe una vulneración al



Instituto Nacional de  
Transparencia, Acceso a la  
Información y Protección de  
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la  
solicitud:** Fiscalía General de la República  
**Folio:** 330024622002060  
**Expediente:** RRA 11901/22  
**Comisionado Ponente:** Francisco Javier Acuña  
Llamas

derecho al debido proceso, es necesario identificar la modalidad en la que se ubica el reclamo respectivo.

Amparo en revisión 42/2013. María Dolores Isaac Sandoval. 25 de septiembre de 2013. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ausente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: David García Sarubbi.

Esta tesis se publicó el viernes 31 de enero de 2014 a las 10:05 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

De la jurisprudencia en cita se advierte que, los elementos integrantes del derecho al debido proceso se pueden observar en dos vertientes, de las cuales, la primera refiere a las formalidades esenciales del procedimiento entre las que se aprecian: el derecho a alegar y a ofrecer pruebas, así como proteger que las partes tengan una posibilidad efectiva e igual de defender sus puntos de vista y ofrecer pruebas en apoyo de sus pretensiones, dimensión ligada estrechamente con el derecho de acceso a la justicia.

Es decir, las afectaciones al debido proceso derivan de la vulneración al derecho de las personas, entre otras cuestiones, a defenderse en condiciones de efectiva paridad.

Ahora bien, el primer elemento que debe acreditarse en la causal de reserva en estudio, consiste en la existencia de un procedimiento judicial, administrativo o arbitral en trámite.

Al respecto, tal y como ha quedado referido, en atención al requerimiento de información adicional que se efectuó al sujeto obligado, en el caso en concreto, **no se advierte la existencia de un juicio judicial, administrativo o arbitral en trámite en específico** por lo que no se acredita el primer elemento de la causal en análisis y, en consecuencia, el supuesto previsto en el artículo **110, fracción X** de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública*.

→ **Causal de reserva de la información en relación con el artículo 110, fracción fracción XII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.**

Finalmente, y por lo que hace a la hipótesis normativa prevista en el artículo **110, fracción XII** de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual establece lo siguiente:



Instituto Nacional de  
Transparencia, Acceso a la  
Información y Protección de  
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la  
solicitud:** Fiscalía General de la República  
**Folio:** 330024622002060  
**Expediente:** RRA 11901/22  
**Comisionado Ponente:** Francisco Javier Acuña  
Llamas

**Artículo 110.** Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:

**XII.** Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público, y  
...

Como se observa, podrá clasificarse como reservada aquella que se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público.

Por su parte, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, se establece lo siguiente:

**“Artículo 218. Reserva de los actos de investigación**

Los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en este Código y demás disposiciones aplicables.

La víctima u ofendido y su Asesor Jurídico podrán tener acceso a los registros de la investigación en cualquier momento.

El imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, a partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su Defensor a fin de no afectar su derecho de defensa. Para los efectos de este párrafo, se entenderá como acto de molestia lo dispuesto en el artículo 266 de este Código.

En ningún caso la reserva de los registros podrá hacerse valer en perjuicio del imputado y su Defensor, una vez dictado el auto de vinculación a proceso, salvo lo previsto en este Código o en las leyes especiales.

Para efectos de acceso a la información pública gubernamental, el Ministerio Público únicamente deberá proporcionar una versión pública de las determinaciones de no ejercicio de la acción penal, archivo temporal o de aplicación de un criterio de oportunidad, siempre que haya transcurrido un plazo igual al de prescripción de los delitos de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal Federal o estatal correspondiente, sin que pueda ser menor de tres años, ni mayor de doce años, contado a partir de que dicha determinación haya quedado firme.

...



Instituto Nacional de  
Transparencia, Acceso a la  
Información y Protección de  
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la  
solicitud:** Fiscalía General de la República  
**Folio:** 330024622002060  
**Expediente:** RRA 11901/22  
**Comisionado Ponente:** Francisco Javier Acuña  
Llamas

#### **Artículo 131. Obligaciones del Ministerio Público**

Para los efectos del presente Código, el Ministerio Público tendrá las siguientes obligaciones:

...

**III.** Ejercer la conducción y el mando de la investigación de los delitos, para lo cual deberá coordinar a las Policías y a los peritos durante la misma;

...

**V.** Iniciar la investigación correspondiente cuando así proceda y, en su caso, ordenar la recolección de indicios y medios de prueba que deberán servir para sus respectivas resoluciones y las del Órgano jurisdiccional, así como recabar los elementos necesarios que determinen el daño causado por el delito y la cuantificación del mismo para los efectos de su reparación;

...

**XIII.** Determinar el archivo temporal y el no ejercicio de la acción penal, así como ejercer la facultad de no investigar en los casos autorizados por este Código;

...

**XVI.** Ejercer la acción penal cuando proceda;

..."

De lo anterior se colige que los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones aplicables.

Para efectos de acceso a la información pública gubernamental, el Ministerio Público únicamente deberá proporcionar una versión pública de las determinaciones de no ejercicio de la acción penal, archivo temporal o de aplicación de un criterio de oportunidad, siempre que haya transcurrido un plazo igual al de prescripción de los delitos de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal Federal o estatal correspondiente, sin que pueda ser menor de tres años, ni mayor de doce años, contado a partir de que dicha determinación haya quedado firme.

En esa tesitura, el interés jurídico tutelado en el artículo 110, fracción XII de la Ley de la materia, en relación con el diverso 218 del Código Federal de Procedimientos Penales, es la capacidad de la autoridad a cargo de sustanciar la averiguación previa, pues resguarda la información que le sirve para llevar a buen término la investigación





Instituto Nacional de  
Transparencia, Acceso a la  
Información y Protección de  
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la  
solicitud:** Fiscalía General de la República  
**Folio:** 330024622002060  
**Expediente:** RRA 11901/22  
**Comisionado Ponente:** Francisco Javier Acuña  
Llamas

que realiza con el propósito de resolver sobre un hecho posiblemente constitutivo de delito; en otras palabras, los preceptos referidos tienen por objeto proteger la información de las averiguaciones previas o carpetas de investigación, cuyo alcance y valoración es determinado por la autoridad ministerial que integra el expediente.

Asimismo, de la normatividad citada se observa que el Ministerio Público tiene la obligación de ejercer la conducción y el mando de la investigación de los delitos, así como determinar el archivo temporal, el no ejercicio de la acción penal, ejercer la facultad de no investigar en los casos autorizados por la ley en comento y ejercer la acción penal cuando proceda.

En ese sentido, los artículos 21 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señalan lo siguiente:

**“Artículo 21.** La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial.

...

El Ministerio Público podrá considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal, en los supuestos y condiciones que fije la ley.

...

#### **Artículo 102.**

**A.** El Ministerio Público de la Federación se organizará en una Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio.

...

Corresponde al Ministerio Público de la Federación la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal; y, por lo mismo, solicitará las medidas cautelares contra los imputados; buscará y presentará las pruebas que acrediten la participación de éstos en hechos que las leyes señalen como delito; procurará que los juicios federales en materia penal se sigan con toda regularidad para que la impartición de justicia sea pronta y expedita; pedirá la aplicación de las penas, e intervendrá en todos los asuntos que la ley determine.

De los preceptos legales transcritos anteriormente, se tiene que, la investigación y persecución de todos los delitos federales corresponde al Ministerio Público de la Federación; el cual, será el encargado de ejercer la acción penal ante los tribunales.



Instituto Nacional de  
Transparencia, Acceso a la  
Información y Protección de  
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la  
solicitud:** Fiscalía General de la República  
**Folio:** 330024622002060  
**Expediente:** RRA 11901/22  
**Comisionado Ponente:** Francisco Javier Acuña  
Llamas

En el caso en concreto y, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 218 del *Código Nacional de Procedimientos Penales*, en relación al numeral 110, fracción XII de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública*, se advierte que al ser facultad exclusiva del Ministerio Público Federal **investigar delitos federales e iniciar la carpeta de investigación correspondiente, no se actualiza la causal de reserva prevista en dicha disposición debido a que el sujeto obligado no detenta averiguación previa alguna, si no datos relacionados con diversas investigaciones, mismos que ya han actualizado la diversa causal de clasificación prevista en la fracción VII del artículo 110 de la Ley de la materia.**

Ahora bien, el sujeto obligado señaló en respuesta al requerimiento que le fue notificado, diversos datos susceptibles de ser clasificados como confidenciales, para ello, es preciso establecer que la protección de los **datos personales** se encuentra prevista en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos siguientes:

**ARTÍCULO 6.** La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.

Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

...

**II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.**

...

**ARTÍCULO 16.** Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

**Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales**, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

...



Instituto Nacional de  
Transparencia, Acceso a la  
Información y Protección de  
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la  
solicitud:** Fiscalía General de la República  
**Folio:** 330024622002060  
**Expediente:** RRA 11901/22  
**Comisionado Ponente:** Francisco Javier Acuña  
Llamas

De las normas constitucionales transcritas, se desprende que la información que se refiere al ámbito privado de las personas, así como los datos personales, debe estar protegida, en los términos y con las excepciones a los principios de tratamiento de datos que por razones de orden público fije la ley, por lo que **toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales.**

En ese tenor, y tomando en consideración que el sujeto obligado señaló que la información requerida contiene datos personales, es necesario precisar que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dispone lo siguiente:

**ARTÍCULO 113.** Se considera información confidencial

I. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable;

...

En el mismo sentido, los “Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas”, establecen lo siguiente:

**TRIGÉSIMO NOVENO** Los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable, no podrán clasificarse como confidenciales ante sus titulares.

En caso de que el titular de los datos realice una solicitud de acceso a la información donde se encuentren sus datos personales, los sujetos obligados deberán reconducir la solicitud y atenderla en términos de las leyes aplicables al ejercicio del derecho a la protección de datos personales. Dando acceso a los datos previa acreditación de la identidad o personalidad del mismo, en términos de las disposiciones normativas aplicables.

En caso de que los documentos puestos a disposición del titular de los datos contengan información pública, además de sus datos personales, no deberá testarse ésta.

Ante las solicitudes de acceso en las que se requieran datos personales de terceros que obren en una fuente de acceso público o en un registro público, los sujetos obligados en cumplimiento al principio de finalidad deberán orientar al solicitante para que acuda a aquél en el que se encuentre la información y la obtenga mediante el procedimiento establecido para tal fin.

...

Derivado de lo anterior, es considerada como **información confidencial** la que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable.



Instituto Nacional de  
Transparencia, Acceso a la  
Información y Protección de  
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la  
solicitud:** Fiscalía General de la República  
**Folio:** 330024622002060  
**Expediente:** RRA 11901/22  
**Comisionado Ponente:** Francisco Javier Acuña  
Llamas

En razón de lo previo, se efectuará el análisis de los datos susceptibles de ser clasificados.

### ✂ **Nombre completo**

El nombre, es uno de los atributos de la personalidad y la manifestación principal del derecho subjetivo a la identidad, en virtud de que hace a una persona física identificada e identificable.

### ✂ **Lugar de nacimiento, fecha de nacimiento y edad**

El lugar de nacimiento de una persona revelaría el estado o país del cual es originario un individuo, lo que permitiría relacionar a una persona física identificada con su origen geográfico o territorial.

Por otra parte, dar a conocer la fecha de nacimiento, revela la edad de la persona, lo que constituye el tiempo que ha pasado desde el nacimiento de una persona, lo que se afectaría la intimidad de la persona titular de los mismos.

### ✂ **Nacionalidad**

La nacionalidad es un atributo de la personalidad que señala al individuo como miembro de un Estado, es decir, es el vínculo legal que relaciona a una persona con su nación de origen, así, se considera como un dato personal, en virtud de que su difusión afectaría su esfera de privacidad

### ✂ **Estado civil**

Constituye un atributo de la personalidad que se refiere a la posición que ocupa una persona en relación con la familia; en razón de lo anterior, por su propia naturaleza es considerado como un dato personal.

### ✂ **Puesto de trabajo**

Dicho dato da a conocer la decisión personal de laboral en determinada profesión u oficio, asumiendo un cúmulo de tareas y responsabilidades dentro del mismo, por lo que es considerado como un dato personal.



Instituto Nacional de  
Transparencia, Acceso a la  
Información y Protección de  
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la  
solicitud:** Fiscalía General de la República  
**Folio:** 330024622002060  
**Expediente:** RRA 11901/22  
**Comisionado Ponente:** Francisco Javier Acuña  
Llamas

## ☞ **Teléfono**

Un número de teléfono es una secuencia de dígitos utilizada para identificar una línea telefónica dentro de una red telefónica conmutada y permite localizar a una persona física, por lo que se considera dato personal confidencial.

## ☞ **Media Filiación**

Consiste en la descripción precisa de los diversos rasgos de un individuo, en consecuencia, describe las características físicas de la persona, datos que lo hacen identificable.

## ☞ **Domicilio**

Es el lugar que la ley fija como asiento o sede de la persona para la producción de efectos jurídicos. Es decir, se trata de la ubicación territorial que debe tener toda persona tanto para el cumplimiento de sus deberes y obligaciones como para el ejercicio de sus derechos.

## ☞ **Vínculos familiares**

Da cuenta de las relaciones de desarrollo emocional y social de un individuo en su esfera más cercana, por lo que por su propia naturaleza es considerado como un dato personal.

## ☞ **Tendencias ideológicas y perfil ideológico**

Conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, describen y postulan modos de actuar sobre la realidad colectiva, ya sea sobre el sistema general de la sociedad o en uno o varios de sus sistemas específicos, como son el económico, social, científico-tecnológico, político, cultural, moral, religioso, medioambiental, por lo que constituye un dato personal.

## ☞ **Clase social**

Clasificación socioeconómica empleada para establecer los grupos en los que se divide la sociedad tomando en cuenta las características que tienen en común los individuos, por lo que constituye un dato personal.



Instituto Nacional de  
Transparencia, Acceso a la  
Información y Protección de  
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la  
solicitud:** Fiscalía General de la República  
**Folio:** 330024622002060  
**Expediente:** RRA 11901/22  
**Comisionado Ponente:** Francisco Javier Acuña  
Llamas

## ✂ **Reclusiones**

Dicho dato daría cuenta de los encierros forzoso de la persona en un lugar, afectando así su espera personal, por lo que constituye un dato personal.

## ✂ **Cuentas bancarias y Tarjetas de crédito**

Dicha información de los particulares es información confidencial por referirse a su patrimonio. Derivado de lo anterior, se considera que dichos datos están asociados al patrimonio de una persona física, entendiendo este como es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones correspondientes a una persona física y que constituyen una universalidad jurídica.

## ✂ **Tatuajes**

Un tatuaje es un dibujo grabado en la piel de una persona introduciendo sustancias colorantes bajo la epidermis, lo cual hace identificable a una persona, por lo que, constituye un dato personal.

## ✂ **CURP**

La Clave Única de Registro de Población (CURP) se integra por datos personales que sólo conciernen al particular titular de la misma, como lo son su nombre, apellidos, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y sexo. Dichos datos, constituyen información que distingue plenamente a una persona física del resto de los habitantes del país, por lo que la CURP está considerada como información confidencial.

## ✂ **Licencia de conducir**

La licencia de conducir de una persona física se trata de un documento confidencial; únicamente el número de licencia para conducir no es susceptible de clasificación, ya que a partir del mismo no podría obtenerse algún otro dato respecto de su titular.

## ✂ **Fotografía**

La fotografía constituye la reproducción fiel de la imagen de una persona, objeto de la cosa, obtenida en papel a través de la impresión en un rollo o placa por medio de cámara fotográfica, o en formato digital, que constituye la reproducción de las imágenes captadas. En este sentido, la fotografía constituye el primer elemento de la



Instituto Nacional de  
Transparencia, Acceso a la  
Información y Protección de  
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la  
solicitud:** Fiscalía General de la República  
**Folio:** 330024622002060  
**Expediente:** RRA 11901/22  
**Comisionado Ponente:** Francisco Javier Acuña  
Llamas

esfera personal de todo individuo, en cuanto instrumento básico de identificación y proyección exterior y factor imprescindible para su propio reconocimiento como sujeto individual; por lo tanto, es un dato personal en términos del artículo 113, fracción I de la Ley de la materia.

### ✎ **Alias y/o seudónimo**

Expresión que significa *por otro nombre* y se antepone al sobrenombre con que es conocida una persona, generalmente famosa o popular, es el nombre que se da a una persona en vez del suyo propio y que, generalmente, hace referencia a algún defecto, cualidad o característica particular que lo distingue, así al estar asociada al nombre de una persona, es un dato personal en términos del artículo 113, fracción I de la Ley de la materia.

### ✎ **Firma autógrafa**

La firma es un signo o escritura manuscrita, normalmente formada por nombre, apellidos y rúbrica, que una persona pone al pie de un escrito o de un documento para identificarse, autorizar el documento, expresar que aprueba su contenido, por lo que es considerada como un atributo de la personalidad de los individuos, en virtud de que a través de esta se puede identificar a una persona, por lo que se considera un dato personal y, dado que para otorgar su acceso se necesita el consentimiento de su titular, es información clasificada como confidencial conforme al artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

### ✎ **Datos biométricos**

Los datos biométricos son aquellos datos personales referidos a las características físicas, fisiológicas o conductuales de una persona que posibiliten o aseguren su identificación única; tales como Huella dactilar, reconocimiento facial, reconocimiento del iris, reconocimiento de la geometría de la mano, reconocimiento de retina, reconocimiento vascular, reconocimiento de firma y reconocimiento de escritura; por lo que es información clasificada como confidencial conforme al artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

### ✎ **Religión**

Referencia a la profesión de fe o de confesión religiosa que sigue o prefiere una persona; conjunto de creencias, de normas de comportamiento y de ceremonias de



Instituto Nacional de  
Transparencia, Acceso a la  
Información y Protección de  
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la  
solicitud:** Fiscalía General de la República  
**Folio:** 330024622002060  
**Expediente:** RRA 11901/22  
**Comisionado Ponente:** Francisco Javier Acuña  
Llamas

oración que son propias de un determinado grupo humano y con las que el hombre reconoce una relación con la divinidad, así, con base en la libertad religiosa, implica un dato personal asociado al derecho a la intimidad y a la vida privada, por lo que debe protegerse con fundamento en el 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Ahora bien, por lo que hace a la clasificación de la información, es preciso traer nuevamente a colación lo establecido en la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública*:

**Artículo 102.** En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión.

Para motivar la confirmación de la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, se deberán señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento. Además, el sujeto obligado deberá, en todo momento, aplicar una prueba de daño.

Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, deberá señalarse el plazo al que estará sujeto la reserva.

[...]

**Artículo 104.** Los documentos clasificados parcial o totalmente deberán llevar una leyenda que indique tal carácter, la fecha de la clasificación, el fundamento legal y, en su caso, el periodo de reserva.

[...]

Como se aprecia, en los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá emitir una resolución mediante la cual deberá confirmar, modificar o revocar la decisión.

Para motivar la confirmación de la clasificación de la información, se deberán señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que, en el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento.

En razón de lo anterior, es que el sujeto obligado deberá emitir a través de su Comité de Transparencia, el Acta a través de la cual de forma fundada y motivada confirme la clasificación de los datos personales previamente referidos, en términos del artículo





Instituto Nacional de  
Transparencia, Acceso a la  
Información y Protección de  
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la  
solicitud:** Fiscalía General de la República  
**Folio:** 330024622002060  
**Expediente:** RRA 11901/22  
**Comisionado Ponente:** Francisco Javier Acuña  
Llamas

113, fracción I de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública*, así como el Sistema Integral de Información Contra la Delincuencia Organizada, en términos del artículo 110 fracción VII de la misma Ley; y el nombre de servidores públicos con funciones operativas, tales como los Agentes del Ministerio Público adscritos a Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, así como a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, en términos del artículo 110, fracción V de la Ley referida.

Por todo lo anterior, con fundamento en el artículo 157, fracción III de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública*, este Instituto considera procedente **MODIFICAR** la respuesta emitida por el ente recurrido, e **instruirle** a efecto de que a través de la persona Titular del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, emita el acta debidamente fundada y motivada, por medio de la cual clasifique el nombre de servidores públicos con funciones operativas, tales como los Agentes del Ministerio Público adscritos a Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, así como a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, en términos del artículo 110, fracción V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como, la información contenida en el Sistema Integral de Información Contra la Delincuencia Organizada, en términos del artículo 110 fracción I y VII de la misma Ley; y los datos personales analizados, en términos del artículo 113, fracción I de dicha Ley.

En este entendido, deberá hacer entrega del acta correspondiente, a través del medio de entrega elegido por la parte recurrente, esto es, en electrónico, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia la Plataforma Nacional de Transparencia.

Por lo expuesto y fundado, el Pleno de este Instituto:

## **RESUELVE**

**PRIMERO.** Con fundamento en lo que establece el artículo 157, fracción III de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública*, se **MODIFICA** la respuesta emitida por parte de la Fiscalía General de la República, en los términos de los considerandos de la presente resolución.

**SEGUNDO.** Con fundamento en los artículos 157, párrafo segundo de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública*, se instruye al sujeto obligado para que, **en un término no mayor de diez días hábiles**, contados a partir del día



Instituto Nacional de  
Transparencia, Acceso a la  
Información y Protección de  
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la  
solicitud:** Fiscalía General de la República  
**Folio:** 330024622002060  
**Expediente:** RRA 11901/22  
**Comisionado Ponente:** Francisco Javier Acuña  
Llamas

hábil siguiente al de su notificación, cumpla con la presente resolución, y en términos del artículo 159, párrafo segundo, de la misma Ley, informe a este Instituto sobre su cumplimiento.

**TERCERO.** Se hace del conocimiento del sujeto obligado que, en caso de incumplimiento, parcial o total, de la resolución dentro del plazo ordenado, se procederá en términos de los artículos 21, fracciones V y XIX y 174 de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública*.

**CUARTO.** Se instruye a la Secretaría Técnica del Pleno, para que, a través de la Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades de este Instituto, verifique que el sujeto obligado cumpla con la presente resolución y dé el seguimiento que corresponda, de conformidad con lo previsto en 168, 169, 179 y 171 de *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública*.

**QUINTO.** Se instruye a la Secretaría Técnica del Pleno que, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45, fracción IV, de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública*, expida certificación de la presente resolución, para proceder a su ejecución.

**SEXTO.** Se hace del conocimiento del hoy recurrente que, en caso de encontrarse insatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el Poder Judicial de la Federación, con fundamento en lo previsto en el artículo 165, de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública*.

**SÉPTIMO.** Con fundamento en el artículo 149, fracción II de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública*, notifíquese la presente resolución al hoy recurrente en la dirección señalada para tales efectos, y a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, al Comité de Transparencia del sujeto obligado, a través de su Unidad de Transparencia.

**OCTAVO.** Se pone a disposición del hoy recurrente para su atención el teléfono 01 800 TELINAI (835 4324) y el correo electrónico [vigilancia@inai.org.mx](mailto:vigilancia@inai.org.mx) para que comunique a este Instituto cualquier incumplimiento a la presente resolución.

**NOVENO.** Háganse las anotaciones correspondientes en los registros respectivos.

Así lo resolvieron por mayoría, y firman, los Comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Blanca



Instituto Nacional de  
Transparencia, Acceso a la  
Información y Protección de  
Datos Personales

**Sujeto obligado ante el cual se presentó la  
solicitud:** Fiscalía General de la República  
**Folio:** 330024622002060  
**Expediente:** RRA 11901/22  
**Comisionado Ponente:** Francisco Javier Acuña  
Llamas

Lilia Ibarra Cadena, quien emite voto disidente, Francisco Javier Acuña Llamas, Adrián Alcalá Méndez, quien emite voto particular, Norma Julieta Del Río Venegas y Josefina Román Vergara, siendo ponente el segundo de los señalados, en sesión celebrada el 19 de octubre de 2022, ante Ana Yadira Alarcón Márquez Secretaria Técnica del Pleno.

**Blanca Lilia Ibarra  
Cadena**  
Comisionada Presidenta

**Francisco Javier Acuña  
Llamas**  
Comisionado

**Adrián Alcalá  
Méndez**  
Comisionado

**Norma Julieta Del Río  
Venegas**  
Comisionada

**Josefina Román  
Vergara**  
Comisionada

**Ana Yadira Alarcón  
Márquez**  
Secretaria Técnica del Pleno

Esta foja corresponde a la resolución del recurso de revisión RRA **11901/22**, emitida por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el **19 de octubre de 2022**

